

Álvaro De Jesús CANO FORTICH

TRABAJO SOCIAL Y
REAGRUPACIÓN FAMILIAR DE
PERSONAS EXTRANJERAS EN
NAVARRA

TFG/*GBL* 2014

Grado en Trabajo Social

Trabajo de Fin de Grado
Gradu Bukaerako Lana

***TRABAJO SOCIAL Y REAGRUPACIÓN FAMILIAR
DE PERSONAS EXTRANJERAS EN NAVARRA***

Álvaro de Jesús CANO FORTICH

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIEN FAKULTATEA

**UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA**

Estudiante / Ikaslea

Álvaro de Jesús CANO FORTICH

Título / Izenburua

Trabajo Social y reagrupación familiar de personas extranjeras en Navarra

Grado / Gradu

Grado en Trabajo Social

Centro / Ikastegia

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales / Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea
Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa

Directora / Zuzendaria

Esther BAZTÁN CRESPO

Departamento / Saila

Departamento de Trabajo Social/ Gizarte Laneko Saila

Curso académico / Ikasturteakademikoa

2013/2014

Semestre / Seihilekoa

Primavera / Udaberrik

Resumen

La Reagrupación Familiar es un derecho que tienen las personas que han emigrado a otro país a reunirse con sus familiares siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa de extranjería. En España son muchas las personas inmigrantes que han utilizado este medio para reunirse con sus familiares en el país de acogida. Este estudio empírico se centra en la importancia de la Reagrupación Familiar como elemento integrador de las personas inmigrantes y en la importancia del Trabajo Social en el proceso de Reagrupación Familiar. Para la realización de este trabajo se han utilizado varias técnicas de investigación como la revisión bibliográfica, la realización de una historia de vida a una persona que ha ejercido la Reagrupación Familiar y la realización de una entrevista a la Trabajadora Social del Servicio Social de Base de la Mancomunidad de Valtierra, Arguedas Cadreira, Milagro y Villafranca, que interviene con población inmigrante.

Palabras clave: Trabajo social; reagrupación familiar; inmigración; normativa de extranjería; integración.

Abstract

The family regrouping it's a right that people who have migrated from other countries have to reunite with their relatives who have met the established requirements in the foreign guidelines. In Spain, there are many immigrants who have used this way of reuniting with their relatives in the fostering country. This empirical study centers in the importance of family regrouping as an integrating element of immigrants and it's importance of the Social Work in the process of family Regrouping. For the achievement of this work, there have been used some investigative techniques such as bibliographical review, the realization of a life history to a person who has practiced the Family regrouping and has done social worker interview from the Social work service of the Valtierra, Argueda Cadreira, Milagro y Villafranca communities, which intervene in the immigrant population.

Keywords: family reunion; immigration; Alien's Law; Social Work; integration

ÍNDICE

Introducción	1
1. Objetivos	3
2. Marco teórico	4
2.1. Formas familiares y migración	4
2.2. La integración, un proceso compartido	10
2.3. Normativa de extranjería en España y reagrupación familiar	11
2.4. Trabajo Social y proceso de reagrupación familiar	17
2.5. La inmigración en Navarra, algunos datos de interés	21
3. Metodología	27
4. Resultados obtenidos	30
4.1. Importancia de la reagrupación familiar en los procesos de integración de las personas extranjeras en Navarra y la importancia del Trabajo Social en dichos procesos	30
4.2. Importancia del marco normativo de extranjería relacionado con la reagrupación familiar	33
4.3. Implicaciones de la reagrupación familiar para la población extranjera	35
4.4. Papel de los y las profesionales del Trabajo Social en los procesos de reagrupación familiar	38
Conclusiones y cuestiones abiertas	41
Referencias bibliográficas	45
Anexos	48
Anexo I: Guía de preguntas para la realización de una historia de vida a una persona que ha ejercido el derecho de reagrupación familiar en Navarra.	48
Anexo II: Transcripción literal de la historia de vida realizada a una persona que ha ejercido el derecho de reagrupación familiar en Navarra.	51
Anexo III: Guía de preguntas para la entrevista en profundidad a la trabajadora social de la Mancomunidad de Servicio Social de base de Arguedas, Valtierra, Milagro, Villafranca y Cadreita, sobre temas relacionados con el Trabajo Social y la reagrupación familiar a personas inmigrantes	63
Anexo IV: Anotaciones tomadas de la entrevista en profundidad realizada a la trabajadora social de la mancomunidad del Servicio Social de base de Arguedas, Valtierra, Milagro, Villafranca y Cadreita, sobre temas relacionados con el Trabajo Social y la reagrupación familiar a personas inmigrantes.	65
Anexo V: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y sus modificaciones	70
Anexo VI: Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y sus modificaciones.	92

INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al Trabajo de Fin de Grado que se realiza en el cuarto curso, octavo semestre de Grado en Trabajo Social. Se presenta en la Universidad Pública de Navarra, en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.

El Trabajo de Fin de Grado constituye el documento con el que concluyen dichas enseñanzas oficiales y es necesario para la obtención del título de Grado en Trabajo Social. En él se deben aplicar y desarrollar las competencias, los contenidos formativos, las habilidades y las capacidades adquiridas durante el periodo universitario.

En este caso concreto, el objeto de estudio del presente Trabajo Fin de Grado es la reagrupación familiar de las personas extranjeras residentes en Navarra como elemento integrador en sus procesos de incorporación social. Desde un principio me resultó interesante tomar como área de trabajo esta población porque, además de tener una presencia significativa en Navarra, presenta una serie de necesidades específicas y de oportunidades para la sociedad en su conjunto, así como importantes retos para el Trabajo Social.

Respecto a la reagrupación familiar, es un derecho que tienen las personas extranjeras, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos contemplados en la normativa de extranjería. Constituye una oportunidad de reunirse con sus seres queridos; favoreciendo a la vez un mayor y más adecuado proceso de integración.

Por otra parte, el Trabajo Social tiene un papel importante en los procesos de ayuda, orientación, asesoramiento y acompañamiento social a estas personas, y concretamente en los procesos de reagrupación familiar. De manera específica, los y las profesionales de los Servicios Sociales de base de Navarra y de las Unidades de Barrio de Pamplona intervienen en dichos procesos.

Por ese motivo, considero de gran valor descubrir no solo el papel de las trabajadoras y los trabajadores sociales en relación a la reagrupación familiar de personas extranjeras, sino también conocer su valoración respecto al proceso.

Así mismo, me resulta de gran interés conocer la opinión de las personas extranjeras reagrupantes y comparar ambos resultados con el fin de extraer conclusiones de interés para nuestra profesión en este ámbito específico de trabajo.

Por tanto, se trata de un estudio empírico sobre el Trabajo Social y la reagrupación familiar de las personas extranjeras en Navarra.

El trabajo se estructura en los siguientes apartados:

- En primer lugar, se muestran los objetivos del estudio; tanto el objetivo general como los objetivos específicos.
- En segundo lugar, se expone el marco teórico, donde se describen y analizan las diferentes y más habituales formas familiares existentes en la actualidad relacionándolas con los movimientos migratorios; la integración como objetivo compartido de población inmigrante y autóctona; el marco normativo de extranjería relacionado específicamente con la reagrupación familiar, el Trabajo Social como profesión de ayuda en este proceso y, por último, la aproximación cuantitativa a la población inmigrante residente en Navarra.
- En tercer lugar, se detalla la metodología empleada que contiene las técnicas de investigación utilizadas para la realización de este trabajo. En concreto son la revisión y análisis de la bibliografía relacionada con este tema; el análisis cuantitativo de la población extranjera empadronada en Navarra; el análisis cualitativo basado en una historia de vida a una persona que ha ejercido el derecho a la reagrupación familiar y en una entrevista en profundidad a una trabajadora social de un Servicio Social de base de Navarra.
- Por último se exponen los principales resultados obtenidos de la investigación, las conclusiones extraídas, las referencias bibliográficas y los anexos.

1. OBJETIVOS

A continuación se presentan una serie de objetivos que se pretenden conseguir con la realización de este Trabajo de Fin de Grado. En primer lugar me he planteado un objetivo general que es el siguiente:

- Analizar la importancia de la reagrupación familiar en los procesos de integración de las personas extranjeras en Navarra y la importancia del Trabajo Social en dicho proceso.

Este objetivo general se concreta en otros objetivos de carácter específico, que constituyen la guía y el eje del trabajo, y que son los siguientes:

- Conocer y analizar la importancia del marco normativo de extranjería relacionado con la reagrupación familiar para el Trabajo Social y para las personas extranjeras que pretenden reagrupar a sus familiares.
- Analizar las implicaciones que tiene la reagrupación familiar para la población extranjera.
- Analizar el papel de los y las profesionales del Trabajo Social en el proceso de reagrupación familiar.

2. MARCO TEORICO

En el presente apartado se analizan las distintas formas familiares existentes más habituales y su relación con la migración; la integración como objetivo compartido de población inmigrante y autóctona; la normativa de extranjería Española que regula la reagrupación familiar; la relación existente entre el Trabajo Social y la intervención con la población extranjera y algunos datos de interés relacionados con el perfil sociodemográfico de la población extranjera residente en Navarra.

2.1. Formas familiares y migración

Antes de hablar sobre las diferentes formas familiares existentes en la actualidad y la relación con la migración, es importante definir algún concepto clave, como es el de familia. Son muchos los autores y las autoras que se han interesado en el estudio de la familia y que han realizado una conceptualización de ésta. Uno de estos autores es Pichón-Riviére (1997), quien define la familia como:

“Una estructura social básica que se configura por el interjuego de roles diferenciados (padre, madre, hijo), y enunciado en los niveles o dimensiones comprometidos en su análisis, podemos afirmar que la familia es el modelo natural de la situación de interacción grupal” (59).

Por otra parte, Clavijo (2002) conceptualiza a la familia como ese lugar donde concurren un conjunto de personas que están vinculadas por lazos de sangre, afecto, matrimoniales, sociales, culturales, económicos, contractuales y convivenciales, con el objetivo de satisfacer las necesidades del grupo y de cumplir con una serie de roles que están determinados por la sociedad.

La familia es el núcleo, la base de la sociedad. Es una institución donde se comparten valores, conocimientos y experiencias. La familia es un lugar donde se inicia la construcción de la personalidad y del carácter de los hijos e hijas. Es un lugar donde los sentimientos están presentes en las relaciones que tienen los padres y las madres con sus descendientes, los hijos e hijas entre sí, y los cónyuges. Constituye un entorno

donde se produce una socialización, una primera aproximación a la realidad, a la esfera privada, a la sociedad en sí.

La vida en familia es muy importante ya que es un medio donde se comparten y se reproducen diferentes conocimientos y enseñanzas vitales entre sus miembros. La familia constituye un espacio de enriquecimiento mutuo a través de la transmisión de valores, estilos de vida, de formas de actuar, comportamiento, etc. Todas estas cuestiones van dirigidas a la consecución de un objetivo general, que es conseguir que todos los miembros tengan un buen desempeño y rendimiento tanto en el hogar como en la sociedad.

Al hablar de la familia hay que destacar que existe una gran variedad de estilos de familia. No hay una homogeneidad con respecto a la estructura familiar, ni al número de personas que la componen, así como tampoco hay una regla estipulada respecto a su forma de vida familiar. No obstante, la vida en familia es de vital importancia para el desarrollo personal de sus miembros y las familias actualmente se estructuran de diferentes maneras y tienen diferentes normas internas. En este sentido, no existe una familia prototípica.

Los diferentes cambios sociales están provocando una transformación significativa respecto a la manera de entender la cada vez mayor variedad de tipos de familias y de su aceptación social.

“Uno de los hechos socioculturales más destacado por la mayoría de los científicos sociales en las tres últimas décadas, es la importancia y radicalidad de las transformaciones que se están produciendo en las sociedades contemporáneas en el ámbito del parentesco en general, y en la institución familiar en particular, dando lugar a formas de relación y convivencia que no sólo afectan a las prácticas, sino también a las formas de pensar, representar y hablar del universo familiar, es decir, a la construcción de las identidades familiares” (Rivas,2007,111).

Según Musitu, Herrero y Cantera (2004), tradicionalmente la familia se ha clasificado en dos tipos, la familia nuclear o conyugal, formada por la esposa y el marido y por los hijos e hijas que no han alcanzado la adultez, y por otro lado la familia extensa

formada por diferentes miembros de la familia de distintas generaciones. Estos tipos de familia actualmente no son la norma, es necesario señalar que hoy en día existen muchas más formas de composición familiar que resulta adecuado analizar. Muchas de estas han venido influenciadas por procesos transversales como la globalización o los movimientos migratorios, lo que hace que cada vez más nos encontremos con distintas formas de familias que conviven actualmente en Navarra.

Echando una mirada al pasado podemos observar que existía una cierta interiorización del modelo tipo de familia, transferida por las figuras paternas o maternas y acompañadas por una construcción social. Este modelo de familia tradicional la constituyen los padres, las madres y los hijos e hijas. Dentro de esta estructura se presentan una serie de relaciones claramente diferenciadas por roles que han venido siendo establecidos previamente y se han basado en el modelo patriarcal, la firmeza del matrimonio, y el control y autoridad de parte de los padres para con sus ascendientes, a la vez acompañados de la pasividad por parte de los hijos e hijas.

Con el paso del tiempo, este modelo de familia ha venido evolucionando y se ha venido dando un cambio de paradigma, que ha permitido que hayan empezado a surgir otro tipo de familias basadas más en las libertades de elección, en los sentimientos y en la igualdad de género. Todos estos cambios se han producido por los avances y los cambios de mentalidad que se han presentado en la sociedad (Bestard, 2012).

Entre las formas de familia que están teniendo más presencia en la sociedad actual, encontramos por una parte las familias monoparentales y monomarentales, que son aquellas donde solo vive una madre o un padre con al menos un hijo o hija menor de edad. También encontramos las familias reconstituidas, es decir, aquellas que después de una separación, divorcio o muerte del o la cónyuge rehacen su vida con el padre o la madre que tienen a los hijos o hijas a cargo y la nueva pareja. Por otra parte, están aquellas familias cada vez más numerosas y habituales que conviven sin que existan lazos matrimoniales, aunque sí están unidas por vínculos afectivos.

Por último, se encuentran las familias unipersonales que están compuestas por una sola persona usualmente joven y soltera, aunque también se ven personas adultas separadas o divorciadas y personas ancianas viudas (Musitu y Cava, 2001). Cabe

destacar que además de los tipos de familia anteriormente descritos, la familia nuclear sigue siendo la más habitual y continúa teniendo una mayor presencia en la sociedad actual.

Un cambio relevante respecto a las formas de familia tradicional es la presencia de parejas homosexuales que deciden conformar una estructura familiar. Además, con la adopción de hijos e hijas y la inseminación artificial, se están configurando familias menos convencionales donde prevalece la igualdad y la libertad de elección de las personas. Esta circunstancia ha aumentado considerablemente la diversidad y pluralidad de familias presentándose así un cambio de paradigma con respecto a las familias tradicionales.

Otro de los procesos importantes que ha tenido cierta repercusión en el cambio de la estructura familiar ha sido los movimientos migratorios. La migración es un acontecimiento que siempre ha estado presente a lo largo de la historia; siempre ha habido hombres y mujeres que han dejado el lugar habitual de residencia para asentarse en otro diferente. Cabe destacar que en la mayoría de los casos las migraciones se han realizado con el objetivo de mejorar la calidad de vida y buscar más oportunidades de progreso, aunque también hay que decir que en muchas ocasiones las personas han tenido que abandonar su lugar de origen debido a dificultades personales, económicas, sociales, políticas, entre otras.

“Por migración entendemos los desplazamientos de personas que tienen como intención un cambio de residencia desde un lugar de origen hasta otro de destino, atravesando algún límite geográfico que generalmente es una división político administrativa” (Ruiz, 2002, 13)

España ha pasado de ser un país emigrante a un país de acogida de inmigrantes (Ariño, 2003). Con la crisis del petróleo en 1973 muchas personas de origen español que habían emigrado a otros países empezaron a retornar. Desde 1990 la inmigración en España empezó a ser significativa y en la actualidad todavía es un país que cuenta con numerosa presencia de población inmigrante.

Muchas han sido las personas que han decidido o que han tenido que abandonar su país de origen por diferentes causas; ya sea personales, económicas, políticas, sociales,

etc., y se han asentado en el territorio español formando en la mayoría de los casos un tipo de estructura familiar. Son hombres y mujeres que viven en el país de acogida sin familias o con una parte reducida de las mismas. A este tipo de familia se le denomina familia transnacional.

“Se entiende por transnacionalismo aquel cruce imaginario y físico de las fronteras nacionales en la formación de campos sociales de identidad y acción, que acompañan desde un inicio a la globalización, la cual está estrechamente conectada con la intensificación de las migraciones internacionales e internas” (Guarnizo, 2004,238).

La familia transnacional, como apunta Bryceson y Vuorela (2002), es aquella cuyos miembros viven repartidos en distintas zonas y países, pero mantienen la unidad emocional, económica y de ayuda suficiente para que se definan a sí mismos como familias. Estas familias están cada vez más presentes en nuestra sociedad, y esta situación constituye para ellos y ellas un reto, como es el vivir y adaptarse a un país diferente y a la vez mantener otras relaciones, contactos y otra vida diferente en sus países de origen.

Gracias a la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación, y de los medios de transportes, las familias migrantes están en contacto con el resto de familiares que se encuentra en el país de origen. Estos elementos han permitido que las funciones de socialización, de transferencia de valores y normas, y de protección y cuidado se sigan transmitiendo en la familia a pesar de que los miembros no estén reunidos de manera física.

También el envío de remesas y productos y el intercambio de pautas, costumbres y estilos de vida permiten que se produzca una repercusión en la economía de la familia, así como también en el ámbito cultural y social, tanto en las familias que se encuentran en el país de origen como en las que están en el de destino.

Por otra parte, cabe destacar que en este tipo de familias muchas veces las relaciones y los roles dan un giro debido a las circunstancias producidas por la migración. En muchos casos son los padres o madres, abuelos o abuelas u otros familiares los que se dedican a cuidar a sus hijos e hijas. Por ejemplo, en el caso de la migración

latinoamericana en España es la mujer quien inicia la migración a otro país para posteriormente realizar la reagrupación familiar. En otros casos también los hermanos o hermanas mayores tienen que asumir roles y responsabilidades referentes al cuidado de sus hermanos o hermanas menores. Es decir, las migraciones han hecho que la estructura familiar tradicional y las relaciones y roles intrínsecos en éstas hayan cambiado.

Mientras finaliza el proceso de reagrupación familiar, la meta de la persona que se encuentra en el país de acogida consiste en mantener un buen vínculo afectivo; es decir, tener una buena relación con aquellos miembros que se encuentra en el país de origen. Paralelamente, también luchan para que los miembros de su familia vivan de la mejor manera, sin que les falte nada. Por ello utiliza el envío de remesas de dinero como elemento importante para que sus familiares mantengan una buena calidad de vida.

El impacto de la familia transnacional no es ajeno a otros factores que tienen que ver con el contexto económico, político y social. En este sentido, mientras algunas respuestas familiares, correspondientes a migrantes con menos recursos, se encuentra estigmatizadas y asociadas con la exclusión social, los vínculos transnacionales entre personas con actividad económica y sociales relevantes son calificados como *“familia Postmoderna”* (Parella y Cavalcanti, 2009).

Por último cabe destacar que la toma de decisiones con respecto a todo este proceso relacionado con la migración no corresponde a un solo miembro de la familia, sino que todas estas idas y vueltas hacen parte de un consenso entre los integrantes de la unidad familiar para lograr un solo objetivo claramente identificado, el de vivir mejor.

Pero también hay que señalar que en muchas ocasiones son los padres o las madres quienes toman las decisiones de emigrar a otros países sin pedir la opinión de sus hijos e hijas o de sus cónyuges, y sin tener en cuenta las repercusiones personales y sociales que este hecho puede conllevar. Solamente tienen su visión puesta en el futuro, en trasladarse a otra sociedad que cuente con mayores posibilidades para tener un futuro mejor y con mejores recursos que permitan que los miembros tengan un buen desarrollo en todos los ámbitos vitales.

2.2. La integración, un proceso compartido

Para las familias transnacionales el objetivo último es llegar a reunirse en el país de acogida y lograr una integración en la sociedad receptora. La reagrupación familiar es importante para el conjunto de sus miembros pero no es el único objetivo. Su deseo es mejorar las condiciones de vida y para ello es esencial lograr una buena adaptación a la sociedad y vivir con los recursos adecuados de la mejor manera posible. Es decir, conseguir una plena integración social. No obstante, la integración no es un proceso que afecte únicamente a la población extranjera que llega. El concepto y la práctica tienen un sentido mucho más amplio.

“La integración es el proceso de adaptación mutua de dos segmentos socioculturales mediante el cual: 1) la minoría se incorpora a la sociedad receptora en igualdad de condiciones, derechos, obligaciones y oportunidades con los ciudadanos autóctonos, sin que ello suponga la pérdida de sus culturas de origen; y 2) la mayoría acepta e incorpora los cambios normativos, institucionales e ideológicos necesarios para que lo anterior sea posible (Giménez, 1933, citado en Malgesini y Giménez, 1997,204)

Este enfoque se aleja de posiciones donde solo una de las partes, que coincide con la minoritaria, es la que debe realizar el esfuerzo en el proceso de integración. No se trata de una responsabilidad del grupo minoritario respecto al mayoritario, sino que es una responsabilidad compartida del conjunto de la sociedad y afecta a toda la ciudadanía.

No hay que confundir la integración con asimilación, ya que las personas inmigrantes pueden tener un sentido de pertenencia al grupo o la sociedad de acogida y no necesariamente tienen que perder su cultura. Lo ideal no es que la persona que llegue a un país diferente al suyo adquiera todas sus costumbres, creencias, ideas, cultura, etc., sino que teniendo en cuenta todas estas cuestiones logre participar y hacer parte de la sociedad de acogida en igualdad de condiciones sin necesidad de dejar a un lado las pautas culturales interiorizadas en el país de origen.

En las reagrupaciones familiares hay que tener especial atención a este proceso ya que la llegada de varios miembros de la familia a la vez intensifica el esfuerzo e implica una responsabilidad en la incorporación de estas personas en diversos ámbitos como el educativo o el laboral, entre otros.

2.3. Normativa de extranjería en España y reagrupación familiar

El Estado español cuenta con un marco normativo de extranjería que contempla dos regímenes bien diferenciados: por un lado, el régimen general y por otro el régimen comunitario. La aplicación de estas normativas a las personas extranjeras residentes en España, y concretamente en Navarra, depende de su origen y del origen de sus familiares con derecho a acogerse a la reagrupación.

La normativa que regula el régimen general es la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y sus modificaciones. Por otro lado, el régimen comunitario es regulado por el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre la entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea y de otros estados parte en el acuerdo sobre el espacio económico europeo y sus modificaciones¹.

La reagrupación familiar de personas extranjeras es un proceso que tiene gran importancia y repercusión en todos los ámbitos vitales de quienes lo llevan a cabo, pero además influye de diferentes formas en la sociedad de acogida. Se entiende por reagrupación familiar el proceso que realiza una persona que reside en un país del que no es nacional con el objetivo de que se reúnan con ella los miembros más próximos de su familia residentes en un país diferente (Labaca, 2005).

El procedimiento de reagrupación familiar está contemplado en ambos regímenes y es diferente en cuanto a requisitos y tramitación. Si la persona reagrupante es ciudadano o ciudadana de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, estaremos hablando de una reagrupación familiar de régimen comunitario y, por tanto, está regulada por el Real Decreto 240/2007. Por el contrario, si la persona reagrupante no es nacional de algún

¹ Ambas normativas se encuentran en los anexos V y VI de este trabajo.

Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de la Confederación Suiza, se tratará de una reagrupación familiar de régimen general. En este caso, la normativa de extranjería que la regula es la Ley Orgánica 4/2000 y sus modificaciones.

El presente trabajo se enmarca principalmente en esta última Ley Orgánica de reagrupación familiar de personas extranjeras extracomunitarias cuyo régimen de aplicación es el régimen general. Por ese motivo, se detallan con mayor profundidad aspectos relevantes de la misma. No obstante, es preciso aproximarse a la normativa comunitaria para estudiar aspectos de interés que difieren de la del régimen general en esta materia.

En el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/2000, se determinan algunas cuestiones referentes al derecho a la intimidad familiar. Las personas extranjeras tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en esta Ley Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los tratados internacionales suscritos por España. Del mismo modo, se puntualiza que las personas extranjeras residentes en España tienen derecho a reagrupar a sus familiares. También en este mismo artículo se hace un inciso, para explicar que él o la cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus familiares agrupados, conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición.

Por otra parte, en el artículo 17 de esta misma Ley Orgánica, se detallan las personas familiares que tienen derecho a ser reagrupadas por la persona extranjera residente no comunitaria. Textualmente dice:

“1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguientes familiares:

- a) *“El cónyuge del residente, si no existe separación de hecho o de derecho, y si el matrimonio no se ha celebrado en fraude de ley, y en ningún caso se podrá reagrupar a más de un cónyuge aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial.*
- b) Los hijos del residente y de cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o personas con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades

debido a su estado de salud. Si se trata de hijos de uno solo de los cónyuges se requerirá que además, ejerza en solitario la patria de potestad o la custodia y estén efectivamente a su cargo.

- c) Los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. También se puede reagrupar en caso excepcional al ascendiente menor de sesenta y cinco años cuando concurren razones de carácter humanitario, si se cumplen las demás condiciones previstas en esta Ley” (LO 4/2000, 1141)

El permiso de residencia de las personas reagrupadas depende de la autorización de residencia y trabajo de la persona reagrupante. Transcurridos cinco años o adquirido un permiso de trabajo, podrán adquirir el permiso de residencia independiente (Vazquez, 2009). No obstante, existen otras circunstancias contempladas en la normativa de extranjería que permiten la adquisición de una autorización independiente.

“El cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia independiente cuando disponga de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades. En caso de que la cónyuge reagrupada fuera víctima de violencia de género, sin necesidad de que se haya cumplido el requisito anterior, podrá obtener la autorización de residencia y trabajo independiente, desde el momento en que se hubiera dictado a su favor una orden de protección o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género” (Ley 4/2000, art. 19.2).

Además, las personas descendientes de reagrupantes también podrán tener una autorización de residencia independiente siempre que cumplan dos requisitos: ser mayores de edad y disponer de medios económicos suficientes (Ley 4/2000, art. 19.3).

En caso de muerte de la persona reagrupante, los familiares reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente en las condiciones que se determinen. (Ley 4/2000, art. 19.5)

Cabe destacar que en la reforma del año 2009 de esta Ley todas las personas mayores de 16 años reagrupadas contarán de forma automática con la autorización para trabajar. También se contempla la autorización de residencia a las personas extranjeras víctimas de violencia de género en situación jurídico-administrativa irregular que denuncien agresión y obtengan una orden de protección.

Por último, se determinan en el artículo 18 los requisitos que las personas extranjeras deben cumplir para la reagrupación familiar. En primer lugar, deben haber obtenido la renovación de su autorización residencial inicial, acreditar la disponibilidad de vivienda en buenas condiciones de habitabilidad y acreditar medios económicos suficientes para cubrir las necesidades.

El Real Decreto 240/2007 que regula la reagrupación familiar de régimen comunitario, en su artículo 18.1 detalla que los miembros de la familia de una persona ciudadana de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con ella, podrán residir en España por un periodo superior a tres meses. Estando sujetos a la obligación de solicitar y obtener una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea, la cual tendrá una duración de cinco años desde su fecha de expedición, y cuya solicitud para la obtención de esta tarjeta deberá realizarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en España.

Otro requisito que deben cumplir las personas reagrupantes pertenecientes a este régimen es la presentación del pasaporte válido y en vigor, documentación acreditativa de la existencia del vínculo familiar, certificado de registro del familiar ciudadano al que acompañan o con quien van a reunirse. También deberán presentar la documentación acreditativa en el caso de que la persona solicitante de la tarjeta viviera a cargo del ciudadano de la Unión Europea o Estado Miembro parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo del que es familiar y tres fotografías recientes a color, fondo blanco, tamaño carné.

Por otra parte en el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, se establece los miembros de la familia de la persona ciudadana miembro de la Unión Europea o de otro estado

parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que pueden ser reagrupadas. Literalmente contempla los siguientes:

- a) *“A su cónyuge, siempre y cuando no haya recaído el acuerdo o declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal.*
- b) *A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en el registro público establecido a esos efectos....*
- c) *A sus descendientes directos, y los de sus conyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal, o se haya cancelado la inscripción registrada de pareja, así como también menores de 21 años y a mayores de dicha edad que vivan a su cargo o incapaces.*
- d) *A sus ascendientes directos, y a los de su conyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre y cuando no haya recaído el acuerdo o declaración de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o separación legal, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja”(RD 240/2007, art. 2, 8559).*

Los trámites de reagrupación familiar en régimen general se inician en España, en las Oficinas de Extranjería. En el caso concreto de Navarra en la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno ubicada en la Avda. Guipúzcoa, 40 de Pamplona. Por el contrario, las reagrupaciones familiares en régimen comunitario se inician en los Consulados de España en los países de origen lo que agiliza el procedimiento.

Por otro lado, los requisitos que se exigen para la reagrupación del cónyuge y de sus descendientes en el régimen general son más exigentes que en el caso del régimen comunitario. Por ejemplo, para poder reagrupar en este régimen se exige que la persona reagrupante cuente con una autorización de residencia de al menos un año de duración habiendo residido de manera regular al menos un año antes de ejercer el derecho a la reagrupación familiar. Además, debe acreditar recursos económicos suficientes para su mantenimiento y el de su familia, una vivienda que reúna condiciones de habitabilidad, un empleo estable y continuo durante los últimos seis meses y el año siguiente a la reagrupación familiar y tener cubierta la asistencia

sanitaria, entre otros. Cumplir con estos requisitos es prácticamente imposible en el momento actual de crisis económica que azota al país.

Por otra parte, cabe destacar que los requisitos para la reagrupación familiar en este mismo régimen se endurecen considerablemente en el caso de las personas ascendientes. Para poder reagrupar al padre o madre de una persona extranjera residente en España, debe esperar un mínimo de cinco años y ser titular de una autorización de larga duración. Además, los y las ascendientes deben ser mayores de 65 años y demostrar que viven a cargo de sus familiares residentes en España

La normativa de extranjería de régimen comunitario ofrece más ventajas que la de régimen general en relación a la reagrupación familiar. Los requisitos que se establecen son menores, lo cual es un elemento facilitador para el proceso pero también diferenciador según el régimen de aplicación. Por esto, considero que deberían existir las mismas oportunidades, derechos y deberes tanto para las personas que no hacen parte de los Estados miembros de la Unión Europea como las que sí pertenecen a dichos Estados.

Se aprecia que este régimen, a diferencia del general, no es necesario esperar cierto tiempo para poder reagrupar a los familiares, acreditar una determinada solvencia económica, ni tampoco una vivienda. También la edad máxima de los ascendientes reagrupables es de 21 años a diferencia del régimen general que es de 18 años.

Otro aspecto que podemos ver es que existe una mayor complejidad en el régimen general respecto al comunitario en cuanto a la tramitación de la reagrupación familiar. Además de tener que presentar el impreso de solicitud, el pasaporte y la autorización de residencia en vigor, se deben presentar una serie de documentos acreditativos de los recursos económicos disponibles, de una vivienda adecuada y de vínculos familiares. Otro caso es el del régimen comunitario, cuyo trámite es más rápido y menos complicado, ya que como se ha mencionado se inicia directamente en el Consulado de España y en el país de origen.

A modo de conclusión, se puede destacar que la reagrupación familiar para las personas cuyo régimen de aplicación es el régimen comunitario es más favorable, menos complicado y más ágil en la tramitación que en el régimen general. La

normativa de extranjería presenta una clara diferenciación según el régimen de aplicación. A mi parecer debería haber una unificación de criterios, donde todas las personas contaran con los mismos derechos, deberes y obligaciones. Actualmente lo que se puede ver es que existe una diferenciación entre las personas según su país de origen, situación que se puede traducir en una discriminación.

2.4. Trabajo Social y proceso de reagrupación familiar

El Trabajo Social es una profesión de ayuda personal, grupal, familiar y comunitaria, que tiene como objetivo promover un cambio tanto para las personas como para la sociedad en sí. A través de la utilización de una serie de técnicas, herramientas y recursos los trabajadores y las trabajadoras sociales buscan ayudar a las personas a que se empoderen y puedan satisfacer sus necesidades a la misma vez que integrarse y formar parte activa de la sociedad.

Es importante destacar la relación directa que existe entre la población inmigrante y los y las trabajadoras sociales. La inmigración es una realidad que ha estado presente desde hace mucho tiempo en la sociedad y es un ámbito de intervención que tiene mucha repercusión e importancia en nuestra profesión. Es por eso que desde el Trabajo Social se interviene con estas personas que han emigrado a un nuevo país y, en ocasiones, no cuentan con los suficientes recursos humanos, materiales, sociales, etc., para poder desenvolverse de la mejor manera en la sociedad de acogida.

Como el tema central de este trabajo es la reagrupación familiar de personas extranjeras, cabe señalar que en estos procesos también se ven implicados de diferentes maneras el conjunto de profesionales del Trabajo Social. Antes de continuar abordando el tema del Trabajo Social y el proceso de reagrupación familiar resulta adecuado explicar algunos conceptos implícitos que se dan en la relación de esta profesión con este proceso.

“El Trabajo Social es la actividad de ayuda técnica y organizada, ejercida sobre las personas, los grupos y las comunidades, con el fin de procurar su más plena realización y mejor funcionamiento social, y su mayor bienestar, mediante la activación de los recursos internos y externos,

principalmente los ofrecidos por los Servicios Sociales y por las instituciones y sistemas del Bienestar Social” (Moix, 2004: 131-132).

Los y las profesionales del Trabajo Social se centran en la atención de las necesidades que la población presenta, para lo cual es importante conocer en profundidad a las personas y saber cómo perciben el mundo, cuáles son sus sentimientos, qué necesidades precisan o cuáles son sus propósitos, entre otras cuestiones. Su función es aportar todas las herramientas necesarias para que las personas por sí mismas logren cambiar esa situación de necesidad, respetando su identidad, sus valores, sus ideas, sin imponer modelos de vida. Es la misma persona la que debe definir cómo quiere vivir.

En el caso de la intervención con la población inmigrante, el Trabajo Social también tiene un papel importante en las diferentes etapas del proceso migratorio: la acogida, la adaptación al nuevo entorno y la integración. Hay que destacar que la relación de ayuda desde el Trabajo Social con la población inmigrante se debe realizar teniendo en cuenta la interculturalidad.

“Lo intercultural supone la interacción entre dos identidades que se dan mutuamente sentido, en un contexto a definir cada vez. Es un proceso ontológico y dinámico entre dos portadores de culturas diferentes. No solamente al profesional le faltan conocimientos sobre la cultura del otro (individuo, familia, grupo), que se manifiestan a nivel de los códigos de comunicación verbales y no verbales, normas, aspiraciones y soportes simbólicos inscritos en situaciones de la vida cotidiana, sino que es también portador de su propia cultura muy diferente y a menudo más valorizada” (Cohen-Emerique, 1984, 187).

Por esto, en la intervención desde el Trabajo Social es necesario conocer la cultura de la otra persona, tener presente que su identidad está marcada por otro contexto. Lo ideal es respetar su forma de ver la vida, sus costumbres, sus valores, sus normas, en general, su cultura; pero sin dejar a un lado la cultura del país de acogida.

También es importante que los y las profesionales del Trabajo Social que trabajan en contextos multiculturales adquieran y complementen sus competencias, habilidades y

técnicas. Por una parte, es necesario que estén en continua formación cuestiones relacionadas con las migraciones: su historia, evolución, repercusiones, datos cuantitativos o ventajas y desventajas, entre otros aspectos. También es necesario que conozcan más a fondo sobre los Servicios Sociales, las instituciones y los recursos existentes en materia de inmigración. Por último es necesario que tengan un conocimiento y un manejo del marco normativo de extranjería existente y de las diferentes pautas, formas de vida, costumbres, valores y creencias de las diferentes culturas más representadas que están presentes en nuestra sociedad.

Por otra parte, es de gran valor trabajar en la mejora de la metodología utilizada para la intervención social con población inmigrante. Es decir conocer todas las herramientas y los recursos existentes destinados a la ayuda a esta población. Para esto también hay que trabajar para la mejora de las habilidades y formas de actuación necesarias para realizar un proceso de ayuda adecuado; entre otras se destaca la observación, el trato con las personas, la escucha activa, el acompañamiento, el asesoramiento, la coordinación o la derivación, entre otras.

Otra de las competencias que son importantes para los y las profesionales del Trabajo Social en la intervención con población inmigrante es el conocimiento y el aprendizaje de las diferentes formas de comunicación y expresión existente entre la diversidad de culturas con las que se trabaja. Cabe destacar existe una importante diversidad: lingüística, de expresión verbal y no verbal, de forma de comunicación. Es necesario tenerlo en cuenta para facilitar el entendimiento mutuo entre persona usuaria y trabajador o trabajadora social en la intervención.

Por último, cabe destacar que esta profesión también interviene en diferentes procesos familiares, como es la reagrupación familiar, que es un derecho que tienen las personas inmigrantes a reunirse con sus familiares directos (padres, madres, hijas, hijos y cónyuges), siempre y cuando cumplan por una serie de requisitos estipulados en la normativa de extranjería.

Es importante anotar que este proceso no es fácil ni para la persona reagrupante ni para sus familiares, ya que resulta complejo alejarse por un tiempo determinado de los familiares más cercanos y a la vez establecerse e integrarse en una nueva sociedad que

cuenta con diferente cultura, diferente composición y diferentes formas de vida. Para los familiares también suele ser difícil no tener cerca a su familiar y adaptarse a la nueva forma de vida.

La reagrupación familiar es un proceso complicado que requiere para las personas implicadas un acompañamiento y ayuda para que se produzca de la mejor manera posible y tenga unas repercusiones positivas. Es aquí donde el Trabajo Social resulta necesario e importante. Proporciona información, asesoramiento y apoyo en todas las etapas que las personas inmigrantes van pasando desde que llegan a el país de acogida hasta que logran reunirse con sus familiares y posteriormente también es un recurso que pueden utilizar.

También cabe destacar que los y las profesionales del Trabajo Social que desempeña su labor en los Servicios Sociales de base o en las Unidades de Barrio de Pamplona se encargan de realizar un trámite obligatorio para la presentación de la solicitud de reagrupación familiar. Se trata del informe de adecuación de la vivienda. El artículo 55 del Real Decreto 557/2011, que regula la Ley Orgánica 4/2000 y sus modificaciones, contempla que la Comunidad Autónoma deberá emitir ese informe, o la Corporación Local siempre que así haya sido establecido por la Comunidad Autónoma. En el caso de Navarra son las Corporaciones Locales quienes lo realizan y en su mayoría son los Servicios Sociales de dichas Corporaciones.

Como se ha mencionado anteriormente, uno de los requisitos para que las personas extranjeras puedan reagrupar a sus familiares es tener una vivienda en buenas condiciones de habitabilidad, bien en régimen de alquiler o de compra. Es por eso que los o las trabajadoras sociales juegan un papel directo en este objetivo, realizando la revisión de la vivienda donde la unidad familiar tiene pensado convivir y llevando a cabo un posterior informe donde se detallan las características de dicha vivienda y si cumplen o no con las condiciones adecuadas para poder vivir en ella.

Por todo lo anterior, para los y las profesionales de Trabajo Social la intervención con la población inmigrante y específicamente en el proceso de reagrupación familiar constituye un reto, ya que no es fácil conocer y manejar los distintos conceptos que tienen que ver la inmigración y la reagrupación familiar, no es tan sencillo conocer en

profundidad la normativa de extranjería. Resulta complejo saber todos los recursos que existen en materia de Servicios Sociales para esta población y coordinarse con las instituciones que trabajan en este ámbito. Tampoco es sencillo realizar una intervención desde el Trabajo Social utilizando las diferentes herramientas, técnicas y habilidades que permitan desempeñar una buena labor teniendo en cuenta a la vez el enfoque intercultural mencionado anteriormente.

Por último, cabe destacar que es un reto la intervención desde el Trabajo Social con población inmigrante y en el proceso de reagrupación familiar porque actualmente existe una gran variedad de personas de diferentes culturas, que tienen formas de pensar diferentes, costumbres variadas, diferentes idiomas y formas de expresión, diversidad de creencias e idearios y que presentan una serie de necesidades que cada vez están en continuo dinamismo. Es decir, cada persona es un mundo y es difícil pero no imposible abordar toda su integralidad atendiéndola como sujeto de intervención.

2.5. La inmigración en Navarra, algunos datos de interés

A continuación se presentan una serie de tablas y gráficos que aportan datos de interés sobre la población objeto de estudio, cuya fuente es el Instituto Nacional de Estadística. En ellas se detallan algunos aspectos significativos de la población extranjera en España y en Navarra.

Tabla 1. Población en España y Navarra distribuida por sexo. Año 2013

TOTAL ESPAÑA			COMUNIDAD FORAL DENAVARRA		
Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
47.129.783	23.196.386	23.933.397	644.477	320.933	323.544

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del INE

Tabla 2. Distribución de la población extranjera en España y Navarra por sexo. Año 2013

	Total Extranjeros		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL ESPAÑA	5.546.238	2.854.720	2.691.518
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	67.892	35.896	31.996

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del INE

Según los datos expuestos, se aprecia que el colectivo de personas extranjeras representa el 11,7 % del total de la población de España y el 10,5 % del conjunto de la Comunidad Foral de Navarra. Por lo tanto, la población extranjera residente en Navarra es ligeramente inferior a la del resto del Estado. Por otra parte, en lo referente a la distribución por sexo, se observa que el porcentaje de hombres extranjeros en España es de 11,2 % y el de mujeres es de 12,3 %. Tomando esta misma variable en Navarra, vemos que el total de hombres es el 49,7 % y el de mujeres es el 50,2 %. Es decir, no existe una diferencia significativa entre ambos sexos.

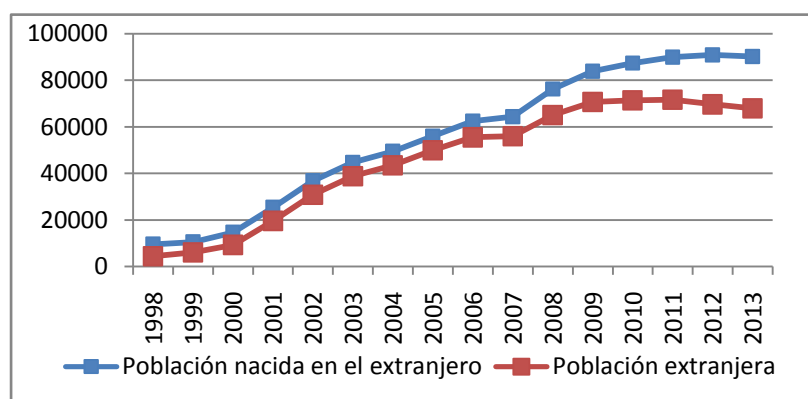
Tabla 3. Distribución de la población en España y Navarra nacida en el extranjero por sexo (2013)

	Nacidos en el Extranjero		
	Ambos sexos	Hombres	Mujeres
TOTAL ESPAÑA	6.640.536	3.327.728	3.312.808
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	90.073	45.732	44.341

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del INE

Al comprar las tablas 2 y 3 se observa que la población extranjera residente en España y en Navarra es menor que el total de personas nacidas en el extranjero. Uno de los motivos que puede explicar esta circunstancia es la obtención de la nacionalidad española de la población extranjera y, no tanto, el retorno a sus países de origen, como se cree.

Figura 1. Evolución de la población extranjera y nacida en el extranjero en Navarra (1998-2013)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del INE

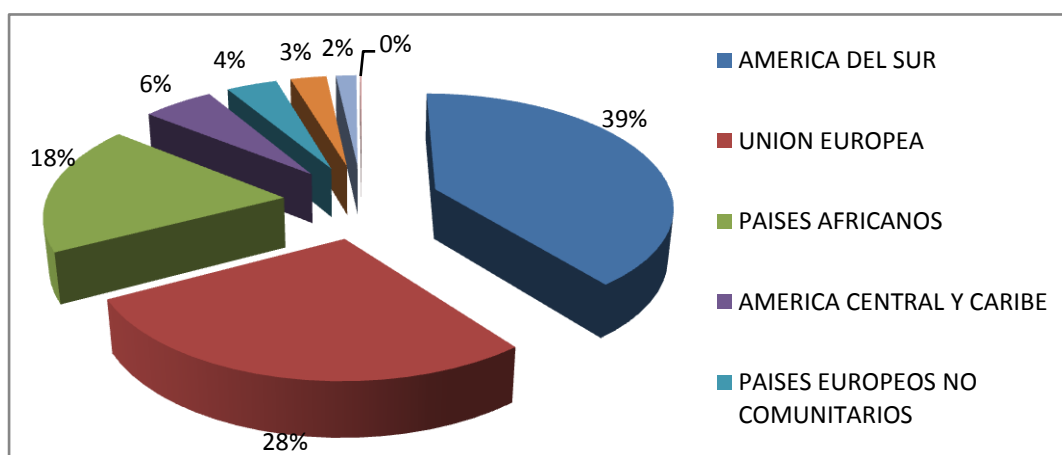
De la figura anterior, referente a la evolución de la población nacida en el extranjero y la población extranjera en Navarra podemos observar que en ambos casos se encuentra en aumento hasta el año 2007.

En el caso de población extranjera, se puede ver que en el año 2007 y 2008 se ha mantenido la población y, a partir de ese último año, empieza a aumentar hasta el año 2010. Ya en el año 2011 hasta la actualidad se ha presentado un ligero descenso. Por otra parte, observamos que en los años 2006 y 2007 la población nacida en el extranjero se ha mantenido, presentando a partir de ese último año un aumento considerable hasta el 2011, año desde el cual esta población empieza a mantenerse hasta la actualidad.

Este ligero descenso de población extranjera encuentra su explicación en la actual coyuntura económica. La grave situación de crisis ha ralentizado la llegada de personas extranjeras a España y Navarra en busca de empleo y ha provocado el retorno de otras a sus países de origen u a otros con el fin de mejorar sus condiciones de vida.

Por otro lado, la adquisición de la nacionalidad española por parte de la población extranjera empadronada en Navarra, como se ha apuntado anteriormente, es otra explicación al mencionado descenso en las cifras durante los últimos años.

Figura 2. Procedencia de las personas inmigradas en Navarra



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del INE

La anterior figura nos permite analizar el porcentaje de la población extranjera en Navarra según zonas de origen, en donde se aprecia que la mayoría de personas

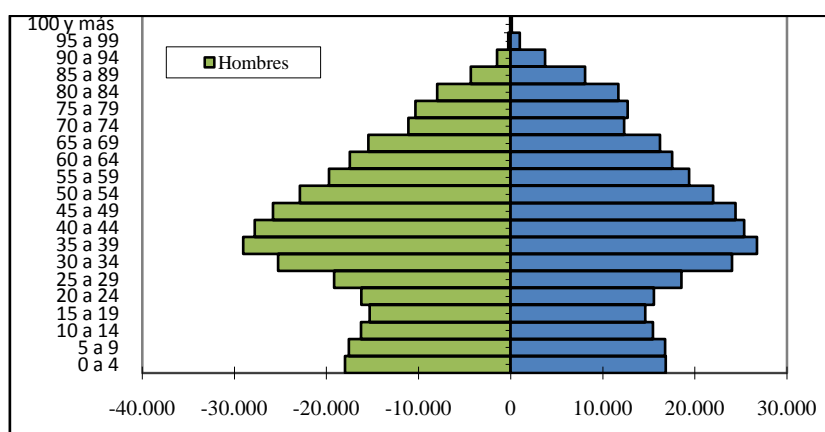
extranjeras respecto al total provienen de América del sur con un 39%, de otros países de la Unión Europea con un 28% y de países africanos con un 18%.

Tabla 4. Distribución de la población inmigrante en Navarra según país de nacimiento

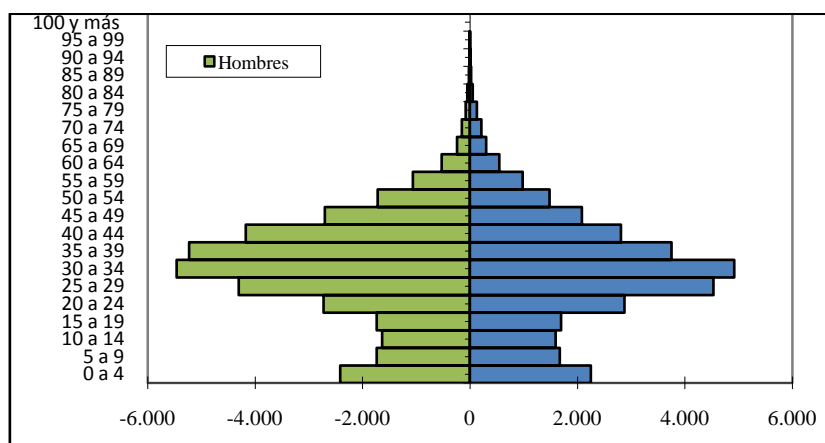
NAVARRA	TOTAL	HOMBRES	MUJERES
Ecuador	15.058	7.485	7.573
Marruecos	9.876	5.994	3.882
Rumanía	7.279	3.779	3.500
Colombia	6.984	2.953	4.031
Bulgaria	6.694	3.538	3.156
Portugal	4.997	3.120	1.877
Perú	3.381	1.525	1.856
Bolivia	3.163	1.171	1.992

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del INE

En la actualidad la principal nacionalidad de las personas extranjeras residentes en Navarra es la ecuatoriana con un 16,7%, seguida de la marroquí (10,9%), la rumana (8%) y la colombiana (7,7%). A continuación se sitúan las personas procedentes de Bulgaria (7,4%), Portugal (5,5%), Perú (3,7%) y Bolivia (3,5%). Por otra parte se puede observar que no existe una diferencia considerable entre hombres y mujeres residentes en Navarra de nacionalidad ecuatoriana, rumana, búlgara, peruana y boliviana. Esta situación es diferente con personas de nacionalidad marroquí ya que hay un 60,6 % de hombres y un 39,3% de mujeres, lo cual se debe a entre otras cuestiones a que son los hombres los que suelen emigran en primer lugar al territorio español para después reagrupar a sus cónyuges y a sus descendientes. Lo contrario sucede en el caso de la población latinoamericana donde hay un porcentaje mayor de mujeres que hombres, ya que son las mujeres las que emprenden la migración y después realizan la reagrupación familiar.

Figura 3. Distribución total de la población Navarra por edad y sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del INE

Figura 4. Distribución de la población extranjera en Navarra por edad y sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes del INE

En estas dos últimas figuras se deduce que la mayor cantidad de población de Navarra por edad y sexo oscila entre las edades de 30 a 49 años y que existe una paridad en cuando a la distribución de edad y sexo. Por otro lado, se puede ver que la mayor cantidad de población extranjera en Navarra por edad y sexo se encuentra entre los 25 y los 44 años siendo mayormente mujeres entre los 20 y los 35 años y hombres desde los 35 a 44 años.

También se observa que el 16,7% de la población extranjera en Navarra tiene menos de 15 años. Por el contrario, apenas el 1,9% tiene más de 65 años, Por otra parte de la población Navarra el 12,2 % tiene menos de 15 años y el 17,8 % tiene más de 65 años. De lo anterior podemos destacar que hay un 4,5 % más de población extranjera que navarra con menos de 15 años y que hay una diferencia considerable de población

navarra con más de 65 años con respecto a población extranjera en Navarra con esta misma franja de edad.

Por tanto, la población extranjera es una población joven que ha rejuvenecido considerablemente la pirámide de población de la Comunidad Foral de Navarra. Las consecuencias de la llegada de población extranjera en cuanto a su impacto demográfico son muy positivas. Con su llegada han contribuido al aumento de la población, al incremento de la tasa de natalidad y, en definitiva, al rejuvenecimiento de la población.

3. METODOLOGÍA

Para la realización de este trabajo en primer lugar se ha utilizado como técnica de investigación la revisión bibliográfica, ya que antes de empezar con una investigación siempre es necesario revisar lo que otros autores y autoras han escrito sobre el tema a investigar. Esto nos sirve como referencia para observar cómo se han emprendido esas investigaciones y qué resultados y conclusiones alcanzaron que sean relevantes para el nuevo trabajo de investigación (Buendía, 1998).

A través de la lectura de diferentes libros, documentos en Internet y datos recogidos del INE, he obtenido importante información sobre el tema objeto de estudio. También resultaron útiles los conocimientos adquiridos a través de las asignaturas cursadas a lo largo del Grado y la experiencia personal como parte de un proceso de reagrupación familiar. Con toda la información y los datos obtenidos por medio de estas fuentes de información he llevado a cabo una labor de comprensión y síntesis.

Teniendo en cuenta los objetivos de este Trabajo de Fin de Grado, se ha considerado más oportuno la utilización de dos técnicas cualitativas de investigación, como son la historia de vida y la entrevista en profundidad.

Por una parte consideré oportuno realizar una historia de vida a una persona que hubiera ejercido el derecho a la reagrupación familiar, ya que su experiencia personal constituye un elemento que aporta una visión más amplia del tema teniendo en cuenta diferentes puntos de vista. Según Pujadas (1992) la historia de vida es un relato íntegro autobiográfico, que el investigador obtiene a través de entrevistas cuyo fin es mostrar el testimonio subjetivo de una persona en que se recogen los acontecimientos y las valoraciones que la persona realiza de la propia vida. También utilicé esta herramienta para ampliar la riqueza de información y aportar valor añadido al análisis de los objetivos a alcanzar con este trabajo.

Para la realización de la historia de vida, elaboré un guion previo dividido por las diferentes etapas vitales (niñez, juventud, adultez) y por otros temas de interés como son el proceso de reagrupación familiar y la normativa de extranjería. La grabación de la historia de vida tuvo una duración aproximada de 45 minutos y se realizó en el hogar

de la persona entrevistada. Para su registro he utilizado una grabadora de voz, ya que con la utilización de este medio resulta más fácil el posterior análisis de los datos obtenidos. Cabe destacar que antes de realizar la grabación le informé a la entrevistada sobre la utilización de la grabadora de voz, y accedió sin ningún reparo. La fecha en la que se llevó a cabo el relato de vida fue el 22 de abril de 2014.

Por otra parte también se llevó a cabo una entrevista en profundidad a una trabajadora social de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Arguedas, Valtierra, Milagro, Villafranca y Cadreita que entre otros aspectos también interviene con población extranjera. Reguera (2008) define la entrevista en profundidad como el periodo de recolección de datos a partir de preguntas, que se utiliza en una investigación social, en la que se explora una unidad de análisis específica, para conseguir un conocimiento total de la misma. Esta entrevista es un elemento interesante para conocer la percepción de la profesión de Trabajo Social en la reagrupación familiar y la valoración de este proceso. Para su realización se realizó previamente una guía de preguntas relacionadas con el servicio en que trabaja, el proceso de reagrupación familiar y la normativa de extranjería.

Hay que señalar que solicité a la trabajadora social la posibilidad de grabar la entrevista para facilitar el posterior manejo de los datos obtenidos, pero la entrevistada no permitió que se le grabase, aludiendo este hecho a asuntos personales. También es importante anotar que en algunas preguntas relacionadas con la normativa de extranjería y la reagrupación familiar no contestó nada por desconocimiento en estos temas. El lugar de realización fue el despacho de Trabajo Social ubicado en el Ayuntamiento de Valtierra y la duración de la entrevista fue aproximadamente de 45 minutos. La entrevista se desarrolló el miércoles día 23 de abril de 2014.

Después de la realización de la recogida de información a través de la revisión bibliográfica, la historia de vida y la entrevista en profundidad, se llevó a cabo una tarea de interpretación y reflexión de todos los datos obtenidos para posteriormente reflejarlos en el análisis cualitativo, los resultados y las conclusiones.

En la siguiente tabla consta el resumen del proceso metodológico empleado.

Tabla 5. Resumen del proceso metodológico.

Proceso de revisión documental y bibliográfica	Febrero – Marzo 2014
Proceso metodológico cuantitativo: -Consulta y explotación datos INE	Marzo 2014
Proceso metodológico cualitativo: -Desarrollo de la historia de vida - Desarrollo de la entrevista en profundidad	Abril 2014 22 de abril 2014 23 de abril 2014
Proceso de redacción del estudio del Trabajo de Fin de Grado	Mayo de 2014

Fuente: Elaboración propia.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

En este apartado se incluyen los principales resultados obtenidos del estudio realizado. En él se incluye la importancia de la reagrupación familiar en los procesos de integración de las personas extranjeras en Navarra y la importancia del Trabajo Social en dicho proceso; la importancia del marco normativo de extranjería relacionado con la reagrupación familiar para el Trabajo Social y para las personas extranjeras; las implicaciones que tiene la reagrupación familiar para la población extranjera y para la población autóctona y el papel de los y las profesionales del Trabajo Social en el proceso de Reagrupación Familiar.

4.1. Importancia de la reagrupación familiar en los procesos de integración de las personas extranjeras en Navarra y la importancia del Trabajo Social en dichos procesos

La familia constituye un lugar donde sus miembros desempeñan una serie de roles, donde se producen interacciones marcadas por los sentimientos y la posición que cada persona ocupa en dicho grupo. Además de esto, es un espacio de socialización, de aprendizaje y de apoyo.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede ver que la reagrupación familiar representa un elemento importante y clave para que las familias inmigrantes puedan lograr una estabilidad emocional, un respaldo y protección; así como también adquiere un gran valor para una buena integración en la sociedad de acogida.

Las personas que emigran a otros países en busca de un mejor futuro o por otras circunstancias, se dan cuenta que el país al que llegan es diferente al suyo con respecto a las relaciones personales, la cultura, la forma de hacer las cosas, etc. Llegan con mucho entusiasmo y estímulo de asentarse y adaptarse de la mejor manera posible a ese nuevo entorno, pensando en satisfacer no solo sus necesidades sino las de su familia. Desde ese momento empieza toda una aventura como es la búsqueda de un trabajo y una vivienda para poder conseguir, en primer lugar, mejorar la situación de su familia ya que en muchas ocasiones las familias no cuentan en los países de origen con suficientes recursos o con muchas oportunidades para poder vivir de la

mejor manera posible. Y en general buscan conseguir ese fin último como es el reunirse con ellos en el país donde se ha asentado.

Este recorrido para estas personas es muy complicado ya que al estar tan lejos de su familia el sentimiento de soledad los invade y les es muy difícil integrarse de la mejor manera a todo lo que conlleva la esfera pública, ya que su pensamiento gira en torno a su familia y las relaciones sociales en el país de acogida son escasas. También hay que destacar que para las familias que se quedan en su país, la separación de su ser querido puede repercutir en su vida personal y en otros ámbitos. Lo anterior se puede ver en un fragmento de la entrevista realizada a una mujer que reagrupó a su esposo e hijas:

“Sabes, yo cuando llegué lo que quería era trabajar y poder traerlos ellos, la verdad que poco me interesé en el país, en cómo era, ni nada, pero luego ya más adelante ya me iba interesando más. Sí, sí, porque la verdad es que yo llegué y trabajé interna, no salía ni nada. Pero luego ya iba saliendo y me iba gustando más. Hasta el día de hoy me gusta ¿sabes?”.

Cuando se consigue finalizar con éxito el proceso de reagrupación familiar, tanto para la persona reagrupante como para la familia que se reúne con ella, esta nueva situación representa un elemento integrador, aunque no exento de dificultades. Por una parte, el volver a estar en familia hace que la persona que han realizado la reagrupación de sus familiares se sienta respaldada, querida y acompañada, lo cual contribuye a la mejora de su calidad de vida y de sus relaciones sociales.

Por otra parte, cabe destacar que para las familias reagrupadas el estar de nuevo juntas, facilita la inserción en las diferentes instituciones más importantes de la sociedad, como son la escuela y el trabajo; pero también ayuda en la integración en otros ámbitos como por ejemplo, el de las relaciones sociales

Por último, y no por eso menos importante, cabe anotar que a pesar de que para la mayoría de personas la reagrupación familiar es un elemento importante para la integración en la sociedad, en otras ocasiones resulta dificultoso. Son muchas las personas que al llegar y encontrarse con diferentes pautas culturales les es difícil

entender la nueva cultura o en otros casos la sociedad de acogida les dificulta su plena integración. También, está el caso de los y las ascendientes reagrupados que se les hace más difícil debido a su edad la integración a una nueva vida, a una nueva cultura, a una nueva sociedad.

En relación a la importancia del Trabajo Social en el proceso de reagrupación familiar, en primer lugar es necesario recalcar el papel que representa los y las trabajadoras sociales no solo durante, sino también antes y después de este proceso.

El Trabajo Social es importante desde el primer momento que la persona llega sola al país de acogida, ya que requiere una atención de sus necesidades como pueden ser, la orientación y ayuda en la inserción laboral, residencial y la intervención familiar por ese proceso de duelo que representa el alejarse del resto de su familia.

Durante el proceso de reagrupación familiar él o la profesional del Trabajo Social adquiere un gran valor, porque es aquí donde por medio de sus habilidades y conocimientos aporta diferentes herramientas a las personas inmigrantes para que puedan llevar a cabo todo lo requerido de la mejor manera, sin que se sientan solas durante este proceso.

Por último cabe destacar otra de las etapas importantes de la reagrupación familiar donde él o la profesional de Trabajo Social participa es cuando finaliza en proceso. No solo basta con la labor ejercida antes y durante la reagrupación familiar sino que hay que tener en cuenta que en esta fase las familias requieren un cierto apoyo, orientación y ayuda tanto para resolución de sus posibles conflictos familiares como para favorecer de su incorporación y autonomía en la sociedad de acogida.

A continuación aparece la valoración del Trabajo Social en el proceso de reagrupación familiar por parte de una persona participante en el proceso:

“Pues la verdad también que un sobresaliente, porque también te informa. Ellos te ayudan en todo lo que pueden, la verdad que por allí no tenía mucho contacto con Trabajo Social. Yo allá fui a pedir una cita para que me ayuden a esto, pero nos sabía nada más, pero aquí sí. Cuando vine aquí yo estaba sin trabajo, pues la verdad es que te ayudan bastante,

siempre están ahí a veces por cualquier cosa que necesitas, ellos van y te ayudan, te informan, así que muy bien”.

En el anterior fragmento de la entrevista a una mujer entrevistada que reagrupó a su cónyuge y a sus hijas, se puede observar que en muchos casos la profesión del Trabajo Social es valorada positivamente por los usuarios y usuarias, ya que para ellos y ellas les resulta de gran ayuda el trabajo de información, asesoramiento y de resolución de dudas. Además, representa un recurso que les facilita el proceso de reagrupación familiar y les ayuda a no sentirse solas y solos antes, durante y después de este.

4.2. Importancia del marco normativo de la reagrupación familiar para el Trabajo Social y para las personas reagrupantes

Teniendo en cuenta la información obtenida a través del relato de vida realizado a una persona protagonista en el proceso de reagrupación familiar podemos destacar que la normativa de extranjería en relación a la reagrupación familiar representa para la persona inmigrante en muchos casos una oportunidad, ya que si no tienen problemas en cumplir con los requisitos que la ley exige, les permite la posibilidad de reunirse en el país de acogida con sus familiares. Por otro lado puede resultar una amenaza, ya que en muchas ocasiones debido a la situación actual del país o a las circunstancias personales es muy difícil conseguir los requisitos que establece la ley como por ejemplo acreditar contrato de trabajo por una año y una cuantía de ingresos mínima para cubrir con las necesidades de la familia² o una vivienda que disponga con unas condiciones adecuadas para poder habitar.

“Por una parte está bien todo lo que te obligan, como te comenté, salvo el que no tenga trabajo y tenga alguna dificultad pero mientras estés trabajando y puedas presentar todo lo que te piden pues está muy bien. Y para cambiar pues yo creo que dejen venir a otros familiares”
(fragmento de la entrevista realiza a una mujer que ha ejercido la reagrupación familiar).

² Para unidades familiares que incluyan dos miembros (reagrupante y reagrupado) se exige una cantidad mensual del 150 % del IPREM, que este año 2014 asciende a 799 euros. Por cada miembro adicional se deberá sumar, el 50% del IPREM, es decir en este año 2014 se sumarían 266 euros.

La normativa de extranjería en el régimen general es muy estricta en relación a los familiares que se pueden reagrupar, ya que solo se permite reagrupar a la o el cónyuge, a los o las ascendientes y a los o las descendientes, dejando a un lado al resto de familiares. Por otra parte, tampoco se pueden reagrupar ni a los descendientes mayores de 18 años, excepto por razón de incapacidad, ni a los y las ascendientes mayores de 65 años, excepto por causas humanitarias u otras establecidas en la ley.

Con relación a los trámites relativos a la reagrupación familiar en el régimen general, continúan siendo más burocráticos y complicados que en el régimen comunitario, aunque hay que destacar que con el paso del tiempo estas gestiones han ido mejorando. El siguiente fragmento hace alusión a lo descrito anteriormente:

“Pero ahora ya sé que ahora dan con cita y todo, que han mejorado más. Antes costaba mucho llegar a coger una cita, hacías una cola larga y llegas y decían hasta aquí, se acabó y el que estaba ahí parado se quedaba. Ahora es con cita y ya tú sabes a qué hora tienes que ir y todo, ha mejorado mucho”(fragmento de la entrevista realiza a una mujer que ha ejercido la reagrupación familiar).

Para el Trabajo Social, la normativa de extranjería en cuanto a reagrupación familiar se refiere es muy importante, ya que es el marco en el que se apoyan. Es su herramienta de información, de asesoramiento, que facilita la intervención ante alguna demanda relacionada con este proceso. Por eso, para los y las profesionales del Trabajo Social que trabajen con población inmigrada es necesario conocer y manejar esta normativa de extranjería y concretamente todos aquellos capítulos que estén relacionados con el proceso de reagrupación familiar.

También, la Ley de Extranjería a veces es muy restrictiva con relación a los requisitos que establece, ya que actualmente resulta muy difícil que las personas que quieren reagrupar a sus familiares puedan cumplir los requisitos que se exigen. Es por esto que muchas veces aunque él o la profesional del Trabajo Social tengan intención de colaborar en el proceso de reagrupación familiar no pueden hacerlo debido a que no cumplen con los requisitos contemplados en la normativa de extranjería.

Por otra lado, tanto por parte del Trabajo Social como de las personas reagrupadas se considera que la normativa de extranjería favorece la integración, ya que al establecer una serie de derechos y deberes para las personas extranjeras, están permitiendo que estas personas estén protegidas y tengan la oportunidad de vivir en familia y de hacer parte de la sociedad de la misma forma que las personas autóctonas. Aunque también, cabe destacar que la ley en cuanto a la reagrupación familiar limita con relación a los requisitos que deben cumplir las personas extranjeras para poder reunirse con sus familiares en el país de acogida.

4.3. Implicaciones de la reagrupación familiar para la población extranjera

La reagrupación familiar es un proceso muy largo y difícil tanto para las personas que emigran solas a otro país como también para los familiares que se quedan en su país de origen. Este proceso en primer lugar implica para la persona tomar la dura decisión de abandonar el país donde ha vivido toda su vida, donde se ha enriquecido socioculturalmente y, lo más importante, donde viven sus seres queridos. También cabe destacar que esta decisión suele tomarse entre algunos miembros de la familia y no es habitual que sea una decisión rápida.

En el siguiente párrafo se aprecia este hecho a través de las palabras de una mujer que ha realizado la reagrupación familiar:

“Fue una decisión muy dura, porque fue una decisión que tomamos entre mi hermana, mi marido y yo, y ella nos dijo: bien vienes tú o bien viene tu marido o sea pero veníamos uno. Yo vine con trabajo, en cambio él no tenía trabajo, entonces hablamos entre los dos y él me dijo pues vete tú y luego voy yo, entonces yo vine a trabajar directamente”.

Otro aspecto a destacar es que a la persona que llega sola a un país que no es el suyo, le cuesta mucho centrarse en sí misma, vivir su propia vida, ya que su mente no está puesta solo en el país donde llega, sino también el país que ha dejado. Es decir, vive una doble vida; mientras está trabajando o realizando otra actividad sus pensamientos están puestos en su familia y en su país. Es una situación bastante dura, ya que lo que la persona desea es tener contacto con sus seres queridos y tenerlos a su lado. En el

siguiente fragmento extraído de la entrevista a una mujer reagrupante se puede observar la circunstancia expuesta:

“Sí, sí, tenía contactos, si casi todos los meses hablábamos una o dos veces, con él, porque ellas eran aún muy pequeñas, ya cuando hablaban pues ya casi llamaba una vez a la semana, así más o menos”.

“También era duro porque ¿sabes? mi familia estaba allá y yo aquí, yo poco salía y lo que podía algo mandaba, aunque mi marido trabajaba allá, yo mandaba algo de dinero para ellos allá, para que estuvieran mejor, yo aquí no gastaba en nada”.

También en el fragmento anterior se muestra no solo cómo se produce una relación a distancia a través de las llamadas telefónicas, sino que también el envío de remesas y de productos constituye otra forma de interacción transnacional. Estos medios de interacción representan para las familias un elemento importante durante el proceso de reagrupación familiar, ya que a través de estos las familias logran estar en contacto, conocer la situación actual, expresar sus sentimientos y también es un medio de intercambio cultural.

Por otra parte, es necesario destacar lo complicado que resulta para las personas implicadas en el proceso de reagrupación familiar el asimilar las diferencias socioculturales que encuentra en el país de acogida respecto a su país de origen. No es fácil para las personas inmigrantes adaptarse e integrarse de una forma rápida y adecuada a un país desconocido, donde se encuentran con diferentes formas de vida, personas, formas de relacionarse, formas de constitución social, diferente cultura, etc.

Es un proceso largo y paulatino en donde no solo es importante la disposición y la entrega de la persona inmigrante, sino que también es necesaria la implicación de las personas e instituciones de la sociedad de acogida a través de la aportación de diferentes recursos humanos, sociales, económicos, etc., que le permitan tener un desarrollo en todos los ámbitos de su vida. Como se ha mencionado en el marco teórico, es una responsabilidad compartida y un compromiso de la ciudadanía en su conjunto.

Con respecto a la vida durante el proceso de reagrupación familiar, la mujer entrevistada que ha reagrupado a su marido e hijas afirma que:

“Era muy dura porque pedían los requisitos que pedían aquí, ¿sabes? las nóminas, porque yo traía a tres personas y me obligaban a que tenía que tener una nómina casi de 1.100 euros, entonces lo que yo ganaba eran 800 euros, pero entonces empecé a trabajar de lunes a sábado en un sitio y los fines de semana en otro sitio para ajustar la nómina que me pedían, entonces de ahí ya podía presentar los papeles, esos que te piden y que van a ver si el piso está en condiciones, y todas esas cosas, como vienen niñas pequeñas tienes más obligación, que haiga agua, calefacción. O sea era muy duro ¿sabes?, hasta que te aprueben y hasta ver que sale todo bien, porque tarde casi 4 meses que me respondieron aquí y en Ecuador me tardó 6 meses”

Del anterior fragmento vemos cómo la persona inmigrante que llega en primer lugar al país de acogida tiene que ingeniárselas y buscar diferentes estrategias para poder ganar el suficiente dinero que le permita cumplir con el requisito económico y así poder reencontrarse con sus familiares.

Otra cuestión que implica la reagrupación familiar es lo complicado y agotador que puede resultar para las personas que quieren traer al país de acogida a sus familiares trámites relativos a este proceso. Ya que no solo se realizan en el país de acogida sino que también se hacen en el de origen. Lo anterior se puede corroborar por medio del siguiente fragmento de la entrevista realizada a la mujer reagrupante:

“Pues ellos vinieron ya legales, lo único que tuvimos problema fue en la tramitación de allá de Ecuador, porque como yo vivo en un sitio y donde se tramita eso, es muchas horas. Yo pagué a una abogada para que me tramite todo, pero eso fue una estafa ¿sabes?, porque no me lo hizo nada, entonces me lo tramitó mi marido”.

Por último cabe destacar que el proceso de reagrupación familiar representa una oportunidad para las personas inmigrantes de volver a vivir en familia, de reunirse con

sus seres queridos y volver a tener esos fuertes vínculos de afecto que se habían debilitado por ese distanciamiento.

Para la trabajadora social entrevistada este proceso permite también la integración en la sociedad. Permite que las familias salgan de sus casas, se relacionen con las personas del pueblo o la ciudad, que los hijos e hijas acudan al colegio y se relacionen con otros niños y niñas. Es una realidad la importancia que representa para las familias estar unidas y vivir juntas en el hogar. Comenta que es muy difícil para la persona que llega a un país y deja a sus familiares en origen lograr una inserción en el nuevo país sin tener a su familia a su lado. La reagrupación familiar en este aspecto favorece a toda la familia. Permite que la familia se constituya como grupo y se vaya adaptando a la cultura y a las instituciones existentes en la sociedad de acogida.

4.4. Papel de los y las profesionales del Trabajo Social en el proceso de reagrupación familiar

El Trabajo Social como profesión de ayuda resulta necesario en la intervención con población inmigrante. Muchas personas al llegar al país de acogida no cuentan con las herramientas necesarias para lograr una adecuada incorporación. Es aquí donde los trabajadores y las trabajadoras sociales juegan un papel importante ya que por medio de su información, acompañamiento, apoyo y ayuda, y a la vez utilizando habilidades como la escucha activa, la confidencialidad, la interculturalidad, etc.; contribuyen a que las personas inmigrantes tengan un buen desarrollo en todos los ámbitos de su vida y facilitan los procesos de integración.

En concreto, en la reagrupación familiar, el Trabajo Social representa una figura que resulta necesaria en todas las fases de este proceso. En algunos casos las personas no tienen conocimiento de cómo iniciar el proceso de reagrupación familiar, qué documentación tienen que aportar, qué requisitos deben cumplir, etc.; y acuden al o la profesional del Trabajo Social para que les informe les asesore y les colabore en todos estos aspectos. La mayoría de las veces como afirma la trabajadora social entrevistada son las familias o los amigos y amigas las que y les informan sobre la posibilidad de ayuda que se ofrecen estos servicios. Lo anterior también se puede observar en un

párrafo de la entrevista realizada a una mujer que ha realizado la reagrupación familiar:

“A UGT llegué por medio de mi hermana. Ella, como llevaba más tiempo, me comentó, me dijo: mira, allí te ayudan a informarte. Yo soy más de ir personalmente y de que me lo informen, de que a lo mejor me digas tú: mira, eso es así”.

Por otra parte, los trabajadores y las trabajadoras sociales intervienen en el todo el proceso de reagrupación familiar, concretamente de diferentes formas. En relación al inicio del proceso realizan una labor de información y asesoramiento a la persona que quiere realizar la reagrupación familiar sobre las personas que puede reagrupar, los requisitos exigibles y los diferentes trámites que deben hacer. También esta fase implica tarea de acompañamiento a las diferentes instituciones donde se tramitan las solicitudes y se entrega la documentación. El o la profesional del Trabajo Social en Navarra también se encarga de hacer la valoración de la vivienda para ver si cumple con las condiciones de habitabilidad.

Es importante también en esta etapa estar pendiente y hacer un seguimiento para la atención de todo lo que implica para la persona y la familia estar en lugares distintos, ya que como apunta la trabajadora social entrevistada es un proceso muy duro que requiere ayuda profesional para que la persona no se sienta sola en el proceso. Por esto es necesario desde el Trabajo Social tener entrevistas periódicas con la persona reagrupante para conocer cómo está viviendo el proceso, conocer los inconvenientes que se están presentando y las necesidades con las que cuenta, y así poder ofrecer distintas herramientas y recursos que le sean útiles para solventar estas situaciones.

En el momento que los familiares se reúnen con la persona en el país de acogida la figura del profesional del Trabajo Social adquiere, si cabe, más importancia, ya que representa para las familias inmigrantes estar informadas de toda la documentación necesaria para residir sin problemas en el país de acogida y de los diferentes recursos existentes que pueden ayudar a la mejora de la calidad de vida de estas familias y a su integración social.

Por último cabe destacar que no solo durante el proceso de reagrupación familiar el Trabajo Social adquiere valor para las personas inmigrantes, sino también cuando ya llevan tiempo residiendo en el país de acogida, ya que se convierte en un elemento de ayuda importante en la resolución de dificultades, posibles conflictos y en el el proceso de participación social.

CONCLUSIONES Y CUESTIONES ABIERTAS

Después de la realización de este Trabajo de Fin de Grado se ha podido llegar a las siguientes conclusiones:

- La población extranjera empadronada en Navarra es una población heterogénea, plural y joven que representa el 10,5% del total de la población de la Comunidad Foral. Este dato es ligeramente inferior al de la población extranjera empadronada en España que supone un 11,7% respecto del total.
- La distribución por género es bastante equitativa. En Navarra el porcentaje de hombres extranjeros empadronados se sitúa en el 49,7 % mientras que las mujeres son el 50,3 %. No obstante, existen diferencias significativas según género y origen. Mientras que la población masculina africana duplica a la femenina, en la de América Central y del Sur tienen una mayor presencia las mujeres. Esta circunstancia afecta a los procesos de reagrupación familiar ya que en el caso de hombres africanos son ellos los que mayoritariamente llegan en primera instancia para luego reagrupar a su familia. Por el contrario, en el caso de América Central y del Sur llegan ellas primero y posteriormente reagrupan a sus familiares.
- Los lugares de origen de las personas extranjeras son diversos, aunque más del 50% proceden de América Central y del Sur. La Unión Europea es la segunda zona más representada con el 28% del total de personas extranjeras empadronadas, al que le sigue África con el 18%.
- La presencia de población extranjera ha rejuvenecido considerablemente la pirámide de población de la Comunidad Foral de Navarra. La mayor representación de población extranjera en Navarra por edad y sexo se encuentra entre los 25 y los 44 años siendo mayormente mujeres entre los 20 y los 35 años y hombres desde los 35 a 44 años. El 16,7% de la población extranjera en Navarra tiene menos de 15 años; Por el contrario, apenas el 1,9% tiene más de 65 años.
- En la normativa de extranjería relacionada con la reagrupación familiar existe una clara diferenciación entre los dos principales regímenes legislativos: el

régimen general y el régimen comunitario. Este último es más favorable, menos complicado y menos complejo que el régimen general en cuanto a procedimiento y requisitos para la reagrupación familiar.

- La reagrupación familiar por régimen general es un proceso largo, complejo y difícil, ya que las familias se ven en la obligación de cumplir con una serie de requisitos muy exigentes, de aportar diferente documentación y de realizar una variedad de trámites para poder llevar a cabo el proceso. Además, para las personas que migran solas se mezcla un sentimiento de tristeza y soledad por el alejamiento de su familia y por las dificultades en los procesos de integración.
- La familia transnacional, como apunta Bryceson y Vuorela (2002), es aquella cuyos miembros viven repartidos en distintas zonas y países, pero mantienen la unidad emocional, económica y de ayuda suficiente para que se definan a sí mismos como familias. Estas familias están cada vez más presentes en nuestra sociedad y esta situación constituye para ellos y ellas un reto, como es el vivir y adaptarse a un país diferente y a la vez mantener otras relaciones, contactos y otra vida diferente en sus países de origen. El Trabajo Social interviene en estos nuevos modelos familiares.
- La integración debe alejarse del enfoque donde solo una de las partes, que coincide con la minoritaria, es la que debe realizar el esfuerzo en el proceso de integración. No se trata de una responsabilidad del grupo minoritario respecto al mayoritario, sino que es una responsabilidad compartida del conjunto de la sociedad y afecta a toda la ciudadanía.
- La relación de ayuda que los y las profesionales del Trabajo Social establecen con la población inmigrante debe ser intercultural, que se refiere a la relación simétrica, al intercambio e interacción positiva, al reconocimiento mutuo y en igualdad de personas procedentes de marcos culturales de referencia diversos.
- Nuestra profesión es clave en la intervención con población inmigrante y más específicamente en todo el proceso de reagrupación familiar, es decir, en el antes, durante y después. No solo es importante en el durante, debido al requerimiento de realizar un informe de adecuación de la vivienda que en Navarra recae mayoritariamente en las y los profesionales del Trabajo Social de

las entidades locales, sino también en la toma de decisión y en el proceso posterior a la llegada de sus familiares.

- El conocimiento de la normativa de extranjería por parte de los y las profesionales del Trabajo Social de los Servicios Sociales de base y de las Unidades de Barrio de Pamplona es necesario para una adecuada intervención con estas personas.
- La reagrupación familiar es un elemento integrador para las familias que consiguen finalizar con éxito el proceso, aunque no exento de dificultades. En Trabajo Social se debe prestar especial atención a los procesos de incorporación de la población adolescente y de la población mayor. Que ha sido reagrupada.

Cuestiones abiertas.

- Para los y las profesionales del Trabajo Social es importante desarrollar ciertas competencias a la hora de intervenir en el ámbito de la inmigración y específicamente en los procesos de reagrupación familiar de personas extranjeras. También es necesario conocer distintas herramientas, actitudes y formas de actuar para poder ofrecer la ayuda necesaria a las personas extranjeras y facilitarles la integración a la sociedad de acogida.
- Resulta necesario la realización de formación específica en temas relacionados con la inmigración, normativa de extranjería y concretamente de reagrupación familiar por parte de trabajadores y trabajadoras sociales, ya que esto permite mejorar el grado de preparación y conocimientos en esta materia, que es una realidad en nuestra sociedad y cuyas personas requieren de apoyo y ayuda en sus procesos.
- Otra propuesta consiste en animar e incentivar a los y las profesionales del Trabajo Social en Navarra que intervienen con población inmigrante a la realización de estudios empíricos sobre temas relacionados con la reagrupación familiar y el Trabajo Social. Ello puede contribuir a mejorar la práctica profesional y a enriquecer nuestro trabajo.

- Por último, sería interesante que los y las profesionales del Trabajo Social llevaran a cabo intervenciones grupales tanto con personas implicadas en el proceso de reagrupación familiar como también con personas autóctonas, ya que puede ser un adecuado espacio para compartir experiencias y emociones, un espacio de ayuda mutua, de acercamiento a la realidad y de enseñanza sobre las diferentes instituciones de la sociedad de acogida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARIÑO, A. (2003). Coordinadas sociales de la España actual. En: Veinticinco años: el IMSERSO y las políticas Sociales [en línea]. Madrid, pp. 54-81. [Consulta: marzo 2014]. Disponible en: http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO6921/04_054-129.pdf
- BESTARD, J. 2012. Nuevas formas de familia. En: Noves formes de família / Nuevas formas de familia [en línea]. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Àrea Qualitat de Vida Igualtat i Esports, pp. 2-5. [Consulta: marzo 2014]. Disponible en: http://www.bcn.cat/publicacions/b_mm/pdf/QCFamilia_Metropolis.pdf
- BRYCESON, D. y VUORELA, U. (2002). The Transnational Family: New European Frontiers and Global Networks. New York: Berg.
- BUENDÍA, L.; COLAS, P. Y HERNÁNDEZ, F. (1998). Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGraw-Hill.
- CLAVIJO, A. (2002). Crisis, familia, psicoterapia. La Habana: Editorial ciencias Médicas.
- COHEN-EMERIQUE, M. (1984). Choc culturel et relations interculturelles dans la pratique des travailleurs sociaux, cahiers de sociologie économique et culturelle, nº2, Décembre 1984. INHSEPP, Le havre, 183-218.
- ESPAÑA. 2000. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Boletín Oficial del Estado, 11 de enero de 2000, 10, pp. 1139-1150 y modificaciones.
- ESPAÑA. 2007. Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Boletín Oficial del Estado, 28 de febrero de 2007, 51, pp. 8558- 8566, y modificaciones.
- ESPAÑA. 2011. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, que regula dicha Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y sus modificaciones. Boletín Oficial del Estado, 30 de abril de 2011, 103, pp. 43821-44006, y modificaciones.

- GIMENEZ, C. (1998). Integración social. En: Giner, S., Lamo de Espinosa, E. y Torres, C. Diccionario de Sociología [en línea]. Madrid: alianza. [Consulta: marzo 2014]. Disponible en:
<http://blogs.ujaen.es/fcanton/wp-content/uploads/2011/01/Conceptos-B%C3%A1sicos-en-el-Diccionario-de-Sociolog%C3%ADa.pdf>
- GUARNIZO, L. (2004). Aspectos económicos del vivir transnacional. En Ribas, N y Escrivá, A. (coord.): Migración y desarrollo: estudio sobre remesas y otras prácticas transnacionales en España. [En línea]. Córdoba: Instituto de Estudios Sociales Avanzados, pp. 12-37. [Consulta: marzo 2014]. Disponible en: file:///C:/Users/Hp/Downloads/-data-Col_Int_No.59-01_Rev_59.pdf
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 2014. Instituto Nacional de Estadística [sitio web]. Madrid: INE. [Consulta: febrero 2014]. Disponible en: <http://www.ine.es/>
- LABACA, M.L. (2005). El derecho a la vida familiar de los inmigrantes en la legislación de extranjería. En: Revista de estudios jurídicos, económicos y sociales de la Facultad de Estudios Sociales, Universidad Alfonso X El Sabio, Volumen 3 [en línea]. Madrid: saberes. [Consulta: febrero 2014]. Disponible en: <http://www.uax.es/publicacion/el-derecho-a-la-vida-familiar-de-los-inmigrantes-en-la-legislacion-de-extranjeria.pdf>
- MALGESINI, G. y GIMÉNEZ, C. (1997): Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid, España: Los libros de la Catarata.
- MARTÍNEZ, B., MORENO, D. Y MUSITU, G. (2010). Formas familiares y procesos migratorios actuales: nuevas familias en la sociedad de la globalización. En M.T. Terrón (Dir.) Familia y Diversidad: intervención socioeducativa. Sevilla: estudios Universidad Pablo de Olavide. ISBN: 978-84-693-7369-9
- MELERO, L. (2010). La persona más allá de la migración: manual de intervención psicosocial con personas migrantes. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch.
- MOIX, M. (2004). El Trabajo Social y los Servicios Sociales. Su concepto. Cuadernos de Trabajo Social. [En línea]. Madrid: estudio de la Universidad Complutense de Madrid, pp. 17, 131-14. [Consulta: febrero 2014]. Disponible en: [file:///C:/Users/Hp/Downloads/8457-8538-1-PB%20\(3\).PDF](file:///C:/Users/Hp/Downloads/8457-8538-1-PB%20(3).PDF)

- MUSITU, G. Y CAVA, M. J. (2001). La familia y la educación. Barcelona: Octaedro.
- MUSITU, G., HERRERO, J. Y CANTERA, L. M. (2004): Introducción a la Psicología Comunitaria. Barcelona: UOC.
- PARELLA, S. y CAVALCANTI, L. (2009). Dinámicas familiares transnacionales y migración femenina: el caso de las migrantes bolivianas en España. [En línea]. Barcelona: estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 1-21. [Consulta: febrero 2014]. Disponible en:

http://webs.uvigo.es/xenero/profesorado/sonia_parella/migracion.pdf
- PICHON –RIVIÈRE, E. (1997). El proceso grupal: Del psicoanálisis a la psicología social. Buenos Aires: Editorial Nueva visión.
- PUJADAS, J. (1992). El Método Biográfico: El uso de las Historias de Vida en las Ciencias Sociales. Colección de Cuadernos Metodológicos No 5. (Centro de Investigaciones Sociológicas, 107).Madrid. España. ISBN: 9788474761740.
- QUIRÓS, A. (2008). La familia del extranjero: regímenes de reagrupación e integración. Valencia, España: Editorial Tirant lo Blanch.
- REGUERA, A. (2008). Metodología de la investigación lingüística. Prácticas de escritura. Córdoba, Argentina: Brujas.
- RIVAS, A.M Y GONZÁLVEZ, H. (2009). Familias trasnacionales colombianas, Transformaciones y permanencias en las relaciones familiares y de género. Madrid: Editorial Catarata.
- RUIZ, A. (2002). Migración Oaxaqueña: Una aproximación a la realidad. Oaxaca, México: Coordinación Estatal de Atención al Migrante Oaxaqueño.
- VARGAS, M. (2006). La Reagrupación Familiar de los Extranjeros en España: Normas de Extranjería y problemas de Derecho Aplicable. Cizur Menor, Navarra: Editorial Aranzadi.
- VÁZQUEZ, P. (2009). Reagrupamiento Familiar de los inmigrantes: efectos sobre la afiliación e incidencia en los gastos de protección social. Madrid: Fedea

ANEXOS

Anexo I. Guía de preguntas para la realización de una historia de vida a una persona que ha ejercido el derecho de reagrupación familiar.

Datos personales

- Lugar de Nacimiento: Ecuador
- Edad: 35
- Estado civil: Casada
- Composición familiar: esposo y dos hijas
- Formación académica: terminó hasta 6 de primaria
- Lugar de residencia: Valtierra, Navarra, España

Infancia

- ¿Cómo fue su infancia? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? ¿Y el peor?
- ¿Cómo era la relación con sus padres, hermanos y demás familiares?
- ¿Qué recuerdos tiene de la escuela?

Adolescencia/juventud

- ¿Cómo fue tu adolescencia?
- Relación con tus padres, hermanos, demás familiares
- Experiencia laboral
- Situación que te haya marcado
- Actividades de ocio y tiempo libre
- ¿Qué concepto tenías de Europa? ¿Y de España?

Adultez

- Trabajo y carrera
- ¿Cómo era vivir en tu país de origen antes de venir a España?
- Vida en Familia antes de la reagrupación

- Proceso de reagrupación familiar
- Toma de decisión en el cambio de País
- Vida familiar durante el proceso de reagrupación
- ¿Circunstancias que te hicieron tomar la decisión de inmigrar a España?
- ¿Cómo fue el viaje a España?
- ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones sobre este país?
- Trayectoria laboral en España
- Dificultades
- ¿Cómo fue la experiencia de inmigración para tu marido y tus hijos/as?
- ¿Qué opinas sobre la educación que recibieron tus hijos en este país?
- Adaptación a la vida en este país
- ¿Conservas tradiciones culturales? ¿Cuáles?
- ¿Planeas quedarte en este país para siempre?
- ¿Qué significa integración para ti?
- Contactos con país de origen
- Actividades de ocio y tiempo libre
- Reto y oportunidades que has enfrentado al vivir en este país
- Crecimiento de los hijos/as
- Ilusiones y esperanzas

Proceso de reagrupación familiar

- Significado de reagrupación familiar
- Valoración del proceso de reagrupación familiar. ¿Qué cambiaría?
- Importancia de la reagrupación familiar
- Ayuda recibida durante el proceso de reagrupación familiar ¿Cómo valora esa ayuda?
- ¿Quién te informo sobre UGT?
- Valoración de la labor del profesional de trabajo social en el proceso
- Dificultades encontradas en el proceso
- Aspectos positivos vividos durante el proceso de reagrupación familiar.

Ley de extranjería

-Valoración

-Aspectos que cambiarías

-¿Qué opinión tiene sobre la ley de extranjería en cuanto a la reagrupación familiar?

-¿Considera que la ley de extranjería favorece la integración de las personas inmigrantes?

Anexo II. Historia de vida realizada a una persona que ha ejercido el derecho de reagrupación familiar.

Datos personales

La persona a quien se le ha realizado esta historia de vida es una mujer de 35 años, casada y de nacionalidad ecuatoriana. Actualmente vive con su marido y sus dos hijas menores de edad en Valtierra, Navarra, España. Terminó los estudios primarios.

Infancia

¿Cómo fue su infancia? ¿Cuál es tu mejor recuerdo de la infancia? ¿Y el peor?

Pues no recuerdo mucho la verdad, pero lo poco que me acuerdo es que muy bien, vivía en un pueblito pequeño, con mis hermanas y mi madre, iba al colegio y bien, no tuve así muchos problemas.

¿Cómo era la relación con sus padres, hermanos y demás familiares?

Pues muy bien con mi madre, porque yo solo he vivido con mi madre sabes, no con mi padre, ella chica y yo chica pues éramos como amigas sabes, porque cuando tenía 15 años mi madre ya falleció, hasta los 15 años una relación bien, mi madre estaba separada de mi padre, cuando murió estuve viviendo con mi hermana hasta que me casé, cuando me casé ya me fui a vivir con mi marido. Me casé a los 17 años, entonces pues la infancia y adolescencia yo la recuerdo bien. Ya me casé, ahora tengo mi vida, y ahora mismo estoy aquí en España, (risas).

¿Qué recuerdos tiene de la escuela?

Pues con mis compañeras bien, tenía buena relación, como terminé la escuela hasta 6 grado de allá y ya no seguí estudiando y me puse a trabajar, porque allá la mayoría piensa en trabajar no en estudiar, pero con mis compañeras bien, aunque ahora no tengo contacto con ellas pero...¿Sabes?, bien.

Recuerdos del barrio, comunidad, vecinos

Sabes no son tan amigueras, como aquí que no salgo, pero bien, con los vecinos bien, tranquilos, más soy de estar en casa yo, no me gusta estar en la calle.

Adolescencia/juventud**¿Cómo fue tu adolescencia?**

Mi adolescencia fue muy alborotada (risas), que como ya estaba sola con mi madre sabes, yo me sentía mayor y quería salir donde yo quería y ya luego me case y ya se termino la adolescencia (risas).

Relación con tus padres, hermanos, demás familiares

Éramos cuatro hermanos, pero han fallecido 2 y 2 vivimos, mi hermana la mayor está en Ecuador y yo soy la segunda, bueno ella estuvo aquí y luego viajó por allá. Con mi padre no tengo relación (risas), yo soy muy rencorosa.

Experiencia laboral

Trabajaba en un restaurante sabes, de cocinera y de ayudante y de todo, hasta que tenía 16 años, luego viajé a una isla a trabajar, a Galápagos, por ahí estuve también hasta los 17 años que volví y enseguida me case (risas) pero bien eh, más me gustó por allá, ¿sabes? por Galapagos.

Situación que te haya marcado

Pues sí, la muerte de mi madre, yo era la única que estaba soltera y mi hermana casada, entonces tenía que estar yo en los hospitales de arriba abajo con ella., entonces sí, me quede bastante... ¿sabes?, como traumada, mis otras hermanas eran muy pequeña y mi otra hermana mayor con su familia y sus hijos pues era de vez en cuando la visita, pero yo tenía que estar siempre ahí, y entonces hasta ahora tengo pánico a los hospitales, porque mi madre falleció casi en mis brazos sabes, o sea no tanto pero estuve más yo con ella.

Actividades de ocio y tiempo libre

Pues en mis tiempos libres me gustaba pues irme a bailar (risas) y de deportes me gusta el baloncesto y a veces en la escuela lo jugaba cuando quedábamos así, pero más me gustaba la fiesta ¿sabes? (risas).

¿Qué concepto tenías de Europa? ¿Y de España?

Pues yo lo veía bien, lo veía como un país donde había trabajo, donde se ganaba muy buen dinero (risas), y la verdad que al principio bien, encontré trabajo cuidando y luego ya empecé a trabajar en fábricas, antes había más trabajo pero menos mal yo sigo aquí en el mismo, mi marido sí que ha tenido más difícil. Pero bueno, lo bueno es que estamos bien y trabajando.

Adulthood

Trabajo y carrera

Yo cuando me casé ya no seguí trabajando, yo trabaje hasta que tenía casi 17 años hasta ahora que vine aquí a España a trabajar vuelvo. Yo cuando me casé me dedique a mis hijas y a estar en casa y de ahí hasta que llegue aquí, que ya empecé a trabajar sin parar, pero allá no,

¿Cómo era vivir en tu país de origen antes de venir a España?

La verdad que hasta ahora no me gusta la vida de allá (risas) , donde yo vivo es un pueblo muy pequeño que ni sube ni baja, entonces claro, siempre me ha gustado trabajar fuera de donde yo vivía, siempre en la ciudad y sitios más grandes, pero en el pueblo mío no, poco me gusta.

Vida en Familia antes de la reagrupación

Pues es que estar en casa y esperando que tu marido llegara, pues comparado con lo de aquí, pues no me gustaba, pero bueno uno ya va haciéndose a la vida de casa, a la vida de allí.

A los 19 años tuve a mi primera hija y a los 20 a la otra, porque son un año que se llevan.

Proceso de reagrupación familiar

Mi hermana estaba aquí, yo vine con mis sobrinos, ella me trajo a mí y entonces yo los traje a ellos. Yo vine en el 2003 y mi marido vino en el 2007, pues si fue bastante, porque como uno se viene sin documentación de allá, pues hasta que se haga la documentación, porque después tienes que tener la segunda tarjeta para poder reagrupar, con la primera no te dejan, pues yo cuando hice la primera tarjeta yo viaje, después cuando volví tuve que esperar a tener un año más para que me den la segunda, y con la segunda pues yo ya presente, sabes mas tardó en que él se venga de allá, porque al final no quería venirse, o sea, mientras tengas dinero y hagas todo bien pues sale todo bien. La verdad que aquí todo bien, allá pues era la dificultad de que nos estafaron por los dineros, tuvo que hacerlo el personal, entonces eso fui la manera allá, pero ese fue la única dificultad. Lo demás salió todo bien, vinieron mis hijas y mi marido, sí sí, los tres al mismo tiempo.

Toma de decisión en el cambio de País

Fue una decisión muy dura, porque fue una decisión que tomamos entre mi hermana, mi marido y yo, y ella nos dijo: bien vienes tu o bien viene tu marido, o sea pero veníamos uno, yo vine con trabajo, en cambio el no tenía trabajo, entonces hablamos entre los dos y él me dijo pues vete tú y luego voy yo, entonces yo vine a trabajar directamente, luego viajé a Ecuador hasta que yo podía tener mi documentación que es la segunda tarjeta y luego hasta que podía reagruparlos, mi esposo ya estaba viniendo aquí sin reagrupación pero lo volvieron, lo volvieron casi tres veces, cuando el vino, vino con el cuarto pasaporte ya, entonces claro la única opción era la reagrupación, entonces hasta que le reagrupé y ya se reencontró conmigo .

Vida familiar durante el proceso de reagrupación

Pues mi vida aquí antes de que viniera mi marido y mis hijas, como te he explicado, sabes, era muy dura porque pedían los requisitos que pedían aquí, ¿sabes? de las nominas, porque yo traía a tres personas y me obligaban a que tenía que tener una nomina casi de 1100 euros, entonces lo que yo ganaba eran 800 euros, pero entonces empecé a trabajar de lunes a sábado en un sitio y los fines de semana en otro sitio para ajustar la nomina que me pedían, entonces de ahí ya podía presentar los papeles,

esos que te piden y que van a ver si el piso está en condiciones, y todo esas cosas, como vienen niñas pequeñas tienes más obligación, que haiga agua, calefacción, o sea era muy duro sabes, hasta que te aprueben y hasta ver que sale todo bien, porque tarde casi 4 meses que me respondieron aquí y en Ecuador me tardo 6 meses. También era duro porque sabes mi familia estaba allá y yo aquí, yo poco salía y lo que podía algo mandaba, aunque mi marido trabajaba allá, yo mandaba algo de dinero para ellos allá, para que estuvieran mejor, yo aquí no gastaba en nada.

¿Circunstancias que te hicieron tomar la decisión de inmigrar a España?

En mi vida he pensado alejarme de mis hijas sinceramente, pero la decisión fue mas de mi marido que me decía que pues por tener un futuro mejor y más oportunidad y que no sé que, no sé cuánto, pero... ¿sabes? hasta el día de hoy yo le reprocho a mi marido que porque nos vinimos (risas). Porque en mis pensamientos no estaba como hice de dejarlas a ellas en otro sitio, pero la decisión mas era de mi marido, al ver cómo era la vida de ahí, con tanta pobreza y todo eso pues él me dijo vete tú y luego me llevas.

¿Cómo fue el viaje a España?

El viaje fue todo bien, lo que pasa es que era triste, porque yo vine con una carta de invitación con mis sobrinos y todo, pero yo mas rezaba que me devolvieran, porque veía a mis sobrinos felices porque iban a ver a su madre y yo triste porque había tenido que dejar a mis hijas. El viaje estuvo bien, pero mas era la tristeza mía.

¿Cuáles fueron tus primeras impresiones sobre este país?

Pues la verdad es que no me interesaba, ¿sabes?, yo cuando llegue lo que quería era trabajar y poder traerlos ellos, la verdad que poco me interese en el país, en cómo era, ni nada, pero luego ya más adelante ya me iba interesando mas, sí, sí, porque la verdad es que yo llegue y trabaje interna, no salía ni nada. Pero luego ya iba saliendo y me iba gustando más. Hasta el día de hoy me gusta sabes.

Trayectoria laboral en España

Yo estuve cuidando a personas mayores, estuve 3 casi 4 años, porque primero era sin documentación, luego con la documentación te obligan a cuidar a personas mayores, pero luego ya podía trabajar donde yo quería, y luego ya me cambia a las empresas y fábricas y todo eso.

Dificultades

No, no, la verdad que no, lo único mío era que siempre pasaba mal porque ellos estaban allá y yo acá, pero el trabajo y todo la verdad que ha estado bien, me han tratado bien, la verdad que si, más era el yo estar aquí y ellos allá, esa era la única dificultad, porque un día estuve por volverme y me decía mi marido, no aguántate, ya aguantaste un año así que aguántate un año más por la residencia.

¿Cómo fue la experiencia de inmigración para tu marido y tus hijos/as?

Pues ellos vinieron ya legales, lo único que tuvimos problema fue en la tramitación de allá de ecuador, porque como yo vivo en un sitio y donde se tramita eso, es muchas horas, yo pague a una abogada para que me tramite todo, pero eso fue una estafa sabes, porque no me lo hizo nada, entonces me lo tramito mi marido, pero lo demás como ellos vinieron legales y yo ya estaba esperándolos también con la documentación legal, pues entonces ningún problema, mientras tengas dinero para pagar lo que tenias que pagar pues no había ningún problema.

¿Qué opinas sobre la educación que recibieron tus hijos en este país?

Pues mis hijas tienen la educación que yo les he dado, no más de aquí, yo las tengo más a la educación de allá sabes, la educación de aquí no me gusta sinceramente sabes, porque aquí es un poco más abierta, en esa parte si no me gusta la educación de aquí, pero como yo a ellas las tengo educadas a mi manera, y como yo soy ecuatoriana también, pues a lo que yo aprendido más o menos las educo a ellas, tanto tanto tan cerradas como es allá no, o sea yo les digo ustedes no son de aquí, cualquier día tienen que volver a su país, y más o menos para que ellas no digan yo tengo una educación de allá y ahora no quiero esto, o sea de esa manera.

Adaptación a la vida en este país

La mía hoy en día es muy bien sabes, pero la de mi marido no, desde que piso España no le gusta sabes, pero mis hijas pues ya, como ya están con la mama y el papa, ya están más tranquilas, me costó mucho con la pequeña sabes, porque ella decía que no era su madre yo, que era mi suegra su madre, era bastante duro eso, pero ahora ya no. Mi marido hoy en día, sabes, todavía no se ha adaptado del todo, si por él fuera

mañana mismo nos iríamos, si yo les digo venga nos vamos, pues nos vamos, pero si no, no

¿Conservas tradiciones culturales? ¿Cuáles?

Pues, la verdad que no..., bueno hombre en comida si, a veces vamos y compramos cualquier cosa para hacer comida de semana santa, fin de año no, fin de año se toman aquí las uvas allá no, aunque mi marido allá en semana santa no trabajaba ni yo tampoco, pero aquí lo hemos trabajado cuando nos han pedido que trabajemos, esta semana santa mi marido trabajo, pero yo no.

¿Planeas quedarte en este país para siempre?

Para siempre no, pero si me gustaría estar un tiempo, hombre depende de mi marido si me dice que nos quedemos pues si me quedo, pero como dependo también de lo que el piense, ahora mismo estamos por viajar para diciembre o enero por ahí, pero todavía no estamos para volver, porque me gustaría volver.

¿Qué significa integración para ti?

Pues llevarme bien con los vecinos, con la gente, yo soy con quien me saluda le saluda, quien no ,no (risas), a los que yo conozco y hasta el día de hoy aunque no sean mis amigos ni nada, pero intento pues saludarle, si me saludan, si no me saludan tampoco les saludo y ya está.

Contactos con país de origen

Sí, sí tenía contactos, si casi todos los meses hablábamos una o dos veces, con él, porque ellas eran aun muy pequeñas, ya cuando hablaban pues ya casi llamaba una vez a la semana, así más o menos.

Actualmente tengo contactos sí, con mi hermana, con mi abuelita, con los que más sabes, con los que viven en el pueblo donde vivo yo, y con los de la isla, bueno con mi suegra, que también vive en el pueblo.

Mi hermana estuvo aquí 11 años y se devolvió, bueno no se volvió ella, se volvió el, entonces ella fue detrás también, se volvieron también sus hijas, sí, sí se fueron todos.

Actividades de ocio y tiempo libre

Pues dormir, la verdad que no, sinceramente no, ahora no, a veces salgo a caminar, pero por mi esposo, por mi no (risas)

Reto y oportunidades que has enfrentado al vivir en este país

Lo único que tengo es trabajar y trabajar y poder volver (risas) o sea de poder volver a mejorar, a lo que hemos vivido antes y poder tener la oportunidad de que acaben de estudiar ellas.

Crecimiento de los hijos/as

Pues bien, hombre en la escuela les costó mucho, pero hoy en día ya están hechas y ya no tengo problema en eso, pero cuando llegaron sí ¿sabes?, porque cuando ellas llegaron yo vivía en un pueblo donde hablaban el vasco, entonces claro ellas al venir allá y al estar aquí no entendían nada de lo que hablaban, pero estuvimos dos meses por allí, porque yo veía que ellas no...Y el trabajo también como era muy malo por allí, entonces nos vinimos aquí y ya mejor, porque yo me estaba por ir de aquí del pueblo también, y hasta que les dije que no voy era una lloradera, sabes porque ya estaban hechas a lo de aquí, sabes más tranquila. Yo vivía en un pueblo a una hora de Pamplona, se llama Santesteban, hablaban puro vasco, entonces claro, ellas les costó mucho, entonces de ahí yo salí a Pamplona y en Pamplona También como es un sitio más grande, claro no me gusta la ciudad, me gusta la tranquilidad por ellas, un mes hemos vivido en Pamplona y después no vinimos aquí.

Ilusiones y esperanzas

Tenía la ilusión de sacarme el carne sabes pero como ya me lo saque sabes, y pues (risas) y tengo la ilusión de seguir trabajando, yo lo que trabajo es para ellas sabes, para que intenten mejorar, porque a veces les digo que cuando no estén bien, se me van a Ecuador ellas (risas)

Proceso de reagrupación familiar

Significado de reagrupación familiar

Pues tiene mucho sabes, porque gracias a eso pues pude traerlos, porque como te comente que mi marido tenía el cuarto pasaporte, pues era algo duro porque no conseguía pasar y gracias a Dios a la reagrupación ya mas legal y todo, pues la verdad es que sigo apoyando que siga la reagrupación porque es la única manera hoy en día para poder traer a la familia o a los que tengan que traer, menos a los hermanos porque los hermanos no se pueden traer.

Valoración del proceso de reagrupación familiar. ¿Qué cambiaría?

La verdad que no sé, porque aquí el proceso me fue muy rápido sabes, aquí cuatro meses y allá seis, y está bien todas las condiciones que te ponen aquí, imagínate que no te pongan condiciones y tu traigas a tu familia y metas ahí a todos en una habitación, la verdad que a mí me parece bien que revisen el piso, bueno a mi me revisaron el piso muy bien, que este todo perfectamente, con las trabajadoras sociales que vienen a revisártelo y que den el visto bueno, que está bien. Bueno y lo de las nominas pues a mí me obligaban una nómina de 1100 euros, imagínate en esa parte si yo lo veía bastante duro, pero imagínate que por ese tiempo por ellas deje de trabajar, y mi marido vino a trabajar y a mantenerme a mí, y mi nómina no valió de nada, entonces como ellas estaban pequeñas, yo lo veo bien, por una parte está bien que te pongan que tengas que mantener la nómina, pero luego también imagínate que no esté trabajando, pero tenga la manera de trabajar, mi marido vino y trabajo, pero de que valió mi nomina que era de 1100 euros.

Importancia de la reagrupación familiar

Pues la importancia pues es mucho como te digo, que te sirve para traer a tu familia, porque imagínate ahora no pueden venir nadie, si no reagrupas no pueden venir, salvo con el visado que llaman ese de contratos de trabajo.

Ayuda recibida durante el proceso de reagrupación familiar ¿Cómo valora esa ayuda?

No, no que va, yo todo lo hice yo sola, bueno lo que si lo hice con UGT, que me ayudó mucho en rellenar los papeles, informarme de la documentación que piden, porque la policía entre que iba a preguntar y todo pues era complicado, y en dinero pues no tuve ninguna ayuda (risas), lo hice yo todo.

¿Quién te informo sobre UGT?

A UGT llegue por medio de mi hermana, ella como llevaba más tiempo me comentó, me dijo mira allí te ayudan a informarte, yo soy más de ir personalmente y de que me lo informen, de que a lo mejor me digas tu mira eso es así y no sea así no, o sea yo soy más de ir en persona, entonces yo fui y la verdad que si, muy bien. Hoy en día lo que es los DNI también tramito aquí en UGT yo, la verdad que si, a mi me han ayudado mucho en UGT.

Yo le daría la nota más alta sabes, porque hasta hoy en día a mi me han tratado muy bien, me han ayudado en lo que han podido, o sea también soy de ANAFE, pero más he hecho papeles con UGT, en ANAFE he seguido cursos, pero en cuestión de papeles y eso mas en UGT.

Valoración de la labor del profesional de trabajo social en el proceso

Pues la verdad también que un sobresaliente, porque también te informan, ellos te ayudan en todo lo que pueden, la verdad que por allí no tenía mucho contacto con trabajo social, yo haya fui a pedir una cita para que me ayuden a esto, pero nos sabía nada mas, pero aquí sí, cuando vine aquí yo estaba sin trabajo, pues la verdad es que te ayudan bastante, siempre están ahí a veces por cualquier cosa que necesitas, ellos van te ayudan te informan, así que muy bien.

Dificultades encontradas en el proceso

Pues lo que te comente, lo de la nomina y eso, yo a los servicios sociales no he ido desde hace tiempo, antes si cuando quería trabajar, que estaba sin trabajo, cuando mi marido estaba son documentación sí que iba, pero hoy en día ya llevo unos 2 años sin ir, yo cuando he ido la verdad que me han ayudado y me han atendido en lo yo he ido a informarme y a preguntar y todo, si me han ayudado.

Aspectos positivos vividos durante el proceso de reagrupación familiar.

Pues que todo me salió aceptado, sin ninguna dificultad sabes, desde que presente todo me salió ahí bien, o sea, no tenía ninguna dificultad, me ha faltaba alguna documentación, ni me han negado algo que haya presentado, como me pedían los requisitos que necesitaba, la verdad que yo presenté todo y me salió todo bien.

Ley de extranjería

Valoración

Pues con lo que tiene que ver con la reagrupación familiar bien, aunque ahora con ellos estoy enfadada(risas), porque me han denegado la nacionalidad, hoy en día sí que estoy un poco enfadada pero por lo de nacionalidad, pero muy bien por lo que te dan el DNI y todo, pero con la reagrupación bien, pero que cuando llegaron mi marido y mis hijas yo creo que te dan un mes de plazo para que te den el DNI, y eso todo bien, eso lo hice en pamplona así que todo bien.

Aspectos que cambiarías

Pues cambiar no, bueno ahora ha mejorado mucho en pamplona ahora vamos aquí, pero en pamplona ha mejorado mucho, antes tenía que madrugar a las 3 o 4 de la mañana para coger la cita para la policía, pero ahora ya sé que ahora dan con cita y todo, que han mejorado mas, antes costaba mucho llegara a coger una cita, hacías una cola larga y llegas y decían hasta aquí, se acabo y el que estaba ahí parado se quedaba, ahora es con cita y ya tu sabes a qué hora tienes que ir y todo, ha mejorado mucho.

¿Qué opinión tiene sobre la ley de extranjería en cuanto a la reagrupación familiar?

Bien, no tengo la verdad hasta hoy día de quejarme, salvo de la nacionalidad, la verdad que ha sido todo bien. Por una parte está bien todo lo que te obligan, como te comente, salvo el que no tenga trabajo y tenga alguna dificultad pero mientras estés trabajando y puedas presentar todo lo que te piden pues esta muy bien. Y para cambiar pues yo creo que dejen venir a otros familiares (risas)

¿Considera que la ley de extranjería favorece la integración de las personas inmigrantes?

Pues para mi parecer sí, porque sabes te ayuda bastante te da esa oportunidad de traer a tu familia, y está muy bien, ahora la reagrupación supe que estaba tardando mas, que iba tardar un año aquí y depende lo que tardara en cada país.

Anexo III. Guión de preguntas para la entrevista en profundidad a la trabajadora social de la mancomunidad de servicio social de base de Arguedas, Valtierra, Milagro, Villafranca y Cadreita, sobre temas relacionados con el trabajo social y la reagrupación familiar a personas inmigradas

Información del servicio en el que trabaja

- Nombre del servicio
- ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este servicio?
- Características del servicio
- ¿Qué Programas se ofrecen?
- ¿Qué servicios y prestaciones se ofrecen?
- ¿Cuentan con un programa específico de acogida a la población inmigrante? En caso afirmativo, ¿En qué consiste? ¿Qué valoración tienes de este programa?
- ¿Que perfil de personas usuarias suelen acudir al programa acogida social a la población inmigrante?

Sobre el proceso de reagrupación familiar

- ¿Cuál es el procedimiento para realizar una reagrupación familiar?
- Del total de personas que acuden al servicio, ¿qué porcentaje aproximado de personas lo hacen para solicitar información sobre la reagrupación familiar?
- ¿Cual es el papel del trabajador/a social en el proceso de reagrupación familiar?
- ¿Como suelen enterarse las personas usuarias de la posibilidad de ayuda del servicio para la realización de una reagrupación familiar?
- ¿Que cree que aporta el trabajo social en el proceso de reagrupación familiar?
- ¿Cómo valora el papel del profesional del trabajo social en el proceso de reagrupación familiar?
- ¿Cuál cree que son las ventajas y desventajas de la reagrupación familiar?

- ¿Cree que la reagrupación familiar es importante para la integración de las personas inmigrantes? ¿Por qué? ¿Para quién o quiénes? ¿Beneficia o perjudica a la población autóctona? ¿Por qué?
- ¿Que mejoraría del servicio prestado a las personas implicadas en el proceso de reagrupación familiar?
- ¿Qué crees que debería cambiar para que las personas reagrupantes y reagrupadas se sientan integradas en la sociedad de acogida? ¿Por parte de las instituciones/profesionales, por parte de las familias implicadas, por parte de la población de acogida, etc.?

Sobre la ley de extranjería

- ¿Cómo valora la ley de extranjería?
- ¿Qué cambiaría de la ley de extranjería?
- ¿Considera que la ley de extranjería favorece la integración de las personas inmigrantes?
- ¿Considera adecuada la legislación referente a la reagrupación familia? ¿Por qué?
- ¿Considera que se cumple la ley de extranjería?

Valoración general

- Valoración sobre el proceso de Reagrupación Familiar
- Consecuencias e impacto de la reagrupación familiar a nivel social, económico, familiar, educativo, laboral.
- Valoración del trabajo social en el proceso de reagrupación familiar.
- Protocolo de mejora de la práctica profesional

Anexo IV. Resultados/ notas tomadas de la entrevista en profundidad realizada a la trabajadora social de la mancomunidad de servicio social de base de Arguedas, Valtierra, Milagro, Villafranca y Cadreita, sobre temas relacionados con el trabajo social y la reagrupación familiar a personas inmigradas

Información del servicio en el que trabaja

La persona entrevistada es una trabajadora social que trabaja en la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base y ofrece servicios en Arguedas, Valtierra, Milagro, Villafranca y Cadreita. El tiempo que lleva trabajando en este servicio es de 8 años, es decir, comenzó en el año 2006.

El servicio en el que trabaja está destinado a aquella población de esta zona de la ribera, que necesite información, orientación, asesoramiento, y las ayudas sociales necesarias, para que mejoren su calidad de vida y estén integrados de la mejor manera en la sociedad. Dicho servicio está en coordinación con la dirección de política social y cooperación al desarrollo en cuanto al desarrollo de los programas que se ofrecen en los ayuntamientos de Cadreita, Arguedas, Valtierra, Milagro y Villafranca. Trabajan teniendo en cuenta el respeto e igualdad de trato, el trabajo eficiente y la coordinación en equipo.

Los programas que se ofrece desde ese servicio concretamente son 8: el de acogida y orientación social, el de promoción de la autonomía personal y atención a dependencia, de atención a familia e infancia, incorporación social, el programa de empleo social protegido, el de promoción y prevención social e inmigración y el de intervención con familias étnicas.

Los servicios que prestamos son los de información y orientación, gestión de las ayudas económicas, la promoción de la convivencia social, formación y asesoramiento social, también está el de atención a familias con menores, el de apoyo a la dinámica familiar, en este tratamos algunos conflictos en el hogar, situaciones de violencia de género, aspectos de ese tipo. También existe un servicio dirigido a los jóvenes, el servicio de atención a domicilio a personas dependientes y a familias que tiene alguna

necesidad y también se trabaja en la incorporación sociolaboral de personas que tienen dificultad para acceder a un empleo.

Anteriormente sí existía un programa específico de acogida a la población inmigrante, pero actualmente no se cuenta con este programa. Aunque si se presentan proyectos dirigido por ejemplo, a personas inmigrantes que tienen poco conocimiento del castellano o cursos de informática, así como actividades dirigidas un poco a la integración de los inmigrantes.

Con relación al perfil de las personas que acuden al servicio, suelen acudir más personas con dificultades económicas, que no tienen trabajo. En cuanto al sexo y la nacionalidad, suelen ir más mujeres de Ecuador o de Colombia, en general más de América latina. En cambio van al servicio más hombres árabes, porque como conocen más el idioma y son los que hacen vida pública, suelen ir más que las mujeres que se quedan en casa y suelen conocer poco el idioma.

Sobre el proceso de reagrupación familiar

En cuando al procedimiento para realizar una reagrupación familiar la trabajadora social afirma que desde ese servicio solo se realiza la valoración de la vivienda, si está en buen estado, si cuenta con las condiciones adecuadas para que puedan vivir todos. El proceso de información y asesoramiento se realiza más desde las entidades de iniciativa social, con las cuales están en coordinación, desde allí se les informa a las/los usuarios de los requisitos y demás tramites, después suelen acudir a su servicio con los papeles ya tramitados, y desde allí lo que se hace es acudir a su vivienda y hacer la valoración. La trabajadora social no se directamente a informar sobre reagrupación familiar, se hace más que todo desde UGT, ANAFE y CRUZ ROJA.

La entrevistada explica que conoce alguno de los requisitos para la realización del de la reagrupación, comenta que hay es el tener un año de residencia y que la persona que reagrupa haya solicitado la renovación de la residencia por lo menos un año más. También exigen que tengas medios económicos suficientes que te permitan hacerte cargo de los familiares que vas a reagrupar y lo último es lo que se hace desde allí, que es supervisar que la vivienda donde se supone que van a vivir este en buenas

condiciones. Refiere que en lo referente al proceso de reagrupación familiar solo conoce las cuestiones anteriores y dice que no controla otros aspectos de la reagrupación familiar, ya que directamente no se hace cargo. Son las entidades de iniciativa social las que tratan estos asuntos.

En relación al porcentaje de personas que acuden al servicio para solicitar información sobre la reagrupación familiar, la trabajadora social afirma que ha bajado el número de personas de personas que solicitan una reagrupación familiar. Sin embargo dice que hace unos años atrás había más gente que acudía a solicitar esa demanda, entre 10 ó 15 personas, pero ahora refiere que conoce pocas personas que haya acudido al servicio para informarse o solicitar una reagrupación familiar. Concretamente finales del año pasado y hasta esta fecha dice que solo han venido unas 5 ó 6 personas.

Sobre el papel que realiza como trabajadora social en relación a la reagrupación familiar, afirma que lo que hace en primer lugar es informarles y derivarlos a otras entidades en Tudela que están más especializadas en ese tema, allí si les explica todo lo que tienen que hacer y donde deben acudir, y luego vuelven con los papeles cumplimentados, para que ella les haga la revisión en su vivienda.

Respecto a la forma como las personas suelen enterarse de la posibilidad de ayuda de del servicio en lo referente a la reagrupación familiar, la entrevistada afirma que son sus amigos o sus familiares los que suelen darle la información. La mayoría acuden al ayuntamiento de Valtierra, que es donde se presta el servicio, aunque otros van directamente a Tudela, ya sea a UGT, ANAFE o CRUZ ROJA y después vuelven para continuar con el proceso. Hay muy poca gente que viene acude sin ningún conocimiento, suelen informarse antes de cómo funciona el servicio y luego acuden.

Al preguntarle sobre lo que aporta el trabajo social en el proceso de reagrupación familiar, refiere que esta profesión ofrece esa posibilidad de que las personas puedan informarse de la reagrupación en sí, de los requisitos que necesita, del lugar donde se realizan los tramites. Cree que es importante para que la persona se oriente y no se sienta sola en el proceso, que algunas veces suele ser muy peliagudo.

En lo referente a papel del profesional del trabajo social en el proceso de reagrupación familiar afirma que es buen papel, y que es necesario porque ayuda mucho a que la persona obtenga información, le resuelve muchas dudas y acompaña en ese proceso de reagrupación familiar, aunque piensa que no solo cuando se está haciendo la reagrupación es importante, si no también cuando ya los familiares están en el país de destino, porque pueden necesitar la ayuda profesional otros aspectos de su vida que no saben cómo resolver o les viene grande.

Al preguntarle sobre las ventajas y desventajas de la reagrupación familiar, refiere que para las familias son muchas las ventajas, porque les permite volver a estar con sus seres queridos, aunque reconoce que es duro para las personas venirse aquí sin alguno de sus seres queridos, y la reagrupación les permite esta opción. También la reagrupación permite la integración, que las familias salgan más de sus casas, se relacionen con las personas del pueblo, que los hijos acudan al colegio y se relacionen con los niños del pueblo.

Y con respecto a las desventajas, cree que la mayor desventaja es que en muchos casos para poder demostrar los ingresos que se les exige las personas tienen que pedir favores para que se les aumente la nómina y así poder realizar la reagrupación, entonces cuando ya están aquí los familiares, ese dinero especificado no es real y pasan muchas dificultades económicas, al no poder satisfacer bien las necesidades de todos por no tener suficientes ingresos.

Por otra parte creer que la reagrupación familiar es importante para la integración de las personas inmigrantes, añade que es importante tanto para los que reagrupan como para sus familiares, ya que les permiten de nuevo vivir juntos y relacionarse con la gente del país de acogida y hacer parte de la sociedad. Para los autóctonos cree que es bueno en el sentido que permite un intercambio de cultura y de estilos de vida, lo cual resulta muy enriquecedor.

Sobre la ley de extranjería

Respecto a la valoración que haría sobre la ley de extranjería, afirma que como es no lo manejo mucho, que no conoce en profundidad porque no le toca directamente informar sobre él, prefiere no realizar una valoración.

Con relación a los aspectos que cambiaría de la ley de extranjería, la entrevistada dice que no limitaría tanto en cuanto a la acreditación de ingresos, ya que afirma que actualmente la ley exige una cantidad de ingresos que muchas veces para los que quieren realizar la reagrupación les es imposible acreditar. Aunque refiere que también he visto casos en los que la gente se las ingenia para demostrar ingresos que no son realmente.

Valoración general

Al realizar una valoración del proceso de reagrupación familia, la trabajadora social comenta que general el proceso la reagrupación familia es muy importante, aunque muy duro para aquellas personas que les toca venirse y se encuentra solas aquí, que viven una doble vida. Cree que tiene muchas ventajas y que permite la integración de las personas inmigrantes.

Por último destaca que en el servicio se ha venido haciendo desde hace 4 años un protocolo de mejora, tanto en la mancomunidad de servicios sociales de base de Arguedas, Valtierra, Cadreita, Villafranca y Milagro, como en las entidades de iniciativa social.

Para finalizar, es importante señalar que la entrevistada no respondió a algunas preguntas relacionadas con la ley de extranjería y la reagrupación familiar, ya que refería no manejar algunos aspectos al no trabajar directamente en ellos.

Anexo V: Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y sus modificaciones.



REAL DECRETO 240/2007, DE 16 DE FEBRERO SOBRE ENTRADA, LIBRE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA EN ESPAÑA DE CIUDADANOS DE LOS

ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA Y DE OTROS ESTADOS PARTE EN EL ACUERDO SOBRE EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (BOE núm. 51, de 28 de febrero)

INCLUYE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO 1161/2009, DE 10 DE JULIO (BOE núm. 177, de 23 de julio), POR LA SENTENCIA DE 1 DE JUNIO DE 2010 DEL TRIBUNAL SUPREMO (BOE núm. 266, de 3 de noviembre) -RECTIFICADA, A SU VEZ, POR EL AUTO DE 13 DE ENERO DE 2011 (BOE núm. 54, de 4 de marzo)-, POR EL REAL DECRETO 1710/2011, DE 18 DE NOVIEMBRE (BOE núm. 285, de 26 de noviembre) Y POR EL REAL DECRETO-LEY 16/2012, DE 20 DE ABRIL (BOE núm. 98, de 24 de abril) -

España se adhirió a las Comunidades Europeas como Estado miembro de pleno derecho el 1 de enero de 1986, siendo necesario en aquellos momentos dictar el Real Decreto 1099/1986, de 26 de mayo, sobre entrada, permanencia y trabajo en España de ciudadanos de los Estados miembros de las Comunidades Europeas, en el que se regulaban las formalidades administrativas para el ejercicio de los derechos de entrada y permanencia en España por parte de los ciudadanos de sus Estados miembros para la realización de actividades por cuenta ajena o por cuenta propia o para prestar o recibir servicios al amparo de lo establecido en el Tratado de la Comunidad Económica Europea.

Posteriormente, el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó el Reglamento (CEE) 2194/1991, de 25 de junio de 1991, relativo al período transitorio aplicable a la libre circulación de los trabajadores entre España y Portugal y los restantes Estados miembros, y las Directivas 90/364/CEE, relativa al derecho de residencia; 90/365/CEE, relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que hayan dejado de ejercer una actividad profesional, y 93/96/CEE, relativa al derecho de residencia de los estudiantes, lo que motivó que se dictase el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas.

La entrada en vigor, el 1 de enero de 1994, del Acuerdo ratificado por España el 26 de noviembre de 1993, sobre el Espacio Económico Europeo, así como la necesaria adecuación del citado real decreto a la Jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (asunto 267/83, Diatta contra LandBerlin), obligaron a modificar el Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, por el Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, y por el Real Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre.

Debe también recordarse la vigencia, desde 1 de junio de 2002, del Acuerdo, de 21 de junio de 1999, entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza, sobre libre circulación de personas, por el que a los ciudadanos suizos y a los miembros de su

familia les es de aplicación el mismo tratamiento que a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y a sus familiares.

La firma, el 28 de julio de 2000, en Marsella, por los Ministros del Interior de Francia, Alemania, Italia y España, de una Declaración en la que se comprometían a suprimir la obligación de poseer una tarjeta de residencia en determinados supuestos, obligaba a introducir las correspondientes adaptaciones en el régimen contemplado en los reales decretos mencionados, por lo que se hizo necesario introducir la no exigencia de tarjeta de residencia para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que fueran activos, beneficiarios del derecho a residir con carácter permanente, estudiantes o familiares de estas personas que sean a su vez ciudadanos de los mencionados Estados.

Por otra parte, se consideró necesaria la elaboración de un nuevo texto normativo que derogara los entonces aún vigentes Real Decreto 766/1992, de 26 de junio, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de las Comunidades Europeas; Real Decreto 737/1995, de 5 de mayo, que lo modificaba, así como el Real Decreto 1710/1997, de 14 de noviembre, y por ello se aprobó el Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Posteriormente, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han valorado la necesidad de codificar y revisar los instrumentos comunitarios existentes, con objeto de simplificar y reforzar el derecho de libre circulación y residencia de todos los ciudadanos de la Unión Europea, lo que ha hecho necesario un acto legislativo único, con el fin de facilitar el ejercicio de este derecho.

Dicho acto legislativo lo ha constituido la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE. Dicho instrumento comunitario ha modificado el Reglamento (CEE) 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, y ha derogado diversas Directivas CEE en materia de desplazamiento y residencia, estancia de trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la Comunidad, establecimiento y libre prestación de servicios, y residencia de los estudiantes nacionales de los Estados miembros.

La Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, regula el derecho de entrada y salida del territorio de un Estado miembro, el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, y los trámites administrativos que deben realizar ante las Autoridades de los Estados miembros. Asimismo regula el derecho de residencia permanente, y finalmente establece limitaciones a los derechos de entrada y de residencia por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

En todo caso, la aprobación de la citada Directiva 2004/38/CE, de 29 de abril de 2004, ha hecho necesario proceder a incorporar su contenido al Ordenamiento jurídico español, todo ello de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 17 y 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea relativos a la ciudadanía de la Unión, así como a los derechos y principios inherentes a la misma, y al principio de no discriminación por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su redacción dada por las Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003 y 14/2003, debe recordarse que dicha Ley Orgánica es de aplicación para las personas incluidas en el ámbito de aplicación de este real decreto en aquellos aspectos que pudieran serles más favorables.

Igualmente, el derecho a la reagrupación familiar se determina como un derecho inherente al ciudadano de un Estado miembro, pero asociado necesariamente al ejercicio de su derecho de libre circulación y residencia en el territorio de los otros Estados miembros, todo ello de conformidad con la normativa comunitaria y con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. En este sentido, para regular la reagrupación familiar de ciudadanos españoles que no han ejercido el derecho de libre circulación, se introduce una Disposición final tercera que, a su vez, introduce dos nuevas Disposiciones adicionales, decimonovena y vigésima, en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre. Estas Disposiciones protegen especialmente al cónyuge o pareja de ciudadano español y a sus descendientes menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces.

El presente real decreto ha sido informado por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, por la Comisión Permanente de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración y por la Comisión Interministerial de Extranjería.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y del Interior, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 16 de febrero de 2007,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. El presente real decreto regula las condiciones para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia, residencia de carácter permanente y trabajo en España por parte de los ciudadanos de otros Estados

miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como las limitaciones a los derechos anteriores por razones de orden público, seguridad pública o salud pública.

2. El contenido del presente real decreto se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales y en los tratados internacionales en los que España sea parte.

Artículo 2. Aplicación a miembros de la familia del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. (Redactado conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010)

El presente real decreto se aplica también, cualquiera que sea su nacionalidad, y en los términos previstos por éste, a los familiares de ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando le acompañen o se reúnan con él, que a continuación se relacionan:

a) A su cónyuge, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio.

b) A la pareja con la que mantenga una unión análoga a la conyugal inscrita en un registro público establecido a esos efectos en un Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado parte en el Espacio Económico Europeo, y siempre que no se haya cancelado dicha inscripción, lo que deberá ser suficientemente acreditado. Las situaciones de matrimonio e inscripción como pareja registrada se considerarán, en todo caso, incompatibles entre sí.

c) A sus descendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja, menores de veintiún años, mayores de dicha edad que vivan a su cargo, o incapaces.

d) A sus ascendientes directos, y a los de su cónyuge o pareja registrada que vivan a su cargo, siempre que no haya recaído el acuerdo o la declaración de nulidad del vínculo matrimonial o divorcio, o se haya cancelado la inscripción registral de pareja.

Artículo 3. Derechos.

1. Las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto tienen derecho a entrar, salir, circular y residir libremente en territorio español, previo el cumplimiento de las formalidades previstas por éste y sin perjuicio de las limitaciones establecidas en el mismo.

2. Asimismo, las personas incluidas en el ámbito de aplicación del presente real decreto tienen derecho a acceder a cualquier actividad, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, prestación de servicios o estudios, en las mismas condiciones que los españoles, sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 39.4 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

En caso de finalización de la situación de familiar a cargo y eventual cesación en la condición de familiar de ciudadano de la Unión, será aplicable el artículo 96.5 del

Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. (Redactado conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010)

3. Los titulares de los derechos a que se refieren los apartados anteriores que pretendan permanecer o fijar su residencia en España durante más de tres meses estarán obligados a solicitar un certificado de registro o una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, según el procedimiento establecido en la presente norma.

4. Todos los ciudadanos de la Unión que residan en España conforme a lo dispuesto en el presente real decreto gozarán de igualdad de trato respecto de los ciudadanos españoles en el ámbito de aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Este derecho extenderá sus efectos a los miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente.

CAPÍTULO II

Entrada y salida

Artículo 4. Entrada.

1. La entrada en territorio español del ciudadano de la Unión se efectuará con el pasaporte o documento de identidad válido y en vigor y en el que conste la nacionalidad del titular.

2. Los miembros de la familia que no posean la nacionalidad de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo efectuarán su entrada con un pasaporte válido y en vigor, necesitando, además, el correspondiente visado de entrada cuando así lo disponga el Reglamento (CE) 539/2001, de 15 de marzo, por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación. La expedición de dichos visados será gratuita y su tramitación tendrá carácter preferente cuando acompañen al ciudadano de la Unión o se reúnan con él.

La posesión de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, válida y en vigor, expedida por otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, eximirá a dichos miembros de la familia de la obligación de obtener el visado de entrada y, a la presentación de dicha tarjeta, no se requerirá la estampación del sello de entrada o de salida en el pasaporte. (Redactado conforme al Real Decreto 1161/2009, de 10 de julio)

3. Cualquier resolución denegatoria de una solicitud de visado o de entrada, instada por una persona incluida en el ámbito de aplicación del presente real decreto deberá ser motivada. Dicha resolución denegatoria indicará las razones en que se base, bien por no acreditar debidamente los requisitos exigidos a tal efecto por el presente real decreto, bien por motivos de orden público, seguridad o salud públicas. Las razones serán puestas en conocimiento del interesado salvo que ello sea contrario a la seguridad del Estado.

4. En los supuestos en los que un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o un miembro de su familia, no dispongan de los documentos de viaje necesarios para la entrada en territorio español, o, en su caso, del visado, las Autoridades responsables del control fronterizo darán a estas personas, antes de proceder a su retorno, las máximas facilidades para que puedan obtener o recibir en un plazo razonable los documentos necesarios, o para que se pueda confirmar o probar por otros medios que son beneficiarios del ámbito de aplicación del presente real decreto, siempre que la ausencia del documento de viaje sea el único motivo que impida la entrada en territorio español.

Artículo 5. Salida.

Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y los miembros de su familia con independencia de su nacionalidad, tendrán derecho a salir de España para trasladarse a otro Estado miembro, ello con independencia de la presentación del pasaporte o documento de identidad en vigor a los funcionarios del control fronterizo si la salida se efectúa por un puesto habilitado, para su obligada comprobación, y de los supuestos legales de prohibición de salida por razones de seguridad nacional o de salud pública, o previstos en el Código Penal.

CAPÍTULO III

Estancia y residencia

Artículo 6. Estancia inferior a tres meses.

1. En los supuestos en los que la permanencia en España de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cualquiera que sea su finalidad, tenga una duración inferior a tres meses, será suficiente la posesión de pasaporte o documento de identidad en vigor, en virtud del cual se haya efectuado la entrada en territorio español, no computándose dicha permanencia a los efectos derivados de la situación de residencia.

2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para los familiares de los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que no sean nacionales de uno de estos Estados, y acompañen al ciudadano de uno de estos Estados o se reúnan con él, que estén en posesión de un pasaporte válido y en vigor, y que hayan cumplido los requisitos de entrada establecidos en el artículo 4 del presente real decreto.

Artículo 7. Residencia superior a tres meses de ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. (Redactado conforme al Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril)

1. Todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo tiene derecho de residencia en el territorio del Estado Español por un período superior a tres meses si:

- a) Es un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España, o
- b) Dispone, para sí y los miembros de su familia, de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España durante su período de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España, o
- c) Está matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por la administración educativa competente con arreglo a la legislación aplicable, con la finalidad principal de cursar estudios, inclusive de formación profesional; y cuenta con un seguro de enfermedad que cubre todos los riesgos en España y garantiza a la autoridad nacional competente, mediante una declaración o por cualquier otro medio equivalente de su elección, que posee recursos suficientes para sí y los miembros de su familia para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado español durante su período de residencia, o
- d) Es un miembro de la familia que acompaña a un ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o va a reunirse con él, y que cumple las condiciones contempladas en las letras a), b) o c).

2. El derecho de residencia establecido en el apartado 1 se ampliará a los miembros de la familia que no sean nacionales de un Estado miembro cuando acompañen al ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o se reúnan con él en el Estado español, siempre que dicho ciudadano cumpla las condiciones contempladas en las letras a), b) o c) de dicho apartado 1.

3. A los efectos de la letra a) del apartado 1, el ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que ya no ejerza ninguna actividad por cuenta ajena o por cuenta propia mantendrá la condición de trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en los siguientes casos:

- a) Si sufre una incapacidad temporal resultante de una enfermedad o accidente;
- b) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado, tras haber estado empleado durante más de un año, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo;
- c) Si, habiendo quedado en paro involuntario debidamente acreditado tras concluir un contrato de trabajo de duración determinada inferior a un año o habiendo quedado en paro involuntario durante los primeros doce meses, se ha inscrito en el servicio de empleo competente con el fin de encontrar un trabajo. En este caso, la condición de trabajador se mantendrá durante un período que no podrá ser inferior a seis meses;
- d) Si sigue una formación profesional. Salvo que se encuentre en situación de paro involuntario, el mantenimiento de la condición de trabajador exigirá que la formación guarde relación con el empleo previo.

4. No obstante lo dispuesto en la letra d) del apartado 1 y en el apartado 2, únicamente el cónyuge o persona a la que se refiere el apartado b) del artículo 2 y los hijos a cargo tendrán el derecho de residencia como miembros de la familia de

un ciudadano de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que cumple los requisitos de la letra c) del apartado 1 anterior.

5. Los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo estarán obligados a solicitar personalmente ante la oficina de extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros. Dicha solicitud deberá presentarse en el plazo de tres meses contados desde la fecha de entrada en España, siéndole expedido de forma inmediata un certificado de registro en el que constará el nombre, nacionalidad y domicilio de la persona registrada, su número de identidad de extranjero, y la fecha de registro.

6. Junto a la solicitud de inscripción, deberá presentarse el pasaporte o documento nacional de identidad válido y en vigor del solicitante, así como la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigibles para la inscripción establecidos en este artículo. En el supuesto de que el pasaporte o el documento nacional de identidad estén caducados, deberá aportarse copia de éstos y de la solicitud de renovación.

7. En lo que se refiere a medios económicos suficientes, no podrá establecerse un importe fijo, sino que habrá de tenerse en cuenta la situación personal de los nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En cualquier caso, dicho importe no superará el nivel de recursos por debajo del cual se concede asistencia social a los españoles o el importe de la pensión mínima de Seguridad Social.

Artículo 8. Residencia superior a tres meses con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.

1. Los miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo especificados en el artículo 2 del presente real decreto, que no ostenten la nacionalidad de uno de dichos Estados, cuando le acompañen o se reúnan con él, podrán residir en España por un período superior a tres meses, estando sujetos a la obligación de solicitar y obtener una «tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión».

2. La solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión deberá presentarse en el plazo de tres meses desde la fecha de entrada en España, ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde el interesado pretenda permanecer o fijar su residencia o, en su defecto, ante la Comisaría de Policía correspondiente. En todo caso, se entregará de forma inmediata un resguardo acreditativo de la presentación de la solicitud de la tarjeta, que será suficiente para acreditar su situación de estancia legal hasta la entrega de la tarjeta. La tenencia del resguardo no podrá constituir condición previa para el ejercicio de otros derechos o la realización de trámites administrativos, siempre que el beneficiario de los derechos pueda acreditar su situación por cualquier otro medio de prueba.

3. Junto con el impreso de solicitud de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, cumplimentado en el modelo oficial establecido al efecto, deberá presentarse la documentación siguiente:

a) Pasaporte válido y en vigor del solicitante. En el supuesto de que el documento esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.

b) Documentación acreditativa, en su caso debidamente traducida y apostillada o legalizada, de la existencia del vínculo familiar, matrimonio o unión registrada que otorga derecho a la tarjeta.

c) Certificado de registro del familiar ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo al que acompañan o con el que van a reunirse.

d) Documentación acreditativa, en los supuestos en los que así se exija en el artículo 2 del presente real decreto, de que el solicitante de la tarjeta vive a cargo del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo del que es familiar.

e) Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.

4. La expedición de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud. La resolución favorable tendrá efectos retroactivos, entendiéndose vigente la situación de residencia desde la fecha acreditada de entrada en España siendo familiar de ciudadano de la Unión. (Redactado conforme al Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre)

5. La tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión tendrá una validez de cinco años a partir de la fecha de su expedición, o por el período previsto de residencia del ciudadano de la Unión o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, si dicho periodo fuera inferior a cinco años.

Artículo 9. Mantenimiento a título personal del derecho de residencia de los miembros de la familia, en caso de fallecimiento, salida de España, nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, en relación con el titular del derecho de residencia.

(Enunciado redactado conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010)

1. El fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, su salida de España, o la nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, no afectará al derecho de residencia de los miembros de su familia ciudadanos de uno de dichos Estados. (Redactado conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010)

2. El fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en el caso de miembros de la familia que no sean ciudadanos de uno de dichos Estados, tampoco afectará a su derecho de residencia, siempre que éstos hayan residido en España, en calidad de miembros de la familia, antes del fallecimiento del titular del derecho.

Los familiares tendrán obligación de comunicar el fallecimiento a las autoridades competentes. (Redactado conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010)

3. La salida de España o el fallecimiento del ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo no supondrá la pérdida del derecho de residencia de sus hijos ni del progenitor que tenga atribuida la custodia efectiva de éstos, con independencia de su nacionalidad, siempre que dichos hijos residan en España y se encuentren matriculados en un centro de enseñanza para cursar estudios, ello hasta la finalización de éstos.

4. En el caso de nulidad del vínculo matrimonial, divorcio o cancelación de la inscripción como pareja registrada, de un nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con un nacional de un Estado que no lo sea, éste tendrá obligación de comunicar dicha circunstancia a las autoridades competentes. Para conservar el derecho de residencia, deberá acreditarse uno de los siguientes supuestos:

a) Duración de al menos tres años del matrimonio o situación de pareja registrada, hasta el inicio del procedimiento judicial de nulidad del matrimonio, divorcio o de la cancelación de la inscripción como pareja registrada, de los cuales deberá acreditarse que al menos uno de los años ha transcurrido en España.

b) Otorgamiento por mutuo acuerdo o decisión judicial, de la custodia de los hijos del ciudadano comunitario, al ex cónyuge o ex pareja registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea ni de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

c) Existencia de circunstancias especialmente difíciles como:

1. Haber sido víctima de violencia de género durante el matrimonio o la situación de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando exista una orden de protección a su favor o informe del Ministerio Fiscal en el que se indique la existencia de indicios de violencia de género, y con carácter definitivo cuando haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas.

2. Haber sido sometido a trata de seres humanos por su cónyuge o pareja durante el matrimonio o la situación de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando exista un proceso judicial en el que el cónyuge o pareja tenga la condición de imputado y su familiar la de posible víctima, y con carácter definitivo cuando haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas.

d) Resolución judicial o mutuo acuerdo entre las partes que determine el derecho de visita, al hijo menor, del ex cónyuge o ex pareja registrada que no sea ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, cuando dicho menor resida en España y dicha resolución o acuerdo se encuentre vigente. (Redactado conforme al Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre)

5. Cuando las Autoridades competentes consideren que existen dudas razonables en cuanto al cumplimiento de las condiciones establecidas en los artículos 8 y 9, podrán llevar a cabo comprobaciones al objeto de verificar si se cumplen las mismas. Dichas comprobaciones no tendrán en ningún caso carácter sistemático. (Añadido por el Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre)

CAPÍTULO IV

Residencia de carácter permanente

Artículo 10. Derecho a residir con carácter permanente.

1. Son titulares del derecho a residir con carácter permanente los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y los miembros de la familia que no sean nacionales de uno de dichos Estados, que hayan residido legalmente en España durante un período continuado de cinco años. Este derecho no estará sujeto a las condiciones previstas en el capítulo III del presente real decreto.

A petición del interesado, la Oficina de Extranjeros de la provincia donde éste tenga su residencia o, en su defecto, la Comisaría de Policía correspondiente, expedirá, con la mayor brevedad posible y tras verificar la duración de la residencia, un certificado del derecho a residir con carácter permanente.

2. Asimismo, tendrán derecho a la residencia permanente, antes de que finalice el período de cinco años referido con anterioridad, las personas en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) El trabajador por cuenta propia o ajena que, en el momento en que cese su actividad, haya alcanzado la edad prevista en la legislación española para acceder a la jubilación con derecho a pensión, o el trabajador por cuenta ajena que deje de ocupar la actividad remunerada con motivo de una jubilación anticipada, cuando hayan ejercido su actividad en España durante, al menos, los últimos doce meses y hayan residido en España de forma continuada durante más de tres años.

La condición de duración de residencia no se exigirá si el cónyuge o pareja registrada del trabajador es ciudadano español o ha perdido su nacionalidad española tras su matrimonio o inscripción como pareja registrada con el trabajador.

b) El trabajador por cuenta propia o ajena que haya cesado en el desempeño de su actividad como consecuencia de incapacidad permanente, habiendo residido en España durante más de dos años sin interrupción. No será necesario acreditar tiempo alguno de residencia si la incapacidad resultara de accidente de trabajo o de enfermedad profesional que dé derecho a una pensión de la que sea responsable, total o parcialmente, un organismo del Estado español.

La condición de duración de residencia no se exigirá si el cónyuge o pareja registrada del trabajador es ciudadano español o ha perdido su nacionalidad española tras su matrimonio o inscripción como pareja con el trabajador.

c) El trabajador por cuenta propia o ajena que, después de tres años consecutivos de actividad y de residencia continuadas en territorio español desempeñe su actividad, por cuenta propia o ajena, en otro Estado miembro y mantenga su

residencia en España, regresando al territorio español diariamente o, al menos, una vez por semana. A los exclusivos efectos del derecho de residencia, los períodos de actividad ejercidos en otro Estado miembro de la Unión Europea se considerarán cumplidos en España.

3. Los miembros de la familia del trabajador por cuenta propia o ajena que residan con él en España tendrán, con independencia de su nacionalidad, derecho de residencia permanente cuando el propio trabajador haya adquirido para sí el derecho de residencia permanente por hallarse incluido en alguno de los supuestos del apartado 2 anterior, expidiéndoseles o renovándose, cuando fuera necesario, una tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión.

4. A los efectos contemplados en el apartado 2 anterior, los períodos de desempleo involuntario, debidamente justificados por el servicio público de empleo competente, los períodos de suspensión de la actividad por razones ajenas a la voluntad del interesado, y las ausencias del puesto de trabajo o las bajas por enfermedad o accidente se considerarán como períodos de empleo.

5. Si el titular del derecho a residir en territorio español hubiera fallecido en el curso de su vida activa, con anterioridad a la adquisición del derecho de residencia permanente en España, los miembros de su familia que hubieran residido con él en el territorio nacional tendrán derecho a la residencia permanente siempre y cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que el titular del derecho a residir en territorio español hubiera residido, de forma continuada en España, en la fecha del fallecimiento durante, al menos, dos años.

b) Que el fallecimiento se haya debido a accidente de trabajo o enfermedad profesional.

c) Que el cónyuge supérstite fuera ciudadano español y hubiera perdido la nacionalidad española como consecuencia del matrimonio con el fallecido.

6. A los efectos del presente artículo, la continuidad de la residencia se valorará de conformidad con lo previsto en el presente real decreto.

7. Se perderá el derecho de residencia permanente por ausencia del territorio español durante más de dos años consecutivos.

Artículo 11. Tarjeta de residencia permanente para miembros de la familia que no tengan la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

1. Las autoridades competentes expedirán a los miembros de la familia con derecho de residencia permanente que no sean nacionales de otro Estado miembro de la Unión europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, una tarjeta de residencia permanente, en el plazo de tres meses contados desde la fecha en que la correspondiente solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente para su tramitación.

La solicitud deberá presentarse en el modelo oficial establecido al efecto, durante el mes anterior a la caducidad de la tarjeta de residencia, pudiendo también

presentarse dentro de los tres meses posteriores a dicha fecha de caducidad sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda. Dicha tarjeta será renovable automáticamente cada diez años.

2. Junto con la solicitud de la citada tarjeta de residencia permanente, deberá presentarse la documentación siguiente:

a) Pasaporte válido y en vigor del solicitante. En el supuesto de que dicho documento esté caducado, deberá aportarse copia de éste y de la solicitud de renovación.

b) Documentación acreditativa del supuesto que da derecho a la tarjeta.

c) Tres fotografías recientes en color, en fondo blanco, tamaño carné.

3. Las interrupciones de residencia no superiores a dos años consecutivos, no afectarán a la vigencia de la tarjeta de residencia permanente.

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes a los procedimientos de solicitud, tramitación, expedición y renovación de certificados de registro y tarjetas de residencia

Artículo 12. Tramitación y resolución de las solicitudes.

1. Las solicitudes de los certificados de registro y tarjetas de residencia previstos en el presente real decreto se presentarán personalmente en el modelo oficial establecido al efecto, se tramitarán con carácter preferente y se resolverán conforme a lo previsto en los artículos 7, 8 y 11 del presente real decreto.

2. La solicitud y tramitación del certificado de registro o de las tarjetas de residencia no supondrá obstáculo alguno a la permanencia provisional de los interesados en España, ni al desarrollo de sus actividades.

3. Las Autoridades competentes para tramitar y resolver las solicitudes de certificado de registro o de tarjetas de residencia que se regulan en el presente real decreto podrán, excepcionalmente, recabar información sobre posibles antecedentes penales del interesado a las autoridades del Estado de origen o a las de otros Estados.

4. Asimismo, cuando así lo aconsejen razones de salud pública y según lo previsto en el artículo 15 del presente real decreto, podrá exigirse al interesado la presentación de certificado médico acreditativo de su estado de salud.

Artículo 13. Renovación de las tarjetas de residencia.

En caso de que fuese necesaria la renovación de la tarjeta de residencia antes de la adquisición del derecho a residir con carácter permanente, dicha renovación se tramitará conforme a lo dispuesto en el presente real decreto, si bien en el caso de ascendientes y descendientes no se exigirá la aportación de la documentación acreditativa de la existencia del vínculo familiar que da derecho a la expedición de la tarjeta.

Artículo 14. Expedición y vigencia del certificado de registro y de la tarjeta de residencia.

1. La expedición del certificado de registro o de la tarjeta de residencia se realizará de conformidad con los modelos que determinen las Autoridades competentes y previo abono de la tasa correspondiente, de conformidad con la legislación vigente de tasas y precios públicos, cuya cuantía será la equivalente a la que se exige a los españoles para la obtención y renovación del documento nacional de identidad.

2. En todo caso, la vigencia de los certificados de registro y tarjetas de residencia contemplados en el presente real decreto, y el reemplazo de éstos por un documento acreditativo de la residencia permanente o una tarjeta de residencia permanente, respectivamente, estará condicionada al hecho de que su titular continúe encontrándose en alguno de los supuestos que dan derecho a su obtención. Los interesados deberán comunicar los eventuales cambios de circunstancias referidos a su nacionalidad, estado civil o domicilio a la Oficina de Extranjeros de la provincia donde residan o, en su defecto, a la Comisaría de Policía correspondiente.

3. La vigencia de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión caducará por las ausencias superiores a seis meses en un año. No obstante, dicha vigencia no se verá afectada por las ausencias de mayor duración del territorio español que se acredite sean debidas al cumplimiento de obligaciones militares o, que no se prolonguen más de doce meses consecutivos y sean debidas a motivos de gestación, parto, posparto, enfermedad grave, estudios, formación profesional, o traslados por razones de carácter profesional a otro Estado miembro o a un tercer país.

Esta caducidad por ausencia no será de aplicación a los titulares de tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión vinculados mediante una relación laboral a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o asociaciones, inscritas en el registro general correspondiente y reconocidas oficialmente de utilidad pública como cooperantes, y que realicen para aquéllas proyectos de investigación, cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria, llevados a cabo en el extranjero. Tampoco será de aplicación a los titulares de dicha tarjeta que permanezcan en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea para la realización de programas temporales de estudios promovidos por la propia Unión.

4. Sin perjuicio de la obligación de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo así como de sus familiares de solicitar y obtener el certificado de registro o la tarjeta de residencia y sus correspondientes renovaciones, los mismos podrán acreditar ser beneficiarios del régimen comunitario previsto en el presente Real Decreto por cualquier medio de prueba admitido en Derecho. (Añadido por el Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre)

CAPÍTULO VI

Limitaciones por razones de orden público, seguridad pública y salud pública

Artículo 15. Medidas por razones de orden público, seguridad y salud pública.

1. Cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes en relación con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o con los miembros de su familia:

- a) Impedir la entrada en España, aunque los interesados presenten la documentación prevista en el artículo 4 del presente real decreto.
- b) Denegar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros, o la expedición o renovación de las tarjetas de residencia previstas en el presente real decreto.
- c) Ordenar la expulsión o devolución del territorio español.

Únicamente podrá adoptarse una decisión de expulsión respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o a miembros de su familia, con independencia de su nacionalidad, que hayan adquirido el derecho de residencia permanente en España, si existen motivos graves de orden público o seguridad pública. Asimismo, antes de adoptarse una decisión en ese sentido, se tendrán en cuenta la duración de la residencia e integración social y cultural del interesado en España, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, y la importancia de los vínculos con su país de origen.

2. Aquellas personas que hayan sido objeto de una decisión de prohibición de entrada en España podrán presentar una solicitud de levantamiento de la misma en un plazo razonable que será determinado por la Autoridad competente en función de las circunstancias concurrentes y que constará en la resolución por la que se determine la prohibición de entrada. La solicitud de levantamiento de la prohibición de entrada se realizará con alegación de los motivos que demuestren un cambio material de las circunstancias que justificaron la prohibición de entrada en España. En todo caso, dicha solicitud podrá ser presentada transcurridos tres años desde la ejecución de la decisión de prohibición de entrada en España.

La Autoridad competente que resolvió dicha prohibición de entrada deberá resolver dicha solicitud en un plazo máximo de tres meses a partir de su presentación.

Durante el tiempo en el que dicha solicitud es examinada, el afectado no podrá entrar en España. (Redactado conforme al Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre)

3. La continuidad de la residencia referida en el presente real decreto se verá interrumpida por cualquier resolución de expulsión ejecutada válidamente contra el interesado.

4. En los casos en los que una resolución de expulsión vaya a ejecutarse más de dos años después de haberse dictado, las autoridades competentes deberán comprobar y valorar posibles cambios de circunstancias que pudieran haberse producido desde el momento en el que se adoptó la decisión de expulsión, así como la realidad de la amenaza que el interesado representa para el orden público o la seguridad pública.

5. La adopción de una de las medidas previstas en los apartados anteriores 1 a 4 se atenderá a los siguientes criterios:

a) Habrá de ser adoptada con arreglo a la legislación reguladora del orden público y la seguridad pública y a las disposiciones reglamentarias vigentes en la materia.

b) Podrá ser revocada de oficio o a instancia de parte cuando dejen de subsistir las razones que motivaron su adopción.

c) No podrá ser adoptada con fines económicos.

d) Cuando se adopte por razones de orden público o de seguridad pública, deberán estar fundadas exclusivamente en la conducta personal de quien sea objeto de aquéllas, que, en todo caso, deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, y que será valorada, por el órgano competente para resolver, en base a los informes de las Autoridades policiales, fiscales o judiciales que obren en el expediente. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas.

6. No podrá adoptarse una decisión de expulsión o repatriación respecto a ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, salvo si existen motivos imperiosos de seguridad pública, en los siguientes casos:

a) Si hubiera residido en España durante los diez años anteriores, o:

b) Si fuera menor de edad, salvo si la repatriación es conforme al interés superior del menor, no teniendo dicha repatriación, en ningún caso, carácter sancionador.

7. La caducidad del documento de identidad o del pasaporte con el que el interesado efectuara su entrada en España, o, en su caso, de la tarjeta de residencia, no podrá ser causa de expulsión.

8. El incumplimiento de la obligación de solicitar la tarjeta de residencia o del certificado de registro conllevará la aplicación de las sanciones pecuniarias que, en idénticos términos y para supuestos similares, se establezca para los ciudadanos españoles en relación con el Documento Nacional de Identidad.

9. Las únicas dolencias o enfermedades que pueden justificar la adopción de alguna de las medidas del apartado 1 del presente artículo serán las enfermedades con potencial epidémico, como se definen en los instrumentos correspondientes de la Organización Mundial de la Salud, así como otras enfermedades infecciosas o parasitarias contagiosas, de conformidad con la legislación española vigente.

Las enfermedades que sobrevengan tras los tres primeros meses siguientes a la fecha de llegada del interesado, no podrán justificar la expulsión de territorio español.

En los casos individuales en los que existan indicios graves que lo justifiquen, podrá someterse a la persona incluida en el ámbito de aplicación del presente real decreto, en los tres meses siguientes a la fecha de su llegada a España, a un reconocimiento médico gratuito para que se certifique que no padece ninguna de las enfermedades mencionadas en este apartado. Dichos reconocimientos médicos no podrán exigirse con carácter sistemático.

Artículo 16. Informe de la Abogacía del Estado.

1. La resolución administrativa de expulsión de un titular de tarjeta o certificado requerirá, con anterioridad a que se dicte, el informe previo de la Abogacía del Estado en la provincia, salvo en aquellos casos en que concurren razones de urgencia debidamente motivadas.

2. Sin perjuicio de los recursos administrativos y judiciales legalmente procedentes, la resolución de la Autoridad competente que ordene la expulsión de personas solicitantes de tarjeta de residencia o certificado de registro será sometida, previa petición del interesado, a examen de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado o de la Abogacía del Estado en la provincia. El interesado podrá presentar personalmente sus medios de defensa ante el órgano consultivo, a no ser que se opongan a ello motivos de seguridad del Estado. El dictamen de la Abogacía del Estado será sometido a la autoridad competente para que confirme o revoque la anterior resolución.

Artículo 17. Garantías procesales.

1. Cuando la presentación de recurso administrativo o judicial contra la resolución de expulsión vaya acompañada de la solicitud de una medida cautelar de suspensión de la ejecución de dicha resolución, no podrá producirse la expulsión en sí hasta el momento en que se haya adoptado la decisión sobre la medida cautelar, excepto si se da una de las siguientes circunstancias:

- a) Que la resolución de expulsión se base en una decisión judicial anterior.
- b) Que las personas afectadas hayan tenido acceso previo a la revisión judicial.
- c) Que la resolución de expulsión se base en motivos imperiosos de seguridad pública según lo señalado en el artículo 15.5.a) y d) del presente real decreto.

2. Durante la sustanciación del recurso judicial, el interesado no podrá permanecer en territorio español, salvo en el trámite de vista, en que podrá presentar personalmente su defensa, excepto que concurren motivos graves de orden público o de seguridad pública o cuando el recurso se refiera a una denegación de entrada en el territorio.

Artículo 18. Resolución.

1. Las resoluciones de expulsión serán dictadas por los Subdelegados del Gobierno o Delegados del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales.

2. Las resoluciones de expulsión deberán ser motivadas, con información acerca de los recursos que se puedan interponer contra ellas, plazo para hacerlo y autoridad ante quien se deben formalizar, así como, cuando proceda, del plazo concedido para abandonar el territorio español.

Las resoluciones de expulsión establecerán un plazo para abandonar el territorio español, que sólo podrá ser excepcionado en los supuestos en que concurra alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 17.1.

Excepto en casos urgentes, debidamente justificados, dicho plazo no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de notificación. En todo caso, la decisión adoptada sobre la duración del plazo no podrá suponer impedimento para el control de la resolución de expulsión en vía administrativa y/o judicial. (Redactado conforme al Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre)

Disposición adicional primera. Atribución de competencias.

Las competencias en materia de recepción de comunicaciones o resolución de solicitudes en el ámbito del presente real decreto no expresamente atribuidas serán ejercidas por el Jefe de la Oficina de Extranjeros de la provincia en la que el solicitante tenga su domicilio.

Disposición adicional segunda. Normativa aplicable a los procedimientos.

En lo no previsto en materia de procedimientos en el presente real decreto, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y en su normativa de desarrollo, con carácter supletorio y en la medida en que no se oponga a lo dispuesto en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y el derecho derivado de los mismos.

Disposición adicional tercera. Régimen especial de aplicación a los ciudadanos de algunos Estados no miembros de la Unión Europea ni Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

1. En virtud del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre libre circulación de personas, firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, a los ciudadanos suizos y a los miembros de su familia les es de aplicación lo previsto en el presente real decreto.

2. En virtud de acuerdos celebrados entre la Comunidad y sus Estados miembros, por una parte, y Estados no miembros de la Unión Europea ni Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, por otra, a los ciudadanos de dichos Estados terceros y a los miembros de su familia les será de aplicación lo previsto en el presente real decreto para el ejercicio de los derechos de entrada y salida, libre circulación, estancia, residencia y trabajo en España, cuando ello sea conforme con lo establecido en dichos acuerdos.

Disposición transitoria primera. Solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto.

Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto se tramitarán y resolverán conforme a lo previsto en él, salvo que el interesado solicite la aplicación de la normativa vigente en el momento de la solicitud y siempre que ello sea compatible con las previsiones del presente real decreto.

Disposición transitoria segunda. Atribución transitoria de competencias.

En las provincias en las que aún no haya sido creada la correspondiente Oficina de Extranjeros, las competencias en el ámbito del presente real decreto no expresamente atribuidas serán ejercidas por el Subdelegado del Gobierno o por el Delegado del Gobierno en las comunidades autónomas uniprovinciales.

Disposición transitoria tercera. Régimen especial de los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Estados miembros de la Unión Europea a los que se apliquen medidas transitorias para regular su acceso al mercado de trabajo español.

Los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Estados miembros que se incorporen a la Unión Europea, podrán verse sometidos a determinadas limitaciones de acceso al mercado de trabajo español en virtud de lo establecido en las Actas de adhesión de dichos Estados y de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Gobierno en cada caso respecto a la aplicación de un período transitorio sobre esta materia.

Las medidas transitorias que regulen su situación como trabajadores por cuenta ajena, que en ningún caso supondrán menoscabo alguno del resto de derechos contemplados en tanto que ciudadanos de la Unión Europea, determinarán la obligación de proveerse de la correspondiente autorización de trabajo por cuenta ajena. Las autorizaciones necesarias habrán de ser solicitadas y tramitadas según lo previsto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y su normativa de desarrollo, teniendo en cuenta lo establecido por las citadas Actas de adhesión y por el acervo comunitario aplicable.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados Parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como todas aquellas normas de igual o inferior rango que contradigan lo dispuesto en el presente real decreto.

Disposición final primera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Mediante el presente real decreto se incorpora al derecho español la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

1. El titular del Ministerio de la Presidencia, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, previo informe del Ministerio del Interior, podrá adoptar las medidas de desarrollo precisas para el cumplimiento y aplicación del presente real decreto que requieran la aprobación de la oportuna orden ministerial, y de las medidas de desarrollo precisas para el cumplimiento y aplicación del mismo que corresponden a los Centros directivos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, del Ministerio del Interior, y del Ministerio de Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias.

2. Asimismo, el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación podrá adoptar las medidas de desarrollo precisas para el cumplimiento y aplicación del presente real decreto que requieran la aprobación de la oportuna orden ministerial, ello con independencia de la competencia del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería e inmigración, y de las medidas de desarrollo precisas para el cumplimiento y aplicación del presente real decreto que corresponden a los centros directivos competentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en el ámbito de sus competencias.

Disposición final tercera. Modificación del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, queda modificado como sigue:

Uno. Se introduce una disposición adicional decimonovena:

«Disposición adicional decimonovena. Facilitación de la entrada y residencia de los familiares de ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, no incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Las Autoridades competentes facilitarán, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en el presente Reglamento, la obtención del visado de residencia o, en su caso, de una autorización de residencia por circunstancias excepcionales, a quien sin estar incluido en el artículo 2 del Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, acompañe a un ciudadano de la Unión o se reúna con él, y se halle en una de las siguientes circunstancias:

- a) Sea otro familiar, en línea directa o colateral, consanguínea o por afinidad, que, en el país de procedencia, esté a cargo o viva con el ciudadano de Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o cuando por motivos graves de salud o discapacidad, sea estrictamente necesario que dicho ciudadano se haga cargo de su cuidado personal, (Redactado conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010 y al Auto de 13 de enero de 2011)
- b) Sea la pareja, ciudadano de un Estado no miembro de la Unión Europea ni parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, con la que el ciudadano de la Unión mantiene una relación estable debidamente probada.

Las autoridades exigirán la presentación de acreditación, por parte de la autoridad competente del país de origen o procedencia, que certifique que está a cargo del ciudadano de la Unión o que vivía con él en ese país, o la prueba de la existencia de motivos graves de salud o discapacidad que requieran estrictamente que el ciudadano de la Unión se haga cargo del cuidado personal del miembro de la familia. Igualmente se exigirá prueba suficiente de la existencia de una relación estable con el ciudadano de la Unión.

Las autoridades competentes estudiarán detenidamente las circunstancias personales en las solicitudes de entrada, visado o autorizaciones de residencia presentadas y justificarán toda denegación de las mismas.»

Dos. (Derogado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2010)

Disposición final cuarta. Normativa subsidiaria y supletoria.

1. La entrada, permanencia y trabajo en España de los familiares de los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, incluidos en el ámbito de aplicación del presente real decreto, se regirán por la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en aquellos casos en que no quede acreditada la concurrencia de los requisitos previstos en el presente real decreto.

2. Las normas de carácter general contenidas en la citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como las normas reglamentarias vigentes sobre la materia, serán aplicables a los supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación del presente real decreto, con carácter supletorio y en la medida en que pudieran ser más favorables y no se opongan a lo dispuesto en los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, así como en el Derecho derivado de los mismos.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor al mes de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Anexo VI: Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y sus modificaciones.

LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL (BOE núm. 10, de 12 de enero)



INCLUYE LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA **LEY ORGÁNICA 8/2000**, DE 22 DE DICIEMBRE (BOE núm. 307, de 23 de diciembre. Corrección de errores en BOE núm. 47, de 23 de febrero de 2001), POR LA **LEY ORGÁNICA 11/2003**, DE 29 DE SEPTIEMBRE (BOE núm. 234, de 30 de septiembre), POR LA **LEY ORGÁNICA 14/2003**, DE 20 DE NOVIEMBRE (BOE núm. 279, de 21 de noviembre), POR LA **LEY ORGÁNICA 2/2009**, DE 11 DE DICIEMBRE (BOE núm. 299, de 12 de diciembre), POR LA **LEY ORGÁNICA 10/2011**, DE 27 DE JULIO (BOE núm. 180, de 28 de julio) Y POR EL **REAL DECRETO-LEY 16/2012**, DE 20 DE ABRIL (BOE núm. 98, de 24 de abril).

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
(Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre)

I

El 12 de enero de 2000 se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, habiéndose detectado durante su vigencia aspectos en los que la realidad del fenómeno migratorio supera las previsiones de la norma.

Al mismo tiempo, nuestra normativa debe ser conforme con los compromisos asumidos por España, concretamente, con las conclusiones adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea los días 16 y 17 de octubre de 1999 en Tampere sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia.

La reforma de la Ley Orgánica 4/2000 parte de la situación y características de la población extranjera en España, no sólo en la actualidad, sino de cara a los años venideros, regulándose la inmigración desde la consideración de ésta como un hecho estructural que ha convertido a España en un país de destino de los flujos migratorios y, por su situación, también en un punto de tránsito hacia otros Estados, cuyos controles fronterizos en las rutas desde el nuestro han sido eliminados o reducidos sustancialmente.

Por otra parte, esta normativa forma parte de un planteamiento global y coordinado en el tratamiento del fenómeno migratorio en España, que contempla desde una visión amplia todos los aspectos vinculados al mismo, y, por ello, no sólo desde una única perspectiva, como pueda ser la del control de flujos, la de la integración de residentes extranjeros, o la del desarrollo de los países de origen, sino todas ellas conjuntamente.

II

La presente Ley Orgánica contiene tres artículos, dedicándose el primero a la modificación del articulado de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, mientras que el artículo segundo modifica la disposición adicional única, añadiendo una nueva disposición adicional, y el tercero adecua los Títulos y capítulos de la misma a la reforma efectuada.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, conserva su estructura articulada en torno a un Título Preliminar dedicado a disposiciones generales y donde aparece concretado el ámbito de aplicación de la misma, cuatro Títulos, y se cierra con las oportunas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El Título I recoge los artículos dedicados a los "Derechos y libertades de los extranjeros", Título II sobre "Régimen Jurídico de los Extranjeros", Título III "De las Infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador" y finalmente el Título IV relativo a la "Coordinación de los poderes públicos en materia de inmigración".

III

La modificación del Título preliminar es una mera mejora gramatical en la definición de los extranjeros, conservándose las exclusiones del ámbito de la ley que se establecían en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

IV

Respecto a la modificación del Título 1, cuyo contenido es especialmente importante, se ha perseguido cumplir el mandato constitucional del artículo 13 que establece que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el Título I de la misma, en los términos que establezcan los Tratados y la Ley, así como la Jurisprudencia al respecto del Tribunal Constitucional (sentencias del Tribunal Constitucional 107/1984, de 23 de noviembre; 99/1985, de 30 de septiembre; 115/1987, de 7 de julio, etc.). Se ha conjugado este mandato constitucional con los compromisos internacionales adquiridos por España, especialmente como país miembro de la Unión Europea.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea acordaron el mes de octubre de 1999 en Tampere que se debía garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residieran legalmente en el territorio de sus Estados miembros. Una política de integración debe encaminarse a conceder a estos residentes derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión, así como a fomentar la ausencia de discriminación en la vida económica, social y cultural y al desarrollo de medidas contra el racismo y la xenofobia.

Las modificaciones introducidas a este Título I de la Ley destacan por la preocupación en reconocer a los extranjeros la máxima cota de derechos y libertades. En el apartado 1 del artículo 3 se establece que, como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles.

V

Con relación al Título II de la Ley Orgánica relativo al régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros, la premisa que ha informado las modificaciones efectuadas sobre su articulado ha sido la de establecer un régimen de situaciones y autorizaciones que incentiven a los extranjeros a entrar y residir en nuestro país dentro del marco de la regularidad, frente a la entrada y estancia irregular.

Este Título ha sido adaptado a lo establecido respecto a la entrada, régimen de expedición de visados, estancia y prórroga de estancia en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, en tanto que España forma parte de este Acuerdo.

Se ha mantenido la situación de residencia temporal y residencia permanente de los extranjeros, introduciéndose la posibilidad de concesión de una autorización de residencia temporal cuando concurren razones humanitarias o circunstancias excepcionales.

Se establece una diferencia entre la situación de las personas apátridas y la de todos aquellos extranjeros que, no pudiendo ser documentados por ningún país, desean obtener una documentación en España que acredite su identidad.

Respecto a la regulación de la autorización de trabajo que autoriza a los extranjeros a realizar en España actividades lucrativas por cuenta propia o ajena, se clarifica la diferencia entre dicha autorización y la mera situación de residencia legal, siendo igualmente destacable el tratamiento concedido en este nuevo texto al contingente de trabajadores extranjeros, estableciéndose unas excepciones al mismo en base a circunstancias determinadas por la situación del trabajador extranjero. En definitiva, se articula un régimen documental que facilita que el extranjero que desee trabajar en nuestro país, que lo pueda hacer con todas las garantías y derechos.

Finalmente, se ha modificado, para adecuarlo a la normativa vigente sobre tasas, el capítulo IV de este Título, relativo a las tasas por autorizaciones administrativas. El texto de la Ley Orgánica 4/2000 solamente hacía referencia a las tasas por autorizaciones administrativas para trabajar en España.

VI

En el Título III, relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, se han introducido modificaciones que pueden sintetizarse en dos apartados: medidas relativas a la lucha contra la inmigración ilegal y mejora de los mecanismos para evitar la inmigración ilegal.

Respecto al primer punto, es necesario destacar dos cuestiones distintas, como son las sanciones a las compañías de transporte y las sanciones que van dirigidas contra quienes organizan redes para el tráfico de seres humanos.

La reforma incluye en el contenido de la Ley Orgánica, conforme a los compromisos internacionales suscritos por España, como miembro de Schengen, sanciones a los transportistas que trasladen a extranjeros hasta el territorio español sin verificar que cumplen los requisitos para la entrada.

Respecto a las sanciones dirigidas contra el tráfico de personas, se introducen medidas para profundizar en la lucha contra dicho tráfico y explotación de seres humanos, permitiendo el control de determinadas actividades vinculadas al mismo o facilitando la neutralización de los medios empleados por los traficantes.

Por otra parte, partiendo de que en un Estado de derecho es necesario establecer los instrumentos que permitan hacer efectivo el cumplimiento de las normas, en este caso, de aquéllas que rigen la entrada y permanencia en territorio español, se ha introducido como infracción sancionable con expulsión la permanencia de forma ilegal en el territorio español, pretendiéndose, con ello, incrementar la capacidad de actuación del Estado en cuanto al control de la inmigración ilegal, al nivel de otros Estados miembros de la Unión Europea, que cuentan en sus ordenamientos jurídicos con la posibilidad de expulsar a los extranjeros que se encuentran en esta situación, un criterio que se refleja en las conclusiones del Consejo Europeo de Tampere.

VII

Finalmente, respecto al Título IV de la Ley Orgánica, relativo a la coordinación de los poderes públicos en materia de inmigración, se ha revisado la definición del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, enfocando la función de consulta, información y asesoramiento de este órgano hacia la integración de los

inmigrantes que se encuentran en España, que es uno de los principales objetivos de la Ley.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS **(Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre)**

I

El 23 de diciembre de 2000 se publicó en el "Boletín Oficial del Estado" la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dando con ello respuesta a las necesidades planteadas para abordar la inmigración como hecho estructural que ha convertido a España en un país de destino de los flujos migratorios.

La aprobación de la mencionada Ley Orgánica 8/2000, respondió también a la necesidad de incorporar los compromisos internacionales asumidos por España en esta materia. En especial, fue necesario recoger los principios adoptados por los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la Unión Europea en su reunión de 16 y 17 de octubre de 1999 en Tampere sobre la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia, así como el acervo Schengen sobre régimen de entrada, condiciones de expedición de visados, regulación de la estancia de los extranjeros, y responsabilidad y sanciones a transportistas.

Durante la vigencia de la Ley Orgánica 8/2000, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, han acontecido diversas circunstancias que, consideradas en su conjunto, han planteando la necesidad de adaptar aquélla a los continuos cambios de un fenómeno mutable como el migratorio. Así, junto al considerable incremento producido del número de residentes extranjeros en España en los últimos años, también se ha constatado un cambio en las formas en las que se produce el hecho inmigratorio del que nuestro país es receptor, lo que ha generado un mayor conocimiento de este fenómeno a fin de incorporar instrumentos normativos que posibiliten una mejor y más sencilla ordenación de los flujos migratorios, facilitando los medios a través de los que ha de desarrollarse la inmigración respetuosa con los cauces legales, y reforzando los mecanismos para incidir en la lucha contra la inmigración ilegal, cada vez más organizada y con mayores recursos para la consecución de sus objetivos.

Dichas circunstancias, unidas a la necesidad, por un lado, de adaptar la normativa interna en esta materia a las decisiones que durante los dos últimos años han sido tomadas en el seno de la Unión Europea, así como, por otro, incorporar determinadas consideraciones técnicas efectuadas por el Tribunal Supremo han aconsejado revisar diversos aspectos de la legislación vigente sobre extranjería e inmigración.

II

Los objetivos que se persiguen con esta reforma de la legislación vigente son:

1. La mejora de la gestión, mediante la simplificación de los trámites administrativos, y la del régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros en España, así como la determinación de los tipos de visado y los efectos de los mismos, y la lucha contra el uso fraudulento de los procedimientos administrativos de gestión en esta materia. Todo ello con el fin de favorecer la inmigración legal y la integración de los extranjeros que, de esta manera, accedan y residan en nuestro territorio.
2. El reforzamiento y, en definitiva, mejora de los medios e instrumentos sancionadores previstos en la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos. En este sentido, igualmente se potencia la colaboración con las compañías de transportes en orden a contar con mayor información sobre las personas que vayan

a ser trasladadas hasta el territorio español. Dicha información servirá para mejorar el fortalecimiento de los instrumentos disponibles para garantizar la seguridad en los transportes internacionales, especialmente los aéreos.

Así mismo, se refuerzan los procedimientos de devolución de extranjeros que acceden ilegalmente a nuestro país, y se extienden las conductas tipificadas como infracciones graves a todas las personas que, con ánimo de lucro, induzcan, favorezcan, promuevan, o faciliten la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino a España, o su permanencia en nuestro país.

3. La incorporación de las disposiciones aprobadas por la Unión Europea sobre exigibilidad de las tasas correspondientes a la expedición de visados, así como sobre sanciones a transportistas y reconocimiento mutuo de las resoluciones de expulsión, para impedir que aquellos extranjeros sobre los que hayan recaído éstas en cualquier Estado de la Unión, puedan intentar evitarlas trasladándose a otro Estado.

En lo relativo a las tasas por la expedición de visados, se incorporan las previsiones contenidas en la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2001, que modifica la parte VII y el anexo 12 de la Instrucción Consular Común, así como el anexo 14 a) del Manual Común. Las modificaciones legislativas introducidas tienen por objeto adecuar la ley interna española a la Decisión del Consejo y recogen el cambio del objeto del hecho imponible de la tasa que, en el caso del visado, pasa a ser la tramitación de la solicitud de éste.

Por lo que se refiere a los transportistas, se incorporan las previsiones recogidas en la Directiva 2001/51/CE, de 28 de junio de 2001, por la que se completan las disposiciones del artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen.

En cuanto a la ejecución de resoluciones de expulsión dictadas por otros Estados miembros de la Unión Europea, se adapta nuestra normativa a lo dispuesto en la Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países.

También se incorpora la Directiva 2002/90/CE, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares, a cuyo fin se perfecciona uno de los tipos sancionadores previstos en la ley.

4. Las incorporaciones al texto de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2003, relativas a la necesaria regulación, en la citada ley orgánica, de determinados preceptos del Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.

III

Esta ley orgánica contiene cuatro artículos, una disposición adicional única, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y tres disposiciones finales.

El artículo primero, el más extenso, recoge las modificaciones que se introducen en determinados preceptos de la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000.

El artículo segundo se limita a recoger una modificación en la disposición derogatoria única de la antedicha Ley Orgánica 8/2000.

El artículo tercero modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, a los efectos de perfeccionar la información contenida en el Padrón Municipal relativa a los extranjeros empadronados.

El artículo cuarto introduce una nueva disposición adicional en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con la finalidad de incorporar en el texto de

esta ley, con carácter expreso, una remisión a la Ley Orgánica 4/2000, para que a los procedimientos regulados en ésta se les apliquen las peculiaridades procedimentales que en la misma se introducen con carácter novedoso.

El artículo quinto introduce una modificación en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, considerando desleal la contratación de extranjeros sin autorización para trabajar obtenida conforme a lo dispuesto en la legislación sobre extranjería.

IV

Las modificaciones recogidas no afectan ni al catálogo de derechos ni a la estructura de la Ley Orgánica 4/2000, reformada por la Ley Orgánica 8/2000.

En primer lugar, se ha introducido una modificación para establecer la obligación de proveerse de una tarjeta de identidad de extranjero, como documento acreditativo de la autorización administrativa para residir, adaptando así nuestra normativa al Reglamento 1030/2002, del Consejo, de 13 de junio de 2002.

En materia de reagrupación familiar, para evitar fraudes en las "reagrupaciones en cadena", se ha incorporado a la ley orgánica, como presupuesto para el ejercicio de dicho derecho por parte de un residente que lo fuese en virtud de una previa reagrupación, el que éste sea titular de una autorización de residencia independiente, así como determinados requisitos concretos para el ejercicio de la reagrupación familiar en el caso de ascendientes previamente reagrupados.

Igualmente se precisan los supuestos en los que los cónyuges e hijos reagrupados pueden acceder a una autorización de residencia independiente, para lo que en todo caso se exigirá que cuenten con una previa autorización para trabajar.

Por otra parte, los cambios en materia de visados persiguen simplificar la tramitación administrativa, en aras a favorecer la inmigración legal de los extranjeros que desean residir en España, suprimiendo trámites innecesarios. Así, el visado, una vez que el extranjero ha entrado en España, le habilita para permanecer en la situación para la que le ha sido expedido.

En el cumplimiento de los objetivos fijados por la reforma una cuestión básica es la de dotar al visado de una nueva función adicional, cual es la de servir de acreditación documental de una previa autorización administrativa para residir y, en su caso, trabajar en España. De esta manera se anuda al visado un efecto novedoso: habilitar al extranjero a permanecer en nuestro país en la situación para la que se le hubiere expedido.

En la actualidad el visado carece de efecto alguno, una vez el extranjero ha entrado en España, debiendo él mismo acudir inmediatamente a las oficinas competentes para solicitar la correspondiente autorización de residencia y/o de trabajo. Con el nuevo modelo, además de lo anterior, el visado habilitará para permanecer en territorio nacional en la situación para cuyo fin haya sido concedido.

En efecto, si el visado no sólo sirve para entrar en España, sino que también habilita a permanecer y, en su caso, a trabajar, carece de sentido mantener la exención del mismo, ya que su concesión no sólo serviría para eximir de un requisito de entrada en nuestro país, sino, también, para eximir de la necesaria concesión de autorización para residir y trabajar.

Ello no significa que los supuestos de hecho que anteriormente se amparaban bajo la figura de la exención de visado vayan a quedar sin reflejo legal, ya que los mismos se incluyen ahora en el ámbito de la autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales, cuyos perfiles se modifican mediante la inclusión en la ley, en unos supuestos de manera concreta y en otros de manera más genérica "de supuestos excepcionales", habilitando al reglamento para una regulación más precisa de qué situaciones tendrán cabida dentro de este enunciado genérico.

Se introduce una mejora en la regulación de los supuestos en los que procederá la documentación de extranjeros indocumentados.

Igualmente, se incorporan las pertinentes modificaciones para introducir las precisiones que, en materia de tasas, recoge la mencionada Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2001.

En materia de infracciones y su régimen sancionador, se han incorporado modificaciones encaminadas a dotar al ordenamiento jurídico con mayores instrumentos para luchar contra la inmigración ilegal.

En relación con los centros de internamiento, se incluye en la ley orgánica un nuevo apartado dedicado a regular el régimen interno de dichos centros, garantizando el derecho de comunicación de los internos.

Por lo que se refiere a las compañías de transporte, se incorporan obligaciones al objeto de conocer la información de los pasajeros que vayan a ser trasladados a España antes de su partida del país de origen, así como sobre aquellos pasajeros que no abandonen el territorio español en la fecha prevista en el billete de viaje.

También se incluyen modificaciones para adaptar este título a las obligaciones derivadas de las directivas aprobadas por la Unión Europea sobre sanciones a transportistas y reconocimiento mutuo de resoluciones de expulsión.

Finalmente, las nuevas disposiciones adicionales que se incorporan a la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, van dirigidas, por un lado, a introducir instrumentos para mejorar la gestión de los procedimientos de extranjería con el objeto de ordenar adecuadamente, los flujos migratorios y evitar el uso fraudulento de aquéllos.

Para ello, se incorpora, con carácter general, la personación del interesado en la presentación de solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo, que deberán realizarse en los registros de los órganos competentes para su conocimiento.

Con ello se obtendrá una mayor inmediatez en la recepción de dichas solicitudes, ganando en eficiencia la tramitación de los procedimientos.

La última de las disposiciones adicionales recoge el principio de colaboración entre Administraciones públicas en materia de extranjería e inmigración, habilitando el acceso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los efectos exclusivos del cumplimiento de sus funciones, y con pleno respeto a las garantías establecidas en materia de protección de datos, a determinada información de la que dispongan otros órganos de la Administración del Estado.

V

Por último se incorporan a la ley los documentos acreditativos de la identidad de los extranjeros que deben constar en su inscripción padronal, adaptando el régimen de los ciudadanos comunitarios a lo dispuesto en el Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero, sobre entrada y permanencia en España de nacionales de Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

También se introduce una habilitación genérica de acceso al Padrón Municipal a favor de la Dirección General de la Policía con el objeto de mejorar el ejercicio de las competencias legalmente establecidas sobre el control y permanencia de los extranjeros en España. Esta habilitación se formula en términos de reciprocidad con el Instituto Nacional de Estadística, al establecer la obligación de la Dirección General de la Policía de comunicar al Instituto Nacional de Estadística, con el fin de mantener actualizado el contenido del Padrón, los datos de los extranjeros de que tenga constancia que pudieran haber sufrido variación en relación con los consignados en aquél.

PREÁMBULO
(Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre)

I

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social ha sido reformada en tres ocasiones desde su aprobación; en concreto, ha sido reformada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, de 29 de septiembre y 14/2003, de 20 de noviembre.

De todas las reformas que ha tenido la indicada Ley Orgánica cabe destacar, por su mayor calado, la que se llevó a cabo pocos meses después de su entrada en vigor a través de la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. Algunos de los cambios que introdujo esta última ley motivaron la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad contra la misma.

El Tribunal Constitucional ha resuelto los indicados recursos de inconstitucionalidad, entre otras, en las sentencias 236/2007, de 7 de noviembre, y 259/2007, de 19 de diciembre, reconociendo que la exigencia que la indicada ley imponía a los extranjeros para el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión, asociación, sindicación y huelga, de que tuvieran residencia legal en España, constituía una restricción injustificada y, por tanto, contraria a la Constitución, ya que según la misma los indicados derechos alcanzan a todas las personas por el hecho de serlo.

Consecuentemente con ello, el Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad de los artículos de la ley Orgánica 4/2000 que regulaban los indicados derechos fundamentales.

II

Por otro lado, ha ido creciendo el número de normas comunitarias que afectan al Derecho de Extranjería de los Estados europeos; así pues, cada vez son más las normas que se aprueban en la Unión Europea, en materia de inmigración, que deben ser incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico. En este orden de cuestiones, cabe destacar la firma del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, refrendado en el Consejo Europeo de 16 de octubre de 2008 por los 27 países miembros de la Unión Europea, en el cual se establecen como principales objetivos conseguir una inmigración legal y ordenada, luchar contra la inmigración ilegal y favorecer la integración de los inmigrantes legales mediante un equilibrio de derechos y deberes.

La presente Ley asume esta realidad como algo positivo en el convencimiento de que es necesario contar con un marco normativo europeo común en materia de inmigración.

Hasta el momento presente estaban pendientes de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico las Directivas que se han aprobado con posterioridad a la última reforma de la Ley 4/2000, de 11 de enero, realizada en diciembre de 2003, siendo estas las siguientes:

- a) Directiva 2003/110/CE, del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea. (DOUE de 6 de diciembre de 2003).
- b) Directiva 2003/109/CE, del Consejo, de 25 de noviembre, de 2003, relativa al Estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (DOUE de 23 de enero de 2004).
- c) Directiva 2004/81/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean

víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal que cooperen con las autoridades competentes (DOUE de 6 de agosto de 2004).

d) Directiva 2004/82/CE, del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas (DOUE de 6 de agosto de 2004).

e) Directiva 2004/114/CE, de 13 de diciembre de 2004, del Consejo, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado (DOUE de 23 de diciembre de 2004).

f) Directiva 2005/71/CE, de 12 de octubre de 2005, del Consejo, relativa a un procedimiento específico de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (DOUE de 3 de noviembre de 2005).

g) Directiva 2008/115/CEE, de 16 de diciembre de 2008, del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a las normas y procedimientos en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación de estancia ilegal (DOUE de 24 de diciembre de 2008).

h) Directiva 2009/50/CE, del Consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado (DOUE de 18 de junio de 2009).

i) Directiva 2009/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular (DOUE de 30 de junio de 2009).

En todo caso, conviene señalar que, aunque nuestra legislación es anterior a la aprobación de las indicadas directivas, muchos de los aspectos que se regulan en las mismas ya están recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, bien en la Ley 4/2000, de 11 de enero, en su redacción actual, o bien en el Reglamento de la misma que fue aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre.

Igualmente, resulta determinante a estos efectos la ratificación y entrada en vigor en nuestro país de las obligaciones dimanantes del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (Convenio n.º 197 del Consejo de Europa), hecho en Varsovia el 16 de mayo de 2005.

III

La inmigración es una realidad que está en constante cambio. Por ello, el legislador está obligado a adaptar su normativa reguladora, si quiere que la misma proporcione soluciones efectivas a los nuevos retos que se plantean.

Además, el fenómeno migratorio ha adquirido tal dimensión en España y tiene tales repercusiones en el orden económico, social y cultural que exige que por parte de los poderes públicos se desarrolle una actuación decidida en diversos frentes, incluido el normativo. Por lo tanto, los poderes públicos deben ordenar y canalizar legalmente los flujos migratorios de tal manera que los mismos se ajusten a nuestra capacidad de acogida y a las necesidades reales de nuestro mercado de trabajo.

Por otra parte, España está firmemente comprometida con la defensa de los derechos humanos, por lo que los poderes públicos deben favorecer la plena integración de los inmigrantes en nuestro país y garantizar la convivencia y la cohesión social entre los inmigrantes y la población autóctona.

IV

Así pues, tres son las causas que justifican la reforma que se propone de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, en su redacción actual:

- a) La necesidad de incorporar a dicha Ley Orgánica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, dando para ello una nueva redacción acorde con la Constitución, a los artículos de la misma que se han declarado inconstitucionales.
- b) La necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico, a través de la indicada Ley Orgánica, las Directivas europeas sobre inmigración que están pendientes de transposición o que no se han transpuesto plenamente.
- c) La necesidad de adaptar la referida Ley Orgánica a la nueva realidad migratoria en España, que presenta unas características y plantea unos retos diferentes de los que existían cuando se aprobó la última reforma de la ley.

V

Por otra parte, los objetivos que se persiguen con esta reforma son los siguientes:

1. Establecer un marco de derechos y libertades de los extranjeros que garantice a todos el ejercicio pleno de los derechos fundamentales.
2. Perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios laborales, reforzando la vinculación de la capacidad de acogida de trabajadores inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo.
3. Aumentar la eficacia de la lucha contra la inmigración irregular, reforzando los medios e instrumentos de control y los sancionadores, especialmente por lo que se refiere a quienes faciliten el acceso o permanencia de la inmigración ilegal en España, agravando el régimen sancionador en este caso y, reforzando los procedimientos de devolución de los extranjeros que han accedido ilegalmente a nuestro país.
4. Reforzar la integración como uno de los ejes centrales de la política de inmigración que, teniendo en cuenta el acervo de la Unión Europea en materia de inmigración y protección internacional, apuesta por lograr un marco de convivencia de identidades y culturas.
5. Adaptar la normativa a las competencias de ejecución laboral previstas en los Estatutos de Autonomía que inciden en el régimen de autorización inicial de trabajo, y a las competencias estatutarias en materia de acogida e integración, así como potenciar la coordinación de las actuaciones de las Administraciones Públicas con competencias que, asimismo, inciden en materia de inmigración y reforzar la cooperación entre ellas con el fin de prestar un servicio más eficaz y de mejor calidad a los ciudadanos.

Dado que durante el último periodo legislativo se han aprobado diversas reformas en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas que, por primera vez, incorporan competencias vinculadas a la inmigración, es lógico que se adapte su marco regulador al nuevo reparto competencial. Asimismo, atendido dicho reparto competencial, parece imprescindible que en esta Ley se concreten los niveles competenciales en un artículo, como lo es el nuevo artículo 2 bis, que define genéricamente los principios ordenadores de las políticas de inmigración en España.

6. Reforzar e institucionalizar el diálogo con las organizaciones de inmigrantes y con otras organizaciones con interés e implantación en el ámbito migratorio, incluyendo entre ellas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, en la definición y desarrollo de la política migratoria.

VI

La presente Ley Orgánica tiene un único artículo, recogiendo en el mismo todas las modificaciones que se introducen en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero,

tanto en el articulado como en sus disposiciones adicionales. Además, la Ley tiene varias disposiciones finales y una única disposición derogatoria.

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que se reforma, mantiene su estructura articulada que se integra en un Título Preliminar, artículos 1 al 2 ter, dedicado a las Disposiciones Generales, un Título I, artículos 3 al 24, dedicado a los derechos y libertades de los extranjeros, un Título II, artículos 25 al 49, dedicado al régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros, un Título III, artículos 50 al 66, dedicado a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador y un Título IV, artículos 67 al 72, dedicado a la coordinación de los poderes públicos; además, tiene nueve disposiciones adicionales, tres transitorias, una derogatoria y diez finales.

VII

Las modificaciones que se introducen en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, mediante la presente Ley Orgánica afectan a todos los títulos de la misma.

Resulta conveniente hacer una precisión de carácter general que afecta a distintos artículos sobre los términos de residencia o residente, que en todo caso deben entenderse referidos a una situación de estancia o residencia legal, esto es, conforme a los requisitos que se establecen y que, por tanto, habilitan a la permanencia del extranjero en nuestro país en cualquiera de las situaciones reguladas. Cuando se omite la alusión a la situación de estancia o residencia, como sucede para el ejercicio de los derechos fundamentales, es precisamente porque dicha situación no debe exigirse.

En el Título Preliminar se introduce un nuevo artículo 2 bis en el que se define la política migratoria, se establecen los principios y ejes de actuación de la misma y se indica su marco competencial, y un nuevo artículo 2 ter que ordena los principios y actuaciones en materia de integración de los inmigrantes.

En el Título I se introducen importantes modificaciones con el fin de perfilar lo que debe ser el marco de derechos y libertades de los extranjeros, junto a las correspondientes obligaciones, que implique el reconocimiento de los derechos fundamentales a los extranjeros cualquiera que sea su situación en España, así como el establecimiento de un sistema progresivo de acceso a los otros derechos basado en el refuerzo del estatus jurídico a medida que aumenta el periodo de residencia legal.

Destaca en este Título la nueva regulación de los derechos de reunión y manifestación, asociación, sindicación y huelga que podrán ejercerse de acuerdo con la Constitución Española, en los términos señalados por el Tribunal Constitucional, así como la nueva regulación que se hace de los derechos de educación, que se reconoce plenamente hasta los dieciocho años, así como el de asistencia jurídica gratuita, en cuya regulación se ha tenido en cuenta, además de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, las recomendaciones del Defensor del Pueblo. No obstante, debe señalarse igualmente que, según la propia interpretación del Tribunal Constitucional, ningún derecho es absoluto, lo que significa que el Estado mantiene toda la capacidad para imponer límites a la permanencia de los extranjeros cuando ésta no se sustenta en una residencia legal.

También destaca en este Título la nueva regulación que se da al derecho de reagrupación familiar; el cambio fundamental que se introduce es que los beneficiarios de la reagrupación, en línea con lo que ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, se acotan básicamente a los familiares que integran la familia nuclear; la novedad en este caso es que, dentro de esta categoría de familiares, se incluye a la pareja que tenga con el reagrupante una relación de afectividad análoga a la conyugal, y que a estos reagrupados se les facilita el acceso inmediato al mercado de trabajo. En cambio, esta reforma lleva a que la reagrupación de los ascendientes se limite, como norma general, a los mayores de

sesenta y cinco años, previendo que puedan existir razones humanitarias que la permitan con una edad inferior.

En el Título II se introducen importantes modificaciones, la mayoría de ellas consecuencia de la transposición de las Directivas europeas, destacando sobre todo las que incorporan nuevas situaciones de los extranjeros, las que están orientadas a perfeccionar el estatuto de los residentes de larga duración, las que están dirigidas a aumentar la eficacia de lucha contra la inmigración irregular, destacando entre ellas la creación de un registro para controlar las entradas y salidas. Cabe destacar también el nuevo artículo referido a las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, que les ofrece la posibilidad de obtener una autorización por circunstancias excepcionales y que pretende facilitar la denuncia de estos hechos. La Ley introduce también modificaciones para perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios, apostándose de nuevo por una inmigración ordenada en un marco de legalidad y consolidándose la política de inmigración que vincula la llegada de nuevos inmigrantes a las necesidades del mercado de trabajo. En este sentido, entre otras medidas, se regula con mayor nivel de concreción la situación nacional de empleo en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y se limitan las autorizaciones iniciales a una ocupación y ámbito territorial. Mención especial merecen las modificaciones que se realizan en relación a la integración de los menores extranjeros no acompañados, que propician un mejor tratamiento de la situación del menor, y que van, desde la posibilidad de su repatriación al país de origen, hasta garantizar, cuando ésta no resulte la respuesta idónea, las mejores condiciones para asegurar la plena integración de los mismos en la sociedad española, que debe ser un objetivo expreso del conjunto de las políticas llevadas a cabo por las distintas Administraciones públicas.

En el Título III, con el objetivo de reforzar la lucha contra la inmigración irregular se prevén nuevas infracciones para evitar actuaciones fraudulentas, tales como los matrimonios de conveniencia, la promoción de la inmigración irregular por medios indirectos o el falseamiento de los datos para el empadronamiento. Con la misma finalidad se propone el aumento de las sanciones económicas para todas las infracciones. Asimismo, se introducen determinadas modificaciones con el fin de dotar de mayor eficacia y más garantías, a las medidas de suspensión y devolución; también se contempla la ampliación del plazo de internamiento que pasaría a los 60 días desde los 40 que se aplican actualmente, así como se mejora la seguridad jurídica de los afectados, por estas medidas con la concesión de un plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsión.

En el Título IV se introducen determinadas modificaciones con el fin de reforzar la coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas en materia de inmigración y de institucionalizar en esta materia la participación de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

Entre las modificaciones que se introducen destacan la incorporación a la Ley de la Conferencia Sectorial de Inmigración, como uno de los cauces más eficaces para canalizar la cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, así como la exigencia de una actuación coordinada de ambas Administraciones Públicas, cuando la Comunidad Autónoma hubiera asumido competencias en materia de autorización inicial de trabajo.

Otra modificación importante es que la Ley reconoce e institucionaliza la Comisión Laboral Tripartita como cauce institucional para establecer el dialogo con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en materia de inmigración.

VIII

En coherencia con lo expuesto, se considera que esta reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, permitirá que en España se desarrolle una política

migratoria integral, integrada y sostenible que es la que se necesita para los próximos años.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. Delimitación del ámbito.

1. Se consideran extranjeros, a los efectos de la aplicación de la presente Ley, a los que carezcan de la nacionalidad española. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)
2. Lo dispuesto en esta Ley se entenderá, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales y en los Tratados internacionales en los que España sea parte. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)
3. Los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y aquellos a quienes sea de aplicación el régimen comunitario se regirán por las normas que lo regulan, siéndoles de aplicación la presente Ley en aquellos aspectos que pudieran ser más favorables. (Añadido por la Ley Orgánica 14/2003 y Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

Artículo 2. Exclusión del ámbito de la ley.

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta ley:

- a) Los agentes diplomáticos y los funcionarios consulares acreditados en España, así como los demás miembros de las misiones diplomáticas permanentes o especiales y de las oficinas consulares y sus familiares que, en virtud de las normas del Derecho internacional, estén exentos de las obligaciones relativas a su inscripción como extranjeros y a la obtención de la autorización de residencia.
- b) Los representantes, delegados y demás miembros de las Misiones permanentes o de las Delegaciones ante los Organismos intergubernamentales con sede en España o en Conferencias internacionales que se celebren en España, así como sus familiares. (Redactada conforme a la Ley Orgánica 2/2009)
- c) Los funcionarios destinados en Organizaciones internacionales o intergubernamentales con sede en España, así como sus familiares, a quienes los Tratados en los que sea parte España eximan de las obligaciones mencionadas en el párrafo a) de este artículo.

Artículo 2 bis. La política inmigratoria. (Añadido por la Ley Orgánica 2/2009)

1. Corresponde al Gobierno, de conformidad con lo previsto en el artículo 149.1.2.^a de la Constitución, la definición, planificación, regulación y desarrollo de la política de inmigración, sin perjuicio de las competencias que puedan ser asumidas por las Comunidades Autónomas y por las Entidades Locales.
2. Todas las Administraciones Públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas con la inmigración en el respeto a los siguientes principios:
 - a) la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea;
 - b) la ordenación de los flujos migratorios laborales, de acuerdo con las necesidades de la situación nacional del empleo;
 - c) la integración social de los inmigrantes mediante políticas transversales dirigidas a toda la ciudadanía;
 - d) la igualdad efectiva entre mujeres y hombres;

- e) la efectividad del principio de no discriminación y, consecuentemente, el reconocimiento de iguales derechos y obligaciones para todos aquellos que vivan o trabajen legalmente en España, en los términos previstos en la Ley;
- f) la garantía del ejercicio de los derechos que la Constitución, los tratados internacionales y las leyes reconocen a todas las personas;
- g) la lucha contra la inmigración irregular y la persecución del tráfico ilícito de personas;
- h) la persecución de la trata de seres humanos;
- i) la igualdad de trato en las condiciones laborales y de Seguridad Social;
- j) la promoción del diálogo y la colaboración con los países de origen y tránsito de inmigración, mediante acuerdos marco dirigidos a ordenar de manera efectiva los flujos migratorios, así como a fomentar y coordinar las iniciativas de cooperación al desarrollo y codesarrollo.

3. El Estado garantizará el principio de solidaridad, consagrado en la Constitución, atendiendo a las especiales circunstancias de aquellos territorios en los que los flujos migratorios tengan una especial incidencia.

Artículo 2 ter. Integración de los inmigrantes. (Añadido por la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite que el respeto a la Constitución y la ley.

2. Las Administraciones Públicas incorporarán el objetivo de la integración entre inmigrantes y sociedad receptora, con carácter transversal a todas las políticas y servicios públicos, promoviendo la participación económica, social, cultural y política de las personas inmigrantes, en los términos previstos en la Constitución, en los Estatutos de Autonomía y en las demás leyes, en condiciones de igualdad de trato.

Especialmente, procurarán, mediante acciones formativas, el conocimiento y respeto de los valores constitucionales y estatutarios de España, de los valores de la Unión Europea, así como de los derechos humanos, las libertades públicas, la democracia, la tolerancia y la igualdad entre mujeres y hombres, y desarrollarán medidas específicas para favorecer la incorporación al sistema educativo, garantizando en todo caso la escolarización en la edad obligatoria, el aprendizaje del conjunto de lenguas oficiales, y el acceso al empleo como factores esenciales de integración.

3. La Administración General del Estado cooperará con las Comunidades Autónomas, las Ciudades de Ceuta y Melilla y los Ayuntamientos para la consecución de las finalidades descritas en el presente artículo, en el marco de un plan estratégico plurianual que incluirá entre sus objetivos atender a la integración de los menores extranjeros no acompañados. En todo caso, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos colaborarán y coordinarán sus acciones en este ámbito tomando como referencia sus respectivos planes de integración.

4. De conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estratégico de Inmigración, el Gobierno y las Comunidades autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo.

TÍTULO I

Derechos y libertades de los extranjeros

CAPÍTULO I

Derechos y libertades de los extranjeros

Artículo 3. Derechos de los extranjeros e interpretación de las normas. (Denominación modificada por la Ley Orgánica 8/2000)

1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución en los términos establecidos en los Tratados internacionales, en esta Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos. Como criterio interpretativo general, se entenderá que los extranjeros ejercitan los derechos que les reconoce esta Ley en condiciones de igualdad con los españoles. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales de los extranjeros serán interpretadas de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias vigentes en España, sin que pueda alegarse la profesión de creencias religiosas o convicciones ideológicas o culturales de signo diverso para justificar la realización de actos o conductas contrarios a las mismas. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

Artículo 4. Derecho a la documentación. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros que se encuentren en territorio español tienen el derecho y el deber de conservar la documentación que acredite su identidad, expedida por las autoridades competentes del país de origen o de procedencia, así como la que acredite su situación en España.

2. Todos los extranjeros a los que se haya expedido un visado o una autorización para permanecer en España por un período superior a seis meses, obtendrán la tarjeta de identidad de extranjero, que deberán solicitar personalmente en el plazo de un mes desde su entrada en España o desde que se conceda la autorización, respectivamente. Estarán exceptuados de dicha obligación los titulares de un visado de residencia y trabajo de temporada.

Reglamentariamente se desarrollarán los supuestos en que se podrá obtener dicha tarjeta de identidad cuando se haya concedido una autorización para permanecer en España por un periodo no superior a seis meses.

3. Los extranjeros no podrán ser privados de su documentación, salvo en los supuestos y con los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

Artículo 5. Derecho a la libertad de circulación. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros que se hallen en España de acuerdo con lo establecido en el Título II de esta Ley, tendrán derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir su residencia sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición en el que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo, o como consecuencia de sentencia firme.

2. No obstante, podrán establecerse medidas limitativas específicas cuando se acuerden en la declaración de estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la Constitución, y, excepcionalmente por razones de seguridad pública, de forma individualizada, motivada y en proporción a las circunstancias que concurran en cada caso, por resolución del Ministro del Interior, adoptada de acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador previsto en la

Ley. Las medidas limitativas, cuya duración no excederá del tiempo imprescindible y proporcional a la persistencia de las circunstancias que justificaron la adopción de las mismas, podrán consistir en la presentación periódica ante las autoridades competentes y en el alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente.

Artículo 6. Participación pública. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros residentes en España podrán ser titulares del derecho de sufragio, en las elecciones municipales, en los términos establecidos en la Constitución, en los tratados internacionales, en su caso, y en la Ley.
2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que disponga la normativa de aplicación.
3. Los Ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio y mantendrán actualizada la información relativa a los mismos.
4. Los poderes públicos facilitarán el ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en los procesos electorales democráticos del país de origen.

Artículo 7. Libertades de reunión y manifestación.

1. Los extranjeros tienen el derecho de reunión en las mismas condiciones que los españoles. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)
2. Los promotores de reuniones o manifestaciones en lugares de tránsito público darán comunicación previa a la autoridad competente con la antelación prevista en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión, la cual no podrá prohibirla o proponer su modificación sino por las causas previstas en dicha Ley.

Artículo 8. Libertad de asociación. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

Todos los extranjeros tienen el derecho de asociación en las mismas condiciones que los españoles.

Artículo 9. Derecho a la educación. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros menores de dieciséis años tienen el derecho y el deber a la educación, que incluye el acceso a una enseñanza básica, gratuita y obligatoria. Los extranjeros menores de dieciocho años también tienen derecho a la enseñanza posobligatoria.

Este derecho incluye la obtención de la titulación académica correspondiente y el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles.

En caso de alcanzar la edad de dieciocho años en el transcurso del curso escolar, conservarán ese derecho hasta su finalización.

2. Los extranjeros mayores de dieciocho años que se hallen en España tienen derecho a la educación de acuerdo con lo establecido en la legislación educativa. En todo caso, los extranjeros residentes mayores de dieciocho años tienen el derecho a acceder a las demás etapas educativas posobligatorias, a la obtención de las titulaciones correspondientes, y al sistema público de becas en las mismas condiciones que los españoles.

3. Los poderes públicos promoverán que los extranjeros puedan recibir enseñanzas para su mejor integración social.

4. Los extranjeros residentes que tengan en España menores a su cargo en edad de escolarización obligatoria, deberán acreditar dicha escolarización, mediante informe emitido por las autoridades autonómicas competentes, en las solicitudes de renovación de su autorización o en su solicitud de residencia de larga duración.

Artículo 10. Derecho al trabajo y a la Seguridad Social. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros residentes que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen tienen derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a acceder al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente.

2. Los extranjeros podrán acceder al empleo público en los términos previstos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Artículo 11. Libertad de sindicación y de huelga. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros tienen derecho a sindicarse libremente o a afiliarse a una organización profesional, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles.

2. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la huelga en las mismas condiciones que los españoles.

Artículo 12. Derecho a la asistencia sanitaria. (Redactado conforme al Real Decreto-ley 16/2012)

Los extranjeros tienen derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en la legislación vigente en materia sanitaria.

Artículo 13. Derechos en materia de vivienda. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a los sistemas públicos de ayudas en materia de vivienda en los términos que establezcan las leyes y las Administraciones competentes. En todo caso, los extranjeros residentes de larga duración tienen derecho a dichas ayudas en las mismas condiciones que los españoles.

Artículo 14. Derecho a Seguridad Social y a los servicios sociales. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.

2. Los extranjeros residentes tienen derecho a los servicios y a las prestaciones sociales, tanto a las generales y básicas como a las específicas, en las mismas condiciones que los españoles. En cualquier caso, los extranjeros con discapacidad, menores de dieciocho años, que tengan su domicilio habitual en España, tendrán derecho a recibir el tratamiento, servicios y cuidados especiales que exija su estado físico o psíquico.

3. Los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.

Artículo 15. Sujeción de los extranjeros a los mismos impuestos que los españoles.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los acuerdos aplicables sobre doble imposición internacional, los extranjeros estarán sujetos, con carácter general, a los mismos impuestos que los españoles. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

2. Los extranjeros tienen derecho a transferir sus ingresos y ahorros obtenidos en España a su país, o a cualquier otro, conforme a los procedimientos establecidos en

la legislación española y de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para facilitar dichas transferencias. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

CAPÍTULO II

Reagrupación familiar

(Reordenado por la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 16. Derecho a la intimidad familiar.

1. Los extranjeros residentes tienen derecho a la vida en familia y a la intimidad familiar en la forma prevista en esta Ley Orgánica y de acuerdo con lo dispuesto en los Tratados internacionales suscritos por España.

2. Los extranjeros residentes en España tienen derecho a reagrupar con ellos a los familiares que se determinan en el artículo 17. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

3. El cónyuge que hubiera adquirido la residencia en España por causa familiar y sus familiares con él agrupados, conservarán la residencia aunque se rompa el vínculo matrimonial que dio lugar a la adquisición.

Reglamentariamente se podrá determinar el tiempo previo de convivencia en España que se tenga que acreditar en estos supuestos. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 17. Familiares reagrupables. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. El extranjero residente tiene derecho a reagrupar con él en España a los siguientes familiares:

a) El cónyuge del residente, siempre que no se encuentre separado de hecho o de derecho, y que el matrimonio no se haya celebrado en fraude de ley. En ningún caso podrá reagruparse a más de un cónyuge aunque la ley personal del extranjero admita esta modalidad matrimonial. El extranjero residente que se encuentre casado en segundas o posteriores nupcias por la disolución de cada uno de sus anteriores matrimonios sólo podrá reagrupar con él al nuevo cónyuge si acredita que la disolución ha tenido lugar tras un procedimiento jurídico que fije la situación del cónyuge anterior y de sus hijos comunes en cuanto al uso de la vivienda común, a la pensión compensatoria a dicho cónyuge y a los alimentos que correspondan a los hijos menores, o mayores en situación de dependencia. En la disolución por nulidad, deberán haber quedado fijados los derechos económicos del cónyuge de buena fe y de los hijos comunes, así como la indemnización, en su caso.

b) Los hijos del residente y del cónyuge, incluidos los adoptados, siempre que sean menores de dieciocho años o personas con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud. Cuando se trate de hijos de uno solo de los cónyuges se requerirá, además, que éste ejerza en solitario la patria potestad o que se le haya otorgado la custodia y estén efectivamente a su cargo. En el supuesto de hijos adoptivos deberá acreditarse que la resolución por la que se acordó la adopción reúne los elementos necesarios para producir efecto en España.

c) Los menores de dieciocho años y los mayores de esa edad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, debido a su estado de salud, cuando el residente extranjero sea su representante legal y el acto jurídico del que surgen las facultades representativas no sea contrario a los principios del ordenamiento español.

d) Los ascendientes en primer grado del reagrupante y de su cónyuge cuando estén a su cargo, sean mayores de sesenta y cinco años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España. Reglamentariamente se determinarán las condiciones para la reagrupación de los ascendientes de los residentes de larga duración en otro Estado miembro de la Unión Europea, de los trabajadores titulares de la tarjeta azul de la U.E. y de los beneficiarios del régimen especial de investigadores. Excepcionalmente, cuando concurren razones de carácter humanitario, podrá reagruparse al ascendiente menor de sesenta y cinco años si se cumplen las demás condiciones previstas en esta Ley.

2. Los extranjeros que hubieran adquirido la residencia en virtud de una previa reagrupación podrán, a su vez, ejercer el derecho de reagrupación de sus propios familiares, siempre que cuenten ya con una autorización de residencia y trabajo, obtenida independientemente de la autorización del reagrupante, y acrediten reunir los requisitos previstos en esta Ley Orgánica.

3. Cuando se trate de ascendientes reagrupados, éstos sólo podrán ejercer, a su vez, el derecho de reagrupación familiar tras haber obtenido la condición de residentes de larga duración y acreditado solvencia económica.

Excepcionalmente, el ascendiente reagrupado que tenga a su cargo un o más hijos menores de edad, o hijos con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, podrá ejercer el derecho de reagrupación en los términos dispuestos en el apartado segundo de este artículo, sin necesidad de haber adquirido la residencia de larga duración.

4. La persona que mantenga con el extranjero residente una relación de afectividad análoga a la conyugal se equipará al cónyuge a todos los efectos previstos en este capítulo, siempre que dicha relación esté debidamente acreditada y reúna los requisitos necesarios para producir efectos en España.

En todo caso, las situaciones de matrimonio y de análoga relación de afectividad se considerarán incompatibles entre sí.

No podrá reagruparse a más de una persona con análoga relación de afectividad, aunque la ley personal del extranjero admita estos vínculos familiares.

5. Reglamentariamente, se desarrollarán las condiciones para el ejercicio del derecho de reagrupación así como para acreditar, a estos efectos, la relación de afectividad análoga a la conyugal.

Artículo 18. Requisitos para la reagrupación familiar. (Añadido por la Ley Orgánica 8/2000 y redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros podrán ejercer el derecho a la reagrupación familiar cuando hayan obtenido la renovación de su autorización de residencia inicial, con excepción de la reagrupación de los familiares contemplados en el artículo 17.1 d) de esta Ley, que solamente podrán ser reagrupados a partir del momento en que el reagrupante adquiera la residencia de larga duración.

La reagrupación de los familiares de residentes de larga duración, de los trabajadores titulares de la tarjeta azul de la U.E. y de los beneficiarios del régimen especial de investigadores, podrá solicitarse y concederse, simultáneamente, con la solicitud de residencia del reagrupante. Cuando tengan reconocida esta condición en otro Estado miembro de la Unión Europea, la solicitud podrá presentarse en España o desde el Estado de la Unión Europea donde tuvieran su residencia, cuando la familia estuviera ya constituida en aquél.

2. El reagrupante deberá acreditar, en los términos que se establezcan reglamentariamente, que dispone de vivienda adecuada y de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades y las de su familia, una vez reagrupada.

En la valoración de los ingresos a efectos de la reagrupación, no computarán aquellos provenientes del sistema de asistencia social, pero se tendrán en cuenta otros ingresos aportados por el cónyuge que resida en España y conviva con el reagrupante.

Las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos informarán sobre la adecuación de la vivienda a los efectos de reagrupación familiar.

Las Administraciones Públicas promoverán la participación de los reagrupados en programas de integración socio-cultural y de carácter lingüístico.

3. Cuando los familiares a reagrupar sean menores en edad de escolarización obligatoria, la Administración receptora de las solicitudes deberá comunicar a las autoridades educativas competentes una previsión sobre los procedimientos iniciados de reagrupación familiar, a los efectos de habilitar las plazas necesarias en los centros escolares correspondientes.

Artículo 18 bis. Procedimiento para la reagrupación familiar. (Añadido por la Ley Orgánica 2/2009)

1. El extranjero que desee ejercer el derecho a la reagrupación familiar deberá solicitar una autorización de residencia por reagrupación familiar a favor de los miembros de su familia que desee reagrupar, pudiendo solicitarse de forma simultánea la renovación de la autorización de residencia y la solicitud de reagrupación familiar.

2. En caso de que el derecho a la reagrupación se ejerza por residentes de larga duración en otro Estado miembro de la Unión Europea que residan en España, la solicitud podrá presentarse por los familiares reagrupables, aportando prueba de residencia como miembro de la familia del residente de larga duración en el primer Estado miembro.

Artículo 19. Efectos de la reagrupación familiar en circunstancias especiales. (Añadido por la Ley Orgánica 8/2000 y redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. La autorización de residencia por reagrupación familiar de la que sean titulares el cónyuge e hijos reagrupados cuando alcancen la edad laboral, habilitará para trabajar sin necesidad de ningún otro trámite administrativo.

2. El cónyuge reagrupado podrá obtener una autorización de residencia independiente cuando disponga de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

En caso de que la cónyuge reagrupada fuera víctima de violencia de género, sin necesidad de que se haya cumplido el requisito anterior, podrá obtener la autorización de residencia y trabajo independiente, desde el momento en que se hubiera dictado a su favor una orden de protección o, en su defecto, informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género.

3. Los hijos reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente cuando alcancen la mayoría de edad y dispongan de medios económicos suficientes para cubrir sus propias necesidades.

4. Reglamentariamente se determinará la forma y la cuantía de los medios económicos considerados suficientes para que los familiares reagrupados puedan obtener una autorización independiente.

5. En caso de muerte del reagrupante, los familiares reagrupados podrán obtener una autorización de residencia independiente en las condiciones que se determinen.

CAPÍTULO III **Garantías jurídicas** **(Reordenado por la Ley Orgánica 8/2000)**

Artículo 20. Derecho a la tutela judicial efectiva.

1. Los extranjeros tienen derecho a la tutela judicial efectiva.
2. Los procedimientos administrativos que se establezcan en materia de extranjería respetarán en todo caso las garantías previstas en la legislación general sobre procedimiento administrativo, especialmente en lo relativo a publicidad de las normas, contradicción, audiencia del interesado y motivación de las resoluciones, salvo lo dispuesto en el artículo 27 de esta Ley. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)
3. En los procedimientos administrativos estarán legitimadas para intervenir como interesadas las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes, expresamente designadas por éstos. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)
4. En los procesos contencioso-administrativos en materia de extranjería estarán legitimadas para intervenir las entidades que resulten afectadas en los términos previstos por el artículo 19.1.b) de la Ley reguladora de dicha jurisdicción. (Añadido por la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 21. Derecho al recurso contra los actos administrativos.

1. Los actos y resoluciones administrativas adoptados en relación con los extranjeros serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes.
2. El régimen de ejecutividad de los actos administrativos dictados en materia de extranjería será el previsto con carácter general en la legislación vigente, salvo lo dispuesto en esta Ley para la tramitación de expedientes de expulsión con carácter preferente. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 22. Derecho a la asistencia jurídica gratuita. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procesos en los que sean parte, cualquiera que sea la jurisdicción en la que se sigan, en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles.
2. Los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución, o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de protección internacional, así como a la asistencia de intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice. Estas asistencias serán gratuitas cuando carezcan de recursos económicos suficientes según los criterios establecidos en la normativa reguladora del derecho de asistencia jurídica gratuita.
3. En los procesos contencioso-administrativos contra las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegación de entrada, devolución o expulsión, el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita requerirá la oportuna solicitud realizada en los términos previstos en las normas que regulan la asistencia jurídica gratuita. La constancia expresa de la voluntad de interponer el recurso o ejercitar la acción correspondiente deberá realizarse de conformidad con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o en caso de que el extranjero pudiera hallarse privado de libertad, en la forma y ante el funcionario público que reglamentariamente se determinen.

A los efectos previstos en este apartado, cuando el extranjero tuviera derecho a la asistencia jurídica gratuita y se encontrase fuera de España, la solicitud de la misma y, en su caso, la manifestación de la voluntad de recurrir, podrán realizarse ante la misión diplomática u oficina consular correspondiente.

CAPÍTULO IV

De las medidas antidiscriminatorias

(Reordenado por la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 23. Actos discriminatorios.

1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, económico, social o cultural.

2. En cualquier caso, constituyen actos de discriminación:

a) Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal encargado de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido por la ley contra un extranjero sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

b) Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

c) Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales y socioasistenciales, así como a cualquier otro derecho reconocido en la presente Ley Orgánica, al extranjero que se encuentre regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

d) Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio de una actividad económica emprendida legítimamente por un extranjero residente legalmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad.

e) Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 24. Aplicabilidad del procedimiento sumario.

La tutela judicial contra cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de derechos y libertades fundamentales podrá ser exigida por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución en los términos legalmente establecidos.

TÍTULO II

Régimen jurídico de los extranjeros

(Denominación modificada y reordenado por la Ley Orgánica 8/2000)

CAPÍTULO I

De la entrada y salida del territorio español

Artículo 25. Requisitos para la entrada en territorio español.

1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que

acredite su identidad, que se considere válido para tal fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España y no estar sujeto a prohibiciones expresas. Asimismo, deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y condiciones de estancia, y acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

2. Salvo en los casos en que se establezca lo contrario en los convenios internacionales suscritos por España o en la normativa de la Unión Europea, será preciso, además, un visado.

No será exigible el visado cuando el extranjero se encuentre provisto de la tarjeta de identidad de extranjero o, excepcionalmente, de una autorización de regreso. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no será de aplicación a los extranjeros que soliciten acogerse al derecho de asilo en el momento de su entrada en España, cuya concesión se regirá por lo dispuesto en su normativa específica.

4. Se podrá autorizar la entrada en España de los extranjeros que no reúnan los requisitos establecidos en los párrafos anteriores cuando existan razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España. En estos casos, se procederá a hacer entrega al extranjero de la documentación que se establezca reglamentariamente.

5. La entrada en territorio nacional de los extranjeros a los que no les sea de aplicación el régimen comunitario, podrá ser registrada por las autoridades españolas a los efectos de control de su período de permanencia legal en España, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. (Añadido por la Ley Orgánica 2/2009)

Artículo 25 bis. Tipos de visados. (Añadido por la Ley Orgánica 14/2003 y Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros que se propongan entrar en territorio español deberán estar provistos de visado, válidamente expedido y en vigor, extendido en su pasaporte o documento de viaje o, en su caso, en documento aparte, salvo lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de esta Ley.

2. Los visados a que se refiere el apartado anterior serán de una de las clases siguientes:

a) Visado de tránsito, que habilita a transitar por la zona de tránsito internacional de un aeropuerto español o a atravesar el territorio español. No será exigible la obtención de dicho visado en casos de tránsito de un extranjero a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea solicitado por un Estado miembro de la Unión Europea o por un tercer estado que tenga suscrito con España un acuerdo internacional sobre esta materia.

b) Visado de estancia, que habilita para una estancia ininterrumpida o estancias sucesivas por un período o suma de períodos cuya duración total no exceda de tres meses por semestre a partir de la fecha de la primera entrada.

c) Visado de residencia, que habilita para residir sin ejercer actividad laboral o profesional.

d) Visado de residencia y trabajo, que habilita para la entrada y estancia por un período máximo de tres meses y para el comienzo, en ese plazo, de la actividad laboral o profesional para la que hubiera sido previamente autorizado. En este tiempo deberá producirse el alta del trabajador en la Seguridad Social, que dotará de eficacia a la autorización de residencia y trabajo, por cuenta propia o ajena. Si transcurrido el plazo no se hubiera producido el alta, el extranjero quedará obligado

a salir del territorio nacional, incurriendo, en caso contrario, en la infracción contemplada en el artículo 53.1.a) de esta Ley.

e) Visado de residencia y trabajo de temporada, que habilita para trabajar por cuenta ajena hasta nueve meses en un período de doce meses consecutivos.

f) Visado de estudios, que habilita a permanecer en España para la realización de cursos, estudios, trabajos de investigación o formación, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado, no remunerados laboralmente.

g) Visado de investigación, que habilita al extranjero a permanecer en España para realizar proyectos de investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación.

3. Reglamentariamente, se desarrollarán los diferentes tipos de visados.

Artículo 26. Prohibición de entrada en España. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

1. No podrán entrar en España, ni obtener un visado a tal fin, los extranjeros que hayan sido expulsados, mientras dure la prohibición de entrada, así como aquellos que la tengan prohibida por otra causa legalmente establecida o en virtud de Convenios internacionales en los que sea parte España.

2. A los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos para la entrada, les será denegada mediante resolución motivada, con información acerca de los recursos que puedan interponer contra ella, plazo para hacerlo y autoridad ante quien deban formalizarlo, y de su derecho a la asistencia letrada, que podrá ser de oficio, y de intérprete, que comenzará en el momento mismo de efectuarse el control en el puesto fronterizo.

Artículo 27. Expedición del visado.

1. El visado se solicitará y expedirá en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de España, salvo en los supuestos excepcionales que se contemplen reglamentariamente o en los supuestos en los que el Estado español, de acuerdo con la normativa comunitaria sobre la materia, haya acordado su representación con otro Estado miembro de la Unión Europea en materia de visados de tránsito o estancia. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

2. La concesión del visado: (Añadido por la Ley Orgánica 14/2003)

a) Habilitará al extranjero para presentarse en un puesto fronterizo español y solicitar su entrada.

b) Habilitará al extranjero, una vez se ha efectuado la entrada en territorio español, a permanecer en España en la situación para la que hubiese sido expedido, sin perjuicio de la obligatoriedad de obtener, en su caso, la tarjeta de identidad de extranjero.

3. Reglamentariamente se establecerá la normativa específica del procedimiento de concesión y expedición de visados, conforme a lo previsto en la disposición adicional undécima de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En dicho procedimiento podrá requerirse la comparecencia personal del solicitante. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000 y reenumerado por la Ley Orgánica 14/2003)

4. El ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará a los compromisos internacionales vigentes en la materia y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior del Reino de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como la política de inmigración, la política económica y la de seguridad ciudadana. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000 y reenumerado por la Ley Orgánica 14/2003)

5. Para supuestos excepcionales podrán fijarse por vía reglamentaria otros criterios a los que haya de someterse el otorgamiento y denegación de visados. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000 y reenumerado por la Ley Orgánica 14/2003)

6. La denegación de visado deberá ser motivada cuando se trate de visados de residencia para reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena, así como en el caso de visados de estancia o de tránsito. Si la denegación se debe a que el solicitante del visado está incluido en la lista de personas no admisibles prevista en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1990, se le comunicará así de conformidad con las normas establecidas por dicho Convenio. La resolución expresará los recursos que contra la misma procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

Artículo 28. De la salida de España. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Las salidas del territorio español podrán realizarse libremente, excepto en los casos previstos en el Código Penal y en la presente Ley. La salida de los extranjeros a los que no les sea de aplicación el régimen comunitario, podrá ser registrada por las autoridades españolas a los efectos de control de su período de permanencia legal en España de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

2. Excepcionalmente, el Ministro del Interior podrá prohibir la salida del territorio español por razones de seguridad nacional o de salud pública. La instrucción y resolución de los expedientes de prohibición tendrá siempre carácter individual.

3. La salida será obligatoria en los siguientes supuestos:

a) Expulsión del territorio español por orden judicial, en los casos previstos en el Código Penal.

b) Expulsión o devolución acordadas por resolución administrativa en los casos previstos en la presente Ley.

c) Denegación administrativa de las solicitudes formuladas por el extranjero para continuar permaneciendo en territorio español, o falta de autorización para encontrarse en España.

d) Cumplimiento del plazo en el que un trabajador extranjero se hubiera comprometido a regresar a su país de origen en el marco de un programa de retorno voluntario.

CAPÍTULO II

De la autorización de estancia y de residencia (Modificada su denominación por la Ley Orgánica 2/2009)

Artículo 29. Enumeración de las situaciones.

1. Los extranjeros podrán encontrarse en España en las situaciones de estancia o residencia. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

2. Las diferentes situaciones de los extranjeros en España podrán acreditarse mediante pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, visado o tarjeta de identidad de extranjero, según corresponda. (Redactado conforme a la Ley 2/2009)

Artículo 30. Situación de estancia.

1. Estancia es la permanencia en territorio español por un período de tiempo no superior a 90 días, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 para la admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

2. Transcurrido dicho tiempo, para permanecer en España será preciso obtener o una prórroga de estancia o una autorización de residencia.

3. En los supuestos de entrada con visado, cuando la duración de éste sea inferior a tres meses, se podrá prorrogar la estancia, que en ningún caso podrá ser superior a tres meses, en un período de seis meses. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

4. En los supuestos de entrada sin visado, cuando concurren circunstancias excepcionales que lo justifiquen, podrá autorizarse la estancia de un extranjero en el territorio español más allá de tres meses. (Añadido por la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 30 bis. Situación de residencia. (Añadido por la Ley Orgánica 14/2003)

1. Son residentes los extranjeros que se encuentren en España y sean titulares de una autorización para residir.

2. Los residentes podrán encontrarse en la situación de residencia temporal o de residencia de larga duración. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

Artículo 31. Situación de residencia temporal. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. La residencia temporal es la situación que autoriza a permanecer en España por un período superior a 90 días e inferior a cinco años. Las autorizaciones de duración inferior a cinco años podrán renovarse, a petición del interesado, atendiendo a las circunstancias que motivaron su concesión. La duración de las autorizaciones iniciales de residencia temporal y de las renovaciones se establecerá reglamentariamente.

2. La autorización inicial de residencia temporal que no comporte autorización de trabajo se concederá a los extranjeros que dispongan de medios suficientes para sí y, en su caso, para los de su familia. Reglamentariamente se establecerán los criterios para determinar la suficiencia de dichos medios.

3. La Administración podrá conceder una autorización de residencia temporal por situación de arraigo, así como por razones humanitarias, de colaboración con la Justicia u otras circunstancias excepcionales que se determinen reglamentariamente.

En estos supuestos no será exigible el visado.

4. La autorización inicial de residencia temporal y trabajo, que autorizará a realizar actividades lucrativas por cuenta propia y/o ajena, se concederá de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 36 y siguientes de esta Ley.

5. Para autorizar la residencia temporal de un extranjero será preciso que carezca de antecedentes penales en España o en los países anteriores de residencia, por delitos existentes en el ordenamiento español, y no figurar como rechazable en el espacio territorial de países con los que España tenga firmado un convenio en tal sentido.

6. Los extranjeros con autorización de residencia temporal vendrán obligados a poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios de nacionalidad, estado civil y domicilio.

7. Para la renovación de las autorizaciones de residencia temporal, se valorará en su caso:

a) Los antecedentes penales, considerando la existencia de indultos o las situaciones de remisión condicional de la pena o la suspensión de la pena privativa de libertad.

b) El incumplimiento de las obligaciones del extranjero en materia tributaria y de seguridad social.

A los efectos de dicha renovación, se valorará especialmente el esfuerzo de integración del extranjero que aconseje su renovación, acreditado mediante un informe positivo de la Comunidad Autónoma que certifique la asistencia a las acciones formativas contempladas en el artículo 2 ter de esta Ley.

Artículo 31 bis. Residencia temporal y trabajo de mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. (Añadido por la Ley Orgánica 2/2009 y redactado conforme a la Ley Orgánica 10/2011)

1. Las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen garantizados los derechos reconocidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como las medidas de protección y seguridad establecidas en la legislación vigente.

2. Si al denunciarse una situación de violencia de género contra una mujer extranjera se pusiera de manifiesto su situación irregular, no se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a), y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se hubiera incoado por la comisión de dicha infracción con anterioridad a la denuncia o, en su caso, la ejecución de las órdenes de expulsión o de devolución eventualmente acordadas.

3. La mujer extranjera que se halle en la situación descrita en el apartado anterior, podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales a partir del momento en que se hubiera dictado una orden de protección a su favor o, en su defecto, Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia de género. Dicha autorización no se resolverá hasta que concluya el procedimiento penal. En el momento de presentación de la solicitud, o en cualquier otro posterior a lo largo del proceso penal, la mujer extranjera, por sí misma o través de representante, también podrá solicitar una autorización de residencia por circunstancias excepcionales a favor de sus hijos menores de edad o que tengan una discapacidad y no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades, o una autorización de residencia y trabajo en caso de que fueran mayores de 16 años y se encuentren en España en el momento de la denuncia.

Sin perjuicio de lo anterior, la autoridad competente para otorgar la autorización por circunstancias excepcionales concederá una autorización provisional de residencia y trabajo a favor de la mujer extranjera y, en su caso, las autorizaciones de residencia provisionales a favor de sus hijos menores de edad o con discapacidad, o de residencia y trabajo si fueran mayores de 16 años, previstas en el párrafo anterior, que se encuentren en España en el momento de la denuncia. Las autorizaciones provisionales eventualmente concedidas concluirán en el momento en que se concedan o denieguen definitivamente las autorizaciones por circunstancias excepcionales.

4. Cuando el procedimiento penal concluyera con una sentencia condenatoria o con una resolución judicial de la que se deduzca que la mujer ha sido víctima de violencia de género, incluido el archivo de la causa por encontrarse el imputado en paradero desconocido o el sobreseimiento provisional por expulsión del denunciado, se notificará a la interesada la concesión de las autorizaciones solicitadas. En el supuesto de que no se hubieran solicitado, se le informará de la posibilidad de concederlas, otorgándole un plazo para su solicitud.

Si del procedimiento penal concluido no pudiera deducirse la situación de violencia de género, se incoará el expediente administrativo sancionador por infracción del artículo 53.1.a) o se continuará, en el supuesto de que se hubiera suspendido inicialmente.

Artículo 32. Residencia de larga duración. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. La residencia de larga duración es la situación que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles.
2. Tendrán derecho a residencia de larga duración los que hayan tenido residencia temporal en España durante cinco años de forma continuada, que reúnan las condiciones que se establezcan reglamentariamente. A los efectos de obtener la residencia de larga duración computarán los periodos de residencia previa y continuada en otros Estados miembros, como titular de la tarjeta azul de la UE. Se considerará que la residencia ha sido continuada aunque por periodos de vacaciones u otras razones que se establezcan reglamentariamente el extranjero haya abandonado el territorio nacional temporalmente.
3. Los extranjeros residentes de larga duración en otro Estado miembro de la Unión Europea podrán solicitar por sí mismos y obtener una autorización de residencia de larga duración en España cuando vayan a desarrollar una actividad por cuenta propia o ajena, o por otros fines, en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. No obstante, en el supuesto de que los extranjeros residentes de larga duración en otro estado miembro de la Unión Europea deseen conservar el estatuto de residente de larga duración adquirido en el primer estado miembro, podrán solicitar y obtener una autorización de residencia temporal en España.
4. Con carácter reglamentario se establecerán criterios para la concesión de otras autorizaciones de residencia de larga duración en supuestos individuales de especial vinculación con España.
5. La extinción de la residencia de larga duración se producirá en los casos siguientes:
 - a) Cuando la autorización se haya obtenido de manera fraudulenta.
 - b) Cuando se dicte una orden de expulsión en los casos previstos en la Ley.
 - c) Cuando se produzca la ausencia del territorio de la Unión Europea durante 12 meses consecutivos. Reglamentariamente se establecerán las excepciones a la pérdida de la autorización por este motivo, así como el procedimiento y requisitos para recuperar la autorización de residencia de larga duración.
 - d) Cuando se adquiriera la residencia de larga duración en otro Estado miembro.
6. Las personas extranjeras que hayan perdido la condición de residentes de larga duración podrán recuperar dicho estatuto mediante un procedimiento simplificado que se desarrollará reglamentariamente.

Dicho procedimiento se aplicará sobre todo en el caso de personas que hayan residido en otro Estado miembro para la realización de estudios.

Artículo 33. Régimen de admisión a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Podrá ser autorizado, en régimen de estancia, el extranjero que tenga como fin único o principal realizar una de las siguientes actividades de carácter no laboral:
 - a) Cursar o ampliar estudios.
 - b) Realizar actividades de investigación o formación, sin perjuicio del régimen especial de los investigadores regulado en el artículo 38 bis de esta Ley.
 - c) Participar en programas de intercambio de alumnos en cualesquiera centros docentes o científicos, públicos o privados, oficialmente reconocidos.
 - d) Realizar prácticas.
 - e) Realizar servicios de voluntariado.

2. La vigencia de la autorización coincidirá con la duración del curso para el que esté matriculado, de los trabajos de investigación, del intercambio de alumnos, de las prácticas o del servicio de voluntariado.

3. La autorización se prorrogará anualmente si el titular demuestra que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la expedición de la autorización inicial y que cumple los requisitos exigidos, bien por el centro de enseñanza o científico al que asiste, habiéndose verificado la realización de los estudios o los trabajos de investigación, bien por el programa de intercambio o voluntariado, o centro donde realice las prácticas.

4. Los extranjeros admitidos con fines de estudio, prácticas no laborales o voluntariado podrán ser autorizados para ejercer una actividad retribuida por cuenta propia o ajena, en la medida en que ello no limite la prosecución de los estudios o actividad asimilada, en los términos que reglamentariamente se determinen.

5. La realización de trabajo en una familia para compensar la estancia y mantenimiento en la misma, mientras se mejoran los conocimientos lingüísticos o profesionales se regulará de acuerdo con lo dispuesto en los acuerdos internacionales sobre colocación «aupair».

6. Se facilitará la entrada y permanencia en España, en los términos establecidos reglamentariamente, de los estudiantes extranjeros que participen en programas de la Unión Europea destinados a favorecer la movilidad con destino a la Unión o en la misma.

7. Todo extranjero, admitido en calidad de estudiante en otro Estado miembro de la Unión Europea, que solicite cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar éstos en España podrá solicitar una autorización de estancia por estudios y obtenerla, si reúne los requisitos reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado.

A fin de que todo extranjero admitido en calidad de estudiante en España pueda solicitar cursar parte de sus estudios ya iniciados o completar éstos en otro Estado miembro de la Unión Europea, las Autoridades españolas facilitarán la información oportuna sobre la permanencia de aquél en España, a instancia de las Autoridades competentes de dicho Estado miembro.

8. Se someten al régimen de estancia previsto en este artículo los extranjeros que cursen en España estudios de formación sanitaria especializada de acuerdo con la Ley 44/2003, de 11 de noviembre, de profesiones sanitarias, salvo que ya contaran con una autorización de residencia previamente al inicio de los mismos, en cuyo caso podrán continuar en dicha situación.

Artículo 34. Residencia de apátridas, indocumentados y refugiados.

1. El Ministro del Interior reconocerá la condición de apátrida a los extranjeros que manifestando que carecen de nacionalidad reúnen los requisitos previstos en la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, y les expedirá la documentación prevista en el artículo 27 de la citada Convención. El estatuto de apátrida comportará el régimen específico que reglamentariamente se determine. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

2. En cualquier caso, el extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior acreditando que no puede ser documentado por las autoridades de ningún país y que desea ser documentado por España, una vez verificada la pertinente información y siempre que concurren y se acrediten razones excepcionales de índole humanitaria, interés público o cumplimiento de compromisos adquiridos por España, podrá obtener, en los términos que reglamentariamente se determinen, un documento identificativo que acredite su inscripción en las referidas dependencias. En todo caso, se denegará la

documentación solicitada cuando el peticionario esté incurso en alguno de los supuestos del artículo 26, o se haya dictado contra él una orden de expulsión. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

3. La resolución favorable sobre la petición de asilo en España supondrá el reconocimiento de la condición de refugiado del solicitante, el cual tendrá derecho a residir en España y a desarrollar actividades laborales, profesionales y mercantiles de conformidad con lo dispuesto en la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, y su normativa de desarrollo. Dicha condición supondrá su no devolución ni expulsión en los términos del artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 35. Menores no acompañados. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. El Gobierno promoverá el establecimiento de Acuerdos de colaboración con los países de origen que contemplen, integradamente, la prevención de la inmigración irregular, la protección y el retorno de los menores no acompañados. Las Comunidades Autónomas serán informadas de tales Acuerdos.

2. Las Comunidades Autónomas podrán establecer acuerdos con los países de origen dirigidos a procurar que la atención e integración social de los menores se realice en su entorno de procedencia. Tales acuerdos deberán asegurar debidamente la protección del interés de los menores y contemplarán mecanismos para un adecuado seguimiento por las Comunidades Autónomas de la situación de los mismos.

3. En los supuestos en que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad, se le dará, por los servicios competentes de protección de menores, la atención inmediata que precise, de acuerdo con lo establecido en la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato del Ministerio Fiscal, que dispondrá la determinación de su edad, para lo que colaborarán las instituciones sanitarias oportunas que, con carácter prioritario, realizarán las pruebas necesarias.

4. Determinada la edad, si se tratase de un menor, el Ministerio Fiscal lo pondrá a disposición de los servicios competentes de protección de menores de la Comunidad Autónoma en la que se halle.

5. La Administración del Estado solicitará informe sobre las circunstancias familiares del menor a la representación diplomática del país de origen con carácter previo a la decisión relativa a la iniciación de un procedimiento sobre su repatriación. Acordada la iniciación del procedimiento, tras haber oído al menor si tiene suficiente juicio, y previo informe de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal, la Administración del Estado resolverá lo que proceda sobre el retorno a su país de origen, a aquel donde se encontrasen sus familiares o, en su defecto, sobre su permanencia en España. De acuerdo con el principio de interés superior del menor, la repatriación al país de origen se efectuará bien mediante reagrupación familiar, bien mediante la puesta a disposición del menor ante los servicios de protección de menores, si se dieran las condiciones adecuadas para su tutela por parte de los mismos.

6. A los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años se les reconocerá capacidad para actuar en el procedimiento de repatriación previsto en este artículo, así como en el orden jurisdiccional contencioso administrativo por el mismo objeto, pudiendo intervenir personalmente o a través del representante que designen.

Cuando se trate de menores de dieciséis años, con juicio suficiente, que hubieran manifestado una voluntad contraria a la de quien ostenta su tutela o

representación, se suspenderá el curso del procedimiento, hasta el nombramiento del defensor judicial que les represente.

7. Se considerará regular, a todos los efectos, la residencia de los menores que sean tutelados en España por una Administración Pública o en virtud de resolución judicial, por cualquier otra entidad. A instancia del organismo que ejerza la tutela y una vez que haya quedado acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen, se otorgará al menor una autorización de residencia, cuyos efectos se retrotraerán al momento en que el menor hubiere sido puesto a disposición de los servicios de protección de menores. La ausencia de autorización de residencia no impedirá el reconocimiento y disfrute de todos los derechos que le correspondan por su condición de menor.

8. La concesión de una autorización de residencia no será obstáculo para la ulterior repatriación cuando favorezca el interés superior del menor, en los términos establecidos en el apartado cuarto de este artículo.

9. Reglamentariamente se determinarán las condiciones que habrán de cumplir los menores tutelados que dispongan de autorización de residencia y alcancen la mayoría de edad para renovar su autorización o acceder a una autorización de residencia y trabajo teniendo en cuenta, en su caso, los informes positivos que, a estos efectos, puedan presentar las entidades públicas competentes referidos a su esfuerzo de integración, la continuidad de la formación o estudios que se estuvieran realizando, así como su incorporación, efectiva o potencial, al mercado de trabajo. Las Comunidades Autónomas desarrollarán las políticas necesarias para posibilitar la inserción de los menores en el mercado laboral cuando alcancen la mayoría de edad.

10. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado adoptarán las medidas técnicas necesarias para la identificación de los menores extranjeros indocumentados, con el fin de conocer las posibles referencias que sobre ellos pudieran existir en alguna institución pública nacional o extranjera encargada de su protección. Estos datos no podrán ser usados para una finalidad distinta a la prevista en este apartado.

11. La Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas podrán establecer convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de los menores extranjeros no acompañados.

Cada convenio especificará el número de menores cuya tutela se compromete a asumir la entidad correspondiente, el lugar de residencia y los medios materiales que se destinarán a la atención de los mismos.

Estará legitimada para promover la constitución de la tutela la Comunidad Autónoma bajo cuya custodia se encuentre el menor. A tales efectos, deberá dirigirse al juzgado competente que proceda en función del lugar en que vaya a residir el menor, adjuntando el convenio correspondiente y la conformidad de la entidad que vaya a asumir la tutela.

El régimen de la tutela será el previsto en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Además, serán aplicables a los menores extranjeros no acompañados las restantes previsiones sobre protección de menores recogidas en el Código Civil y en la legislación vigente en la materia.

12. Las Comunidades Autónomas podrán llegar a acuerdos con las Comunidades Autónomas donde se encuentren los menores extranjeros no acompañados para asumir la tutela y custodia, con el fin de garantizar a los menores unas mejores condiciones de integración.

CAPÍTULO III

De las autorizaciones para la realización de actividades lucrativas

(Modificada su denominación por la Ley Orgánica 2/2009)

Artículo 36. Autorización de residencia y trabajo. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros mayores de dieciséis años precisarán, para ejercer cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, de la correspondiente autorización administrativa previa para residir y trabajar. La autorización de trabajo se concederá conjuntamente con la de residencia, salvo en los supuestos de penados extranjeros que se hallen cumpliendo condenas o en otros supuestos excepcionales que se determinen reglamentariamente.

2. La eficacia de la autorización de residencia y trabajo inicial se condicionará al alta del trabajador en la Seguridad Social. La Entidad Gestora comprobará en cada caso la previa habilitación de los extranjeros para residir y realizar la actividad.

3. Cuando el extranjero se propusiera trabajar por cuenta propia o ajena, ejerciendo una profesión para la que se exija una titulación especial, la concesión de la autorización se condicionará a la tenencia y, en su caso, homologación del título correspondiente y, si las leyes así lo exigiesen, a la colegiación.

4. Para la contratación de un extranjero, el empleador deberá solicitar la autorización a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, que en todo caso deberá acompañarse del contrato de trabajo que garantice una actividad continuada durante el periodo de vigencia de la autorización.

5. La carencia de la autorización de residencia y trabajo, sin perjuicio de las responsabilidades del empresario a que dé lugar, incluidas las de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derechos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones derivadas de supuestos contemplados por los convenios internacionales de protección a los trabajadores u otras que pudieran corresponderle, siempre que sean compatibles con su situación. En todo caso, el trabajador que carezca de autorización de residencia y trabajo no podrá obtener prestaciones por desempleo.

Salvo en los casos legalmente previstos, el reconocimiento de una prestación no modificará la situación administrativa del extranjero.

6. En la concesión inicial de la autorización administrativa para trabajar podrán aplicarse criterios especiales para determinadas nacionalidades en función del principio de reciprocidad.

7. No se concederá autorización para residir y realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, a los extranjeros que, en el marco de un programa de retorno voluntario a su país de origen, se hubieran comprometido a no retornar a España durante un plazo determinado en tanto no hubiera transcurrido dicho plazo.

8. Reglamentariamente se determinarán las condiciones y requisitos para hacer posible la participación de trabajadores extranjeros en sociedades anónimas laborales y sociedades cooperativas.

Artículo 37. Autorización de residencia y trabajo por cuenta propia. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Para la realización de actividades económicas por cuenta propia habrá de acreditarse el cumplimiento de todos los requisitos que la legislación vigente exige a los nacionales para la apertura y funcionamiento de la actividad proyectada, así como los relativos a la suficiencia de la inversión y la potencial creación de empleo, entre otros que reglamentariamente se establezcan.

2. La autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta propia se limitará a un ámbito geográfico no superior al de una Comunidad Autónoma, y a un sector de actividad. Su duración se determinará reglamentariamente.

3. La concesión de la autorización inicial de trabajo, en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponderá a las Comunidades Autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.

Artículo 38. Autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.
(Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Para la concesión inicial de la autorización de residencia y trabajo, en el caso de trabajadores por cuenta ajena, se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo.

2. La situación nacional de empleo será determinada por el Servicio Público de Empleo Estatal con la información proporcionada por las Comunidades Autónomas y con aquella derivada de indicadores estadísticos oficiales y quedará plasmada en el Catálogo de Ocupaciones de Dificil Cobertura. Dicho catálogo contendrá una relación de empleos susceptibles de ser satisfechos a través de la contratación de trabajadores extranjeros y será aprobado previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

Igualmente, se entenderá que la situación nacional de empleo permite la contratación en ocupaciones no catalogadas cuando de la gestión de la oferta se concluya la insuficiencia de demandantes de empleo adecuados y disponibles. Reglamentariamente se determinarán los requisitos mínimos para considerar que la gestión de la oferta de empleo es considerada suficiente a estos efectos.

3. El procedimiento de concesión de la autorización de residencia y trabajo inicial, sin perjuicio de los supuestos previstos cuando el extranjero que se halle en España se encuentre habilitado para solicitar u obtener una autorización de residencia y trabajo, se basará en la solicitud de cobertura de un puesto vacante, presentada por un empresario o empleador ante la autoridad competente, junto con el contrato de trabajo y el resto de documentación exigible, ofrecido al trabajador extranjero residente en un tercer país. Verificado el cumplimiento de los requisitos, la autoridad competente expedirá una autorización cuya eficacia estará condicionada a que el extranjero solicite el correspondiente visado y que, una vez en España, se produzca el alta del trabajador en la Seguridad Social.

4. El empresario o empleador estará obligado a comunicar el desistimiento de la solicitud de autorización si, mientras se resolviera la autorización o el visado, desapareciera la necesidad de contratación del extranjero o se modificasen las condiciones del contrato de trabajo que sirvió de base a la solicitud. Asimismo, cuando el extranjero habilitado se hallase en España deberá registrar en los Servicios Públicos de Empleo el contrato de trabajo que dio lugar a la solicitud y formalizar el alta del trabajador en la Seguridad Social, y si no pudiera iniciarse la relación laboral, el empresario o empleador estará obligado a comunicarlo a las autoridades competentes.

5. La autorización inicial de residencia y trabajo se limitará, salvo en los casos previstos por la Ley y los Convenios Internacionales firmados por España, a un determinado territorio y ocupación. Su duración se determinará reglamentariamente.

6. La autorización de residencia y trabajo se renovará a su expiración:

a) Cuando persista o se renueve el contrato de trabajo que motivó su concesión inicial, o cuando se cuente con un nuevo contrato.

b) Cuando por la autoridad competente, conforme a la normativa de la Seguridad Social, se hubiera otorgado una prestación contributiva por desempleo.

c) Cuando el extranjero sea beneficiario de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción social o laboral.

d) Cuando concurren otras circunstancias previstas reglamentariamente, en particular, los supuestos de extinción del contrato de trabajo o suspensión de la relación laboral como consecuencia de ser víctima de violencia de género.

7. A partir de la primera concesión, las autorizaciones se concederán sin limitación alguna de ámbito geográfico u ocupación.

8. La concesión de la autorización inicial de trabajo, en necesaria coordinación con la que corresponde al Estado en materia de residencia, corresponderá a las Comunidades Autónomas de acuerdo con las competencias asumidas en los correspondientes Estatutos.

Artículo 38 bis. Régimen especial de los investigadores. (Añadido por la Ley Orgánica 2/2009)

1. Tendrá la consideración de investigador el extranjero cuya permanencia en España tenga como fin único o principal realizar proyectos de investigación, en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación.

2. Las entidades dedicadas a la investigación, públicas o privadas, que cumplan las condiciones previstas reglamentariamente, podrán ser autorizadas por el Estado o por las Comunidades Autónomas, según corresponda, como organismos de investigación para acoger a investigadores extranjeros. Esta autorización tendrá una duración mínima de cinco años, salvo casos excepcionales en que se otorgará por un período más corto. Si transcurrido el plazo máximo no se hubiera notificado resolución expresa legítima al interesado, la solicitud deducida por éste se entenderá desestimada por silencio administrativo.

3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos para la firma del convenio de acogida entre el investigador y el organismo de investigación y las condiciones del proyecto de investigación.

4. La situación del extranjero en régimen de investigador será la de autorización de residencia y trabajo, que se renovará anualmente si el titular sigue reuniendo las condiciones establecidas para la expedición de la autorización inicial.

5. Los extranjeros admitidos con estos fines podrán impartir clases o realizar otras actividades compatibles con su actividad principal de investigación, con arreglo a la normativa en vigor.

6. El organismo de investigación deberá informar cuanto antes, a la Autoridad que concedió la autorización de residencia y trabajo, de cualquier acontecimiento que impida la ejecución del convenio de acogida.

7. Todo extranjero admitido en calidad de investigador en otro Estado miembro de la Unión Europea que solicite realizar parte de su investigación en España durante un periodo superior a tres meses podrá solicitar una autorización de residencia y trabajo y obtenerla si reúne los requisitos reglamentarios para ello, no siendo exigible el visado, pero pudiendo exigirse un nuevo convenio de acogida.

8. Una vez finalizado el convenio de acogida, o resuelto por causas no imputables al investigador establecidas reglamentariamente, tanto el investigador como los familiares reagrupados podrán ser autorizados para residir y ejercer una actividad lucrativa sin necesidad de un nuevo visado.

Artículo 38 ter. Residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados. (Añadido por la Ley Orgánica 2/2009)

1. Se considerará profesional altamente cualificado a los efectos de este artículo a quienes acrediten cualificaciones de enseñanza superior o, excepcionalmente,

tengan un mínimo de cinco años de experiencia profesional que pueda considerarse equiparable, en los términos que se determinen reglamentariamente.

2. Los profesionales altamente cualificados según este artículo obtendrán una autorización de residencia y trabajo documentada con una tarjeta azul de la UE.

3. Para la concesión de las autorizaciones destinadas a profesionales altamente cualificados podrá tenerse en cuenta la situación nacional de empleo, así como la necesidad de proteger la suficiencia de recursos humanos en el país de origen del extranjero.

4. El extranjero titular de la tarjeta azul de la UE que haya residido al menos dieciocho meses en otro Estado miembro de la Unión Europea, podrá obtener una autorización en España como profesional altamente cualificado. La solicitud podrá presentarse en España, antes del transcurso de un mes desde su entrada, o en el Estado miembro donde se halle autorizado. En caso de que la autorización originaria se hubiera extinguido sin que se haya resuelto la solicitud de autorización en España, se podrá conceder una autorización de estancia temporal para el extranjero y los miembros de su familia.

Si se extinguiese la vigencia de la autorización originaria para permanecer en España o si se denegase la solicitud, las autoridades podrán aplicar las medidas legalmente previstas para tal situación. En caso de que procediese su expulsión ésta se podrá ejecutar conduciendo al extranjero al Estado miembro del que provenga.

5. Reglamentariamente se determinarán los requisitos para la concesión y renovación de la autorización de residencia y trabajo regulada en este artículo.

Artículo 39. Gestión colectiva de contrataciones en origen. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. El Ministerio de Trabajo e Inmigración, teniendo en cuenta la situación nacional de empleo, podrá aprobar una previsión anual de las ocupaciones y, en su caso, de las cifras previstas de empleos que se puedan cubrir a través de la gestión colectiva de contrataciones en origen en un período determinado, a los que sólo tendrán acceso aquellos que no se hallen o residan en España. Asimismo, podrá establecer un número de visados para búsqueda de empleo en las condiciones que se determinen, dirigidos a hijos o nietos de español de origen o a determinadas ocupaciones. La mencionada previsión tendrá en cuenta las propuestas que, previa consulta de los agentes sociales en su ámbito correspondiente, sean realizadas por las Comunidades Autónomas, y será adoptada previa consulta de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.

2. El procedimiento de concesión de la autorización inicial de residencia y trabajo mediante tramitación colectiva de los contratos en origen, estará basado en la gestión simultánea de una pluralidad de autorizaciones, presentadas por uno o varios empleadores, respecto de trabajadores seleccionados en sus países, con la participación, en su caso, de las autoridades competentes. En la gestión del mismo se actuará coordinadamente con las Comunidades Autónomas competentes para la concesión de la autorización de trabajo inicial.

3. Las ofertas de empleo realizadas a través de este procedimiento se orientarán preferentemente hacia los países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios.

Artículo 40. Supuestos específicos de exención de la situación nacional de empleo. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. No se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo cuando el contrato de trabajo vaya dirigido a:

a) Los familiares reagrupados en edad laboral, o el cónyuge o hijo de extranjero residente en España con una autorización renovada, así como al hijo de español

nacionalizado o de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Espacio Económico Europeo, siempre que estos últimos lleven, como mínimo, un año residiendo legalmente en España y al hijo no le sea de aplicación el régimen comunitario.

b) Los titulares de una autorización previa de trabajo que pretendan su renovación.

c) Los trabajadores necesarios para el montaje por renovación de una instalación o equipos productivos.

d) Los que hubieran gozado de la condición de refugiados, durante el año siguiente a la cesación de la aplicación de la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, sobre el Estatuto de los Refugiados, por los motivos recogidos en el supuesto 5 de la sección C de su artículo 1.

e) Los que hubieran sido reconocidos como apátridas y los que hubieran perdido la condición de apátridas el año siguiente a la terminación de dicho estatuto.

f) Los extranjeros que tengan a su cargo ascendientes o descendientes de nacionalidad española.

g) Los extranjeros nacidos y residentes en España.

h) Los hijos o nietos de español de origen.

i) Los menores extranjeros en edad laboral con autorización de residencia que sean tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a criterio de la mencionada entidad, favorezcan su integración social, y una vez acreditada la imposibilidad de retorno con su familia o al país de origen.

j) Los extranjeros que obtengan la autorización de residencia por circunstancias excepcionales en los supuestos que se determinen reglamentariamente y, en todo caso, cuando se trate de víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.

k) Los extranjeros que hayan sido titulares de autorizaciones de trabajo para actividades de temporada, durante dos años naturales, y hayan retornado a su país.

l) Los extranjeros que hayan renunciado a su autorización de residencia y trabajo en virtud de un programa de retorno voluntario.

2. Tampoco se tendrá en cuenta la situación nacional de empleo, en las condiciones que se determinen reglamentariamente para:

a) La cobertura de puestos de confianza y directivos de empresas.

b) Los profesionales altamente cualificados, incluyendo técnicos y científicos contratados por entidades públicas, universidades o centros de investigación, desarrollo e innovación dependientes de empresas, sin perjuicio de la aplicación del régimen específico de autorización aplicable de conformidad con la presente Ley.

c) Los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas en otro país que pretendan desarrollar su actividad laboral para la misma empresa o grupo en España.

d) Los artistas de reconocido prestigio.

Artículo 41. Excepciones a la autorización de trabajo.

1. No será necesaria la obtención de autorización de trabajo para el ejercicio de las actividades siguientes: (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

a) Los técnicos y científicos extranjeros, invitados o contratados, por el Estado, las comunidades autónomas o los entes locales o los organismos que tengan por objeto la promoción y desarrollo de la investigación promovidos o participados

mayoritariamente por las anteriores. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

b) Los profesores extranjeros invitados o contratados por una universidad española.

c) El personal directivo y el profesorado extranjeros, de instituciones culturales y docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas.

d) Los funcionarios civiles o militares de las Administraciones estatales extranjeras que vengan a España para desarrollar actividades en virtud de acuerdos de cooperación con la Administración española.

e) Los corresponsales de medios de comunicación social, extranjeros, debidamente acreditados, para el ejercicio de la actividad informativa.

f) Los miembros de misiones científicas internacionales que realicen trabajos e investigaciones en España, autorizados por el Estado.

g) Los artistas que vengan a España a realizar actuaciones concretas que no supongan una actividad continuada.

h) Los ministros, religiosos o representantes de las diferentes iglesias y confesiones, debidamente inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, en tanto limiten su actividad a funciones estrictamente religiosas.

i) Los extranjeros que formen parte de los órganos de representación, gobierno y administración de los sindicatos homologados internacionalmente, siempre que limiten su actividad a funciones estrictamente sindicales.

j) Los menores extranjeros en edad laboral tutelados por la entidad de protección de menores competente, para aquellas actividades que, a propuesta de la mencionada entidad, mientras permanezcan en esa situación, favorezcan su integración social. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003 y asignación de letra modificada por la Ley Orgánica 2/2009)

2. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para acreditar la excepción. En todo caso, este procedimiento será el mismo tanto para el personal de instituciones públicas como de organismos promovidos o participados mayoritariamente por una Administración pública.

(Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

3. (Suprimido por la Ley Orgánica 2/2009)

Artículo 42. Régimen especial de los trabajadores de temporada. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. El Gobierno regulará reglamentariamente la autorización de residencia y trabajo para los trabajadores extranjeros en actividades de temporada o campaña que les permita la entrada y salida del territorio nacional, así como la documentación de su situación, de acuerdo con las características de las citadas campañas y la información que le suministren las Comunidades Autónomas donde se promuevan.

2. Para conceder las autorizaciones de residencia y trabajo deberá garantizarse que los trabajadores temporeros serán alojados en condiciones de dignidad e higiene adecuadas.

3. Las Administraciones públicas promoverán la asistencia de los servicios sociales adecuados.

4. Las ofertas de empleo de temporada se orientarán preferentemente hacia los países con los que España haya firmado acuerdos sobre regulación de flujos migratorios.

5. Las Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos y los agentes sociales promoverán los circuitos que permitan la concatenación de los trabajadores de temporada, en colaboración con la Administración General del Estado.

6. Reglamentariamente se determinarán las condiciones para que los trabajadores en plantilla de una empresa o grupo de empresas que desarrollen su actividad en otro país puedan ser autorizados a trabajar temporalmente en España para la misma empresa o grupo.

Artículo 43. Trabajadores transfronterizos y prestación transnacional de servicio. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los trabajadores extranjeros que, residiendo en la zona limítrofe, desarrollen su actividad en España y regresen a su lugar de residencia diariamente deberán obtener la correspondiente autorización administrativa, con los requisitos y condiciones con que se conceden las autorizaciones de régimen general, siéndoles de aplicación en cuanto a los derechos de seguridad social lo establecido en el artículo 14.1 de esta Ley

2. Reglamentariamente se establecerán las condiciones para la autorización de residencia y trabajo en el marco de prestaciones transnacionales de servicios, de acuerdo con la normativa vigente.

CAPÍTULO IV

De las tasas por autorizaciones administrativas y por tramitación de las solicitudes de visado (Modificada su denominación por la Ley Orgánica 14/2003)

Artículo 44. Hecho imponible. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Las tasas se regirán por la presente Ley y por las demás fuentes normativas que para las tasas se establecen en el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos.

2. Constituye el hecho imponible de las tasas la tramitación de las autorizaciones administrativas y de los documentos de identidad previstos en esta Ley, así como de sus prórrogas, modificaciones y renovaciones; en particular:

- a) La tramitación de autorizaciones para la prórroga de la estancia en España.
- b) La tramitación de las autorizaciones para residir en España.
- c) La tramitación de autorizaciones de trabajo, salvo que se trate de autorizaciones para un período inferior a seis meses.
- d) La tramitación de tarjetas de identidad de extranjeros.
- e) La tramitación de documentos de identidad a indocumentados.
- f) La tramitación de visado.

Artículo 45. Devengo. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Las tasas se devengarán cuando se solicite la autorización, la prórroga, la modificación, la renovación, o el visado.

En el caso de las Comunidades Autónomas que tengan traspasadas las competencias en materia de autorización de trabajo, les corresponderá el devengo del rendimiento de las tasas.

2. En los casos de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena a favor de trabajadores de servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa se producirá en el momento de afiliación y/o alta del trabajador en la Seguridad Social.

3. En los casos de renovación de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, en ausencia de empleador, y cuando se trate de trabajadores de servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, el devengo de la tasa se producirá en el momento de alta del trabajador en la Seguridad Social.

4. El importe de las tasas se establecerá por orden ministerial de los departamentos competentes. Cuando las Comunidades Autónomas tengan traspasadas las competencias en materia de autorización inicial de trabajo, éstas se regirán por la legislación correspondiente.

Artículo 46. Sujetos pasivos. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Serán sujetos pasivos de las tasas los solicitantes de visado y las personas en cuyo favor se concedan las autorizaciones o se expidan los documentos previstos en el artículo 44, salvo en las autorizaciones de trabajo por cuenta ajena, en cuyo caso será sujeto pasivo el empleador o empresario, excepto en el supuesto de relaciones laborales en el sector del servicio doméstico de carácter parcial o discontinuo, en que lo será el propio trabajador.

2. Será nulo todo pacto por el que el trabajador por cuenta ajena asuma la obligación de pagar en todo o en parte el importe de las tasas establecidas.

Artículo 47. Exención. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

No vendrán obligados al pago de las tasas por la concesión de las autorizaciones para trabajar los nacionales iberoamericanos, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, los sefardíes, los hijos y nietos de español o española de origen, y los extranjeros nacidos en España cuando pretendan realizar una actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia.

Las solicitudes de visado presentadas por nacionales de terceros países beneficiarios de derecho comunitario en materia de libre circulación y residencia estarán exentas del pago de las tasas de tramitación.

Las entidades públicas de protección de menores estarán exentas del pago de las tasas derivadas de las autorizaciones que están obligadas a solicitar para éstos en ejercicio de la representación legal que de ellos ostentan.

En aplicación de la normativa comunitaria sobre la materia, quedarán exentos del pago de la tasa relativa a visados de tránsito o estancia, los niños menores de seis años; los investigadores nacionales de terceros países que se desplacen con fines de investigación científica en los términos establecidos por la Recomendación 2005/761/CE, del Parlamento y del Consejo; y los representantes de organizaciones sin ánimo de lucro que no sean mayores de 25 años y vayan a participar en seminarios, conferencias o acontecimientos deportivos o educativos, organizados por organizaciones sin ánimo de lucro.

Artículo 48. Cuantía de las tasas.

1. El importe de las tasas se establecerá por Orden ministerial de los Departamentos competentes, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa comunitaria en relación con procedimientos de solicitud de visados de tránsito o estancia. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

2. Las normas que determinen la cuantía de las tasas deberán ir acompañadas de una memoria económico-financiera sobre el coste de la actividad de que se trate y sobre la justificación de la cuantía propuesta, la cual deberá ajustarse a lo establecido en los artículos 7 y 19.2 de la Ley 8/1989, de 13 de abril. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

3. Se consideran elementos y criterios esenciales de cuantificación que sólo podrán modificarse mediante norma del mismo rango, los siguientes: (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

- a) En la tramitación de la solicitud de visado, los gastos administrativos de tramitación, la limitación de los efectos del visado de tránsito aeroportuario, la duración de la estancia, el número de entradas autorizadas, el carácter de la residencia, así como, en su caso, el hecho de que se expida en frontera. También se tendrán en cuenta los costes complementarios que se originen por la expedición de visados, cuando, a petición del interesado, deba hacerse uso de procedimientos tales como mensajería, correo electrónico, correo urgente, telefax, telegrama o conferencia telefónica.
- b) En la concesión de autorizaciones para la prórroga de estancia en España, la duración de la prórroga.
- c) En la concesión de autorizaciones de residencia, la duración de la autorización, así como su carácter definitivo o temporal, y, dentro de estas últimas, el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones.
- d) En la concesión de autorizaciones de trabajo, la duración de la misma, su extensión y ámbito, el carácter y las modalidades de la relación por cuenta ajena, así como, en su caso, el importe del salario pactado.
- e) En la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, la duración de la autorización y el hecho de que se trate de la primera o ulteriores concesiones o sus renovaciones.

En todo caso, será criterio cuantitativo de las tasas el carácter individual o colectivo de las autorizaciones, prórrogas, modificaciones o renovaciones.

4. Los importes de las tasas por tramitación de la solicitud de visado se adecuarán a la revisión que proceda por aplicación del derecho comunitario. Se acomodarán, asimismo, al importe que pueda establecerse por aplicación del principio de reciprocidad. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

Artículo 49. Gestión, recaudación y autoliquidación.

- 1. La gestión y recaudación de las tasas corresponderá a los órganos competentes para la concesión de las autorizaciones, modificaciones, renovaciones y prórrogas, la expedición de la documentación a que se refiere el artículo 44 y la tramitación de la solicitud de visado. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)
- 2. Los sujetos pasivos de las tasas estarán obligados a practicar operaciones de autoliquidación tributaria y a realizar el ingreso de su importe en el Tesoro cuando así se prevea reglamentariamente. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

TÍTULO III

De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador (Reordenado por la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 50. La potestad sancionadora.

El ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de las infracciones administrativas previstas en la presente Ley Orgánica, se ajustará a lo dispuesto en la misma y en sus disposiciones de desarrollo, y en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 51. Tipos de infracciones.

- 1. Incurrirán en responsabilidad administrativa quienes sean autores o participen en cualquiera de las infracciones tipificadas en los artículos siguientes.
- 2. Las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 52. Infracciones leves.

Son infracciones leves:

- a) La omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de su situación laboral cuando les sean exigibles por la normativa aplicable. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)
- b) El retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)
- c) Encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con autorización de residencia temporal. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)
- d) Encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad, o ámbito geográfico no contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la que se es titular. (Añadida por la Ley Orgánica 2/2009)
- e) La contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados. (Añadida por la Ley Orgánica 2/2009)

Artículo 53. Infracciones graves. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Son infracciones graves:

- a) Encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación de la misma en el plazo previsto reglamentariamente.
- b) Encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no cuente con autorización de residencia válida.
- c) Incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes los cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio, así como incurrir en falsedad en la declaración de los datos obligatorios para cumplimentar el alta en el padrón municipal a los efectos previstos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito. Cuando cualquier autoridad tuviera conocimiento de una posible infracción por esta causa, lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes con el fin de que pueda instruirse el oportuno expediente sancionador.
- d) El incumplimiento de las medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
- e) La comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves de la misma naturaleza.
- f) La participación por el extranjero en la realización de actividades contrarias al orden público previstas como graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
- g) Las salidas del territorio español por puestos no habilitados, sin exhibir la documentación prevista o contraviniendo las prohibiciones legalmente impuestas.
- h) Incumplir la obligación del apartado 2 del artículo 4.

2. También son infracciones graves:

a) No dar de alta, en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, al trabajador extranjero cuya autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena hubiera solicitado, o no registrar el contrato de trabajo en las condiciones que sirvieron de base a la solicitud, cuando el empresario tenga constancia de que el trabajador se halla legalmente en España habilitado para el comienzo de la relación laboral. No obstante, estará exento de esta responsabilidad el empresario que comunique a las autoridades competentes la concurrencia de razones sobrevenidas que puedan poner en riesgo objetivo la viabilidad de la empresa o que, conforme a la legislación, impidan el inicio de dicha relación.

b) Contraer matrimonio, simular relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor, cuando dichas conductas se realicen con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente un derecho de residencia, siempre que tales hechos no constituyan delito.

c) Promover la permanencia irregular en España de un extranjero, cuando su entrada legal haya contado con una invitación expresa del infractor y continúe a su cargo una vez transcurrido el período de tiempo permitido por su visado o autorización. Para graduar la sanción se tendrán en cuenta las circunstancias personales y familiares concurrentes.

d) Consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero. Se incurrirá en una infracción por cada persona indebidamente inscrita.

Artículo 54. Infracciones muy graves. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Son infracciones muy graves:

a) Participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, o estar implicados en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.

b) Inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo, siempre que el hecho no constituya delito.

c) La realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos, en los términos previstos en el artículo 23 de la presente Ley, siempre que el hecho no constituya delito.

d) La contratación de trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de residencia y trabajo, incurriéndose en una infracción por cada uno de los trabajadores extranjeros ocupados, siempre que el hecho no constituya delito.

e) Realizar, con ánimo de lucro, la infracción prevista en la letra d) del apartado 2 del artículo anterior.

f) Simular la relación laboral con un extranjero, cuando dicha conducta se realice con ánimo de lucro o con el propósito de obtener indebidamente derechos reconocidos en esta Ley, siempre que tales hechos no constituyan delito.

g) La comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves de la misma naturaleza.

2. También son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas en el artículo 66, apartados 1 y 2.

b) El transporte de extranjeros por vía aérea, marítima o terrestre, hasta el territorio español, por los sujetos responsables del transporte, sin que hubieran comprobado la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado, de los que habrán de ser titulares los citados extranjeros.

c) El incumplimiento de la obligación que tienen los transportistas de hacerse cargo sin pérdida de tiempo del extranjero o transportado que, por deficiencias en la documentación antes citada, no haya sido autorizado a entrar en España, así como del extranjero transportado en tránsito que no haya sido trasladado a su país de destino o que hubiera sido devuelto por las autoridades de éste, al no autorizarle la entrada.

Esta obligación incluirá los gastos de mantenimiento del citado extranjero y, si así lo solicitan las autoridades encargadas del control de entrada, los derivados del transporte de dicho extranjero, que habrá de producirse de inmediato, bien por medio de la compañía objeto de sanción o, en su defecto, por medio de otra empresa de transporte, con dirección al Estado a partir del cual haya sido transportado, al Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado o a cualquier otro Estado donde esté garantizada su admisión.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, no se considerará infracción a la presente Ley el hecho de transportar hasta la frontera española a un extranjero que, habiendo presentado sin demora su solicitud de protección internacional, ésta le sea admitida a trámite, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2009, de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.

Artículo 55. Sanciones. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Las infracciones tipificadas en los artículos anteriores serán sancionadas en los términos siguientes:

a) Las infracciones leves con multa de hasta 500 euros.

b) Las infracciones graves con multa de 501 hasta 10.000 euros. En el supuesto contemplado en el artículo 53.2.a) de esta Ley, además de la sanción indicada, el empresario también estará obligado a sufragar los costes derivados del viaje.

c) Las infracciones muy graves con multa desde 10.001 hasta 100.000 euros, excepto la prevista en el artículo 54.2.b), que lo será con una multa de 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado o con un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado, con independencia del número de viajeros transportados. La prevista en el artículo 54.2.a) en relación con el artículo 66.1 lo será con una multa de 10.001 hasta 100.000 euros por cada viaje realizado sin haber comunicado los datos de las personas transportadas o habiéndolos comunicado incorrectamente, con independencia de que la Autoridad gubernativa pueda adoptar la inmovilización, incautación y decomiso del medio de transporte, o la suspensión provisional o retirada de la autorización de explotación.

2. La imposición de sanciones por las infracciones administrativas establecidas en la presente Ley Orgánica corresponderá al Subdelegado del Gobierno o al Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. Cuando una Comunidad Autónoma tenga atribuidas competencias en materia de autorización inicial de trabajo de extranjeros la imposición de las sanciones establecidas en esta Ley en los supuestos de infracción a que se refiere el párrafo siguiente corresponderá a la Comunidad Autónoma y se ejercerá por la Autoridad que la misma determine, dentro del ámbito de sus competencias.

En los supuestos calificados como infracción leve del artículo 52.c), d) y e), graves del artículo 53.1.b), y 53.2.a), y muy grave del artículo 54.1.d) y f), el procedimiento sancionador se iniciará por acta de la Inspección de Trabajo y

Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador por infracciones del orden social, correspondiendo la imposición de las sanciones a las autoridades referidas en el párrafo anterior.

En los supuestos de participación en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países, previstos en el artículo 54.1.a), de acuerdo con lo establecido en el procedimiento sancionador que se determine reglamentariamente, la competencia sancionadora corresponderá al Secretario de Estado de Seguridad.

3. Para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia.

4. Para la determinación de la cuantía de la sanción se tendrá especialmente en cuenta la capacidad económica del infractor.

5. A no ser que pertenezcan a un tercero no responsable de la infracción, en el supuesto de la letra b) del apartado 1 del artículo 54, serán objeto de decomiso los vehículos, embarcaciones, aeronaves, y cuantos bienes muebles o inmuebles, de cualquier naturaleza que sean, hayan servido de instrumento para la comisión de la citada infracción.

A fin de garantizar la efectividad del comiso, los bienes, efectos e instrumentos a que se refiere el apartado anterior podrán ser aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad gubernativa, desde las primeras intervenciones, a results del expediente sancionador que resolverá lo pertinente en relación con los bienes decomisados.

6. En el supuesto de la infracción prevista en la letra d) del apartado 1 del artículo 54 de la presente Ley, la autoridad gubernativa podrá adoptar, sin perjuicio de la sanción que corresponda, la clausura del establecimiento o local desde seis meses a cinco años.

7. Si el sancionado por una infracción prevista en los artículos 52.e) o 54.1.d) de esta Ley fuera subcontratista de otra empresa, el contratista principal y todos los subcontratistas intermedios que conocieran que la empresa sancionada empleaba a extranjeros sin contar con la correspondiente autorización, responderán, solidariamente, tanto de las sanciones económicas derivadas de las sanciones, como de las demás responsabilidades derivadas de tales hechos que correspondan al empresario con las Administraciones públicas o con el trabajador. El contratista o subcontratista intermedios no podrán ser considerados responsables si hubieran respetado la diligencia debida definida en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Artículo 56. Prescripción de las infracciones y de las sanciones.

1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a los dos años y las impuestas por infracciones leves al año.

3. Si la sanción impuesta fuera la de expulsión del territorio nacional la prescripción no empezará a contar hasta que haya transcurrido el período de prohibición de entrada fijado en la resolución con un máximo de diez años.

Artículo 57. Expulsión del territorio. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas de las tipificadas como muy graves, o conductas graves de las previstas en los apartados a), b), c), d) y f) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, en lugar de la sanción de multa, la expulsión del

territorio español, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo y mediante la resolución motivada que valore los hechos que configuran la infracción.

2. Asimismo, constituirá causa de expulsión, previa tramitación del correspondiente expediente, que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados.

3. En ningún caso podrán imponerse conjuntamente las sanciones de expulsión y multa.

4. La expulsión conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España, así como el archivo de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en España del extranjero expulsado. No obstante, la expulsión podrá revocarse en los supuestos que se determinen reglamentariamente.

En el caso de las infracciones previstas en las letras a) y b) del artículo 53.1 de esta Ley, salvo que concurran razones de orden público o de seguridad nacional, si el extranjero fuese titular de una autorización de residencia válida expedida por otro Estado miembro, se le advertirá, mediante diligencia en el pasaporte, de la obligación de dirigirse de inmediato al territorio de dicho Estado. Si no cumpliese esa advertencia se tramitará el expediente de expulsión.

5. La sanción de expulsión no podrá ser impuesta, salvo que la infracción cometida sea la prevista en el artículo 54, letra a) del apartado 1, o suponga una reincidencia en la comisión, en el término de un año, de una infracción de la misma naturaleza sancionable con la expulsión, a los extranjeros que se encuentren en los siguientes supuestos:

- a) Los nacidos en España que hayan residido legalmente en los últimos cinco años.
- b) Los residentes de larga duración. Antes de adoptar la decisión de la expulsión de un residente de larga duración, deberá tomarse en consideración el tiempo de su residencia en España y los vínculos creados, su edad, las consecuencias para el interesado y para los miembros de su familia, y los vínculos con el país al que va a ser expulsado.
- c) Los que hayan sido españoles de origen y hubieran perdido la nacionalidad española.
- d) Los que sean beneficiarios de una prestación por incapacidad permanente para el trabajo como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ocurridos en España, así como los que perciban una prestación contributiva por desempleo o sean beneficiarios de una prestación económica asistencial de carácter público destinada a lograr su inserción o reinserción social o laboral.

Tampoco se podrá imponer o, en su caso, ejecutar la sanción de expulsión al cónyuge del extranjero que se encuentre en alguna de las situaciones señaladas anteriormente y que haya residido legalmente en España durante más de dos años, ni a sus ascendientes e hijos menores, o mayores con discapacidad que no sean objetivamente capaces de proveer a sus propias necesidades debido a su estado de salud, que estén a su cargo.

6. La expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre.

7. a) Cuando el extranjero se encuentre procesado o imputado en un procedimiento judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho

acreditado en el expediente administrativo de expulsión, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, el Juez, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la autorizará salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias que justifiquen su denegación.

En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el párrafo anterior.

b) No obstante lo señalado en el párrafo a) anterior, el juez podrá autorizar, a instancias del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del territorio español en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

c) No serán de aplicación las previsiones contenidas en los párrafos anteriores cuando se trate de delitos tipificados en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal.

8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas tipificadas como delitos en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal, la expulsión se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad.

9. La resolución de expulsión deberá ser notificada al interesado, con indicación de los recursos que contra la misma se puedan interponer, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para presentarlos.

10. En el supuesto de expulsión de un residente de larga duración de otro Estado miembro de la Unión Europea que se encuentre en España, dicha expulsión sólo podrá efectuarse fuera del territorio de la Unión cuando la infracción cometida sea una de las previstas en los artículos 53.1.d) y f) y 54.1.a) y b) de esta Ley Orgánica, y deberá consultarse al respecto a las Autoridades competentes de dicho Estado miembro de forma previa a la adopción de esa decisión de expulsión. En caso de no reunirse estos requisitos para que la expulsión se realice fuera del territorio de la Unión, la misma se efectuará al Estado miembro en el que se reconoció la residencia de larga duración.

Artículo 58. Efectos de la expulsión y devolución. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. La expulsión llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español. La duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que concurran en cada caso y su vigencia no excederá de cinco años.

2. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse un período de prohibición de entrada de hasta diez años.

En las circunstancias que se determinen reglamentariamente, la autoridad competente no impondrá la prohibición de entrada cuando el extranjero hubiera abandonado el territorio nacional durante la tramitación de un expediente administrativo sancionador por alguno de los supuestos contemplados en las letras a) y b) del artículo 53.1 de esta Ley Orgánica, o revocará la prohibición de entrada impuesta por las mismas causas, cuando el extranjero abandonara el territorio nacional en el plazo de cumplimiento voluntario previsto en la orden de expulsión.

3. No será preciso expediente de expulsión para la devolución de los extranjeros en los siguientes supuestos:

a) Los que habiendo sido expulsados contravengan la prohibición de entrada en España.

b) Los que pretendan entrar ilegalmente en el país.

4. En el supuesto de que se formalice una solicitud de protección internacional por personas que se encuentren en alguno de los supuestos mencionados en el apartado anterior, no podrá llevarse a cabo la devolución hasta que se haya decidido la inadmisión a trámite de la petición, de conformidad con la normativa de protección internacional.

Tampoco podrán ser devueltas las mujeres embarazadas cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre.

5. La devolución será acordada por la autoridad gubernativa competente para la expulsión.

6. Cuando la devolución no se pudiera ejecutar en el plazo de 72 horas, se solicitará de la autoridad judicial la medida de internamiento prevista para los expedientes de expulsión.

7. La devolución acordada en el párrafo a) del apartado 3 de este artículo conllevará la reiniciación del cómputo del plazo de prohibición de entrada que hubiese acordado la resolución de expulsión quebrantada. Asimismo, toda devolución acordada en aplicación del párrafo b) del mismo apartado de este artículo llevará consigo la prohibición de entrada en territorio español por un plazo máximo de tres años.

Artículo 59. Colaboración contra redes organizadas. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. El extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal, explotación laboral o de tráfico ilícito de mano de obra o de explotación en la prostitución abusando de su situación de necesidad, podrá quedar exento de responsabilidad administrativa y no será expulsado si denuncia a los autores o cooperadores de dicho tráfico, o coopera y colabora con las autoridades competentes, proporcionando datos esenciales o testificando, en su caso, en el proceso correspondiente contra aquellos autores.

2. Los órganos administrativos competentes encargados de la instrucción del expediente sancionador informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo a fin de que decida si desea acogerse a esta vía, y harán la propuesta oportuna a la autoridad que deba resolver, que podrá conceder una autorización provisional de residencia y trabajo a favor del extranjero, según el procedimiento previsto reglamentariamente.

El instructor del expediente sancionador informará de las actuaciones en relación con este apartado a la autoridad encargada de la instrucción del procedimiento penal.

3. A los extranjeros que hayan quedado exentos de responsabilidad administrativa se les podrá facilitar, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley velando, en su caso, por su seguridad y protección.

4. Cuando el Ministerio Fiscal tenga conocimiento de que un extranjero, contra el que se ha dictado una resolución de expulsión, aparezca en un procedimiento penal como víctima, perjudicado o testigo y considere imprescindible su presencia para la práctica de diligencias judiciales, lo pondrá de manifiesto a la autoridad gubernativa competente para que valore la inejecución de su expulsión y, en el supuesto de que se hubiese ejecutado esta última, se procederá de igual forma a los efectos de que autorice su regreso a España durante el tiempo necesario para poder practicar las diligencias precisas, sin perjuicio de que se puedan adoptar algunas de las medidas previstas en la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales.

5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a extranjeros menores de edad, debiendo tenerse en cuenta en el procedimiento la edad y madurez de éstos y, en todo caso, la prevalencia del principio del interés superior del menor.

6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de los delitos señalados en el apartado primero.

Artículo 59 bis. Víctimas de la trata de seres humanos. (Añadido por la Ley Orgánica 2/2009)

1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para la identificación de las víctimas de la trata de personas conforme a lo previsto en el artículo 10 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, de 16 de mayo de 2005.

2. Los órganos administrativos competentes, cuando estimen que existen motivos razonables para creer que una persona extranjera en situación irregular ha sido víctima de trata de seres humanos, informarán a la persona interesada sobre las previsiones del presente artículo y elevarán a la autoridad competente para su resolución la oportuna propuesta sobre la concesión de un período de restablecimiento y reflexión, de acuerdo con el procedimiento previsto reglamentariamente.

Dicho período de restablecimiento y reflexión tendrá una duración de, al menos, treinta días, y deberá ser suficiente para que la víctima pueda decidir si desea cooperar con las autoridades en la investigación del delito y, en su caso, en el procedimiento penal. Tanto durante la fase de identificación de las víctimas, como durante el período de restablecimiento y reflexión, no se incoará un expediente sancionador por infracción del artículo 53.1.a) y se suspenderá el expediente administrativo sancionador que se le hubiere incoado o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas. Asimismo, durante el período de restablecimiento y reflexión, se le autorizará la estancia temporal y las administraciones competentes velarán por la subsistencia y, de resultar necesario, la seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad, que se encuentren en España en el momento de la identificación, a quienes se harán extensivas las previsiones del apartado 4 del presente artículo en relación con el retorno asistido o la autorización de residencia, y en su caso trabajo, si fueren mayores de 16 años, por circunstancias excepcionales. Finalizado el período de reflexión las administraciones públicas competentes realizarán una evaluación de la situación personal de la víctima a efectos de determinar una posible ampliación del citado período.

Con carácter extraordinario la Administración Pública competente velará por la seguridad y protección de aquellas otras personas, que se encuentren en España, con las que la víctima tenga vínculos familiares o de cualquier otra naturaleza, cuando se acredite que la situación de desprotección en que quedarían frente a los presuntos traficantes constituye un obstáculo insuperable para que la víctima acceda a cooperar. (Punto redactado conforme a la Ley Orgánica 10/2011)

3. El periodo de restablecimiento y reflexión podrá denegarse o ser revocado por motivos de orden público o cuando se tenga conocimiento de que la condición de víctima se ha invocado de forma indebida. La denegación o revocación deberán estar motivadas y podrán ser recurridas según lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 10/2011)

4. La autoridad competente podrá declarar a la víctima exenta de responsabilidad administrativa y podrá facilitarle, a su elección, el retorno asistido a su país de procedencia o la autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales cuando lo considere necesario a causa de su cooperación para los fines de investigación o de las acciones penales, o en atención a su situación personal, y facilidades para su integración social, de acuerdo con lo establecido en la presente Ley. Asimismo, en tanto se resuelva el procedimiento de autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales, se le podrá facilitar una autorización provisional de residencia y trabajo en los términos que se determinen reglamentariamente.

En la tramitación de las autorizaciones referidas en el párrafo anterior se podrá eximir de la aportación de aquellos documentos cuya obtención suponga un riesgo para la víctima.

5. Las previsiones del presente artículo serán igualmente de aplicación a personas extranjeras menores de edad, debiendo tenerse en cuenta la edad y madurez de éstas y, en todo caso, la prevalencia del interés superior del menor.

6. Reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de colaboración de las organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro que tengan por objeto la acogida y protección de las víctimas de la trata de seres humanos.

Artículo 60. Efectos de la denegación de entrada. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los extranjeros a los que en frontera se les deniegue la entrada según lo previsto por el artículo 26.2 de esta Ley, estarán obligados a regresar a su punto de origen.

La resolución de la denegación de entrada conllevará la adopción inmediata de las medidas necesarias para que el extranjero regrese en el plazo más breve posible. Cuando el regreso fuera a retrasarse más de setenta y dos horas, la autoridad que hubiera denegado la entrada se dirigirá al Juez de Instrucción para que determine el lugar donde hayan de ser internados hasta ese momento.

2. Los lugares de internamiento para extranjeros no tendrán carácter penitenciario, y estarán dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios. Los extranjeros internados estarán privados únicamente del derecho ambulatorio.

3. El extranjero durante su internamiento se encontrará en todo momento a disposición de la autoridad judicial que lo autorizó, debiéndose comunicar a ésta por la autoridad gubernativa cualquier circunstancia en relación a la situación de los extranjeros internados.

4. La detención de un extranjero a efectos de proceder al regreso a consecuencia de la denegación de entrada será comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país.

Artículo 61. Medidas cautelares.

1. Desde el momento en que se incoe un procedimiento sancionador en el que pueda proponerse la expulsión, el instructor, a fin de asegurar la resolución final que pudiera recaer, podrá adoptar alguna de las siguientes medidas cautelares: (Redactado conforme a la Ley Orgánica 11/2003)

a) Presentación periódica ante las autoridades competentes.

b) Residencia obligatoria en determinado lugar.

c) Retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado del resguardo acreditativo de tal medida.

d) Detención cautelar, por la autoridad gubernativa o sus agentes, por un período máximo de setenta y dos horas, previas a la solicitud de internamiento.

En cualquier otro supuesto de detención, la puesta a disposición judicial se producirá en un plazo no superior a setenta y dos horas.

e) Internamiento preventivo, previa autorización judicial en los centros de internamiento.

f) Cualquier otra medida cautelar que el juez estime adecuada y suficiente. (Añadida por la Ley Orgánica 2/2009)

2. En los expedientes sancionadores en la comisión de infracciones por transportistas, si éstos infringen la obligación de tomar a cargo al extranjero transportado ilegalmente, podrá acordarse la suspensión de sus actividades, la prestación de fianzas, avales, o la inmovilización del medio de transporte utilizado. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 62. Ingreso en centros de internamiento. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Incoado el expediente por alguno de los supuestos contemplados en las letras a) y b) del artículo 54.1, en las letras a), d) y f) del artículo 53.1 y en el artículo 57.2 de esta Ley Orgánica en el que pueda proponerse expulsión del territorio español, el instructor podrá solicitar al Juez de Instrucción competente que disponga el ingreso del extranjero en un centro de internamiento en tanto se realiza la tramitación del expediente sancionador.

El Juez, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, resolverá mediante auto motivado, en el que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, tomará en consideración las circunstancias concurrentes y, en especial, el riesgo de incomparecencia por carecer de domicilio o de documentación identificativa, las actuaciones del extranjero tendentes a dificultar o evitar la expulsión, así como la existencia de condena o sanciones administrativas previas y de otros procesos penales o procedimientos administrativos sancionadores pendientes. Asimismo, en caso de enfermedad grave del extranjero, el juez valorará el riesgo del internamiento para la salud pública o la salud del propio extranjero.

2. El internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, siendo su duración máxima de 60 días, y sin que pueda acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente.

3. Cuando hayan dejado de cumplirse las condiciones descritas en el apartado 1, el extranjero será puesto inmediatamente en libertad por la autoridad administrativa que lo tenga a su cargo, poniéndolo en conocimiento del Juez que autorizó su internamiento. Del mismo modo y por las mismas causas, podrá ser ordenado el fin del internamiento y la puesta en libertad inmediata del extranjero por el Juez, de oficio o a iniciativa de parte o del Ministerio Fiscal.

4. No podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62 bis 1. i) de esta Ley. Los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España serán puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores conforme establece la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y de acuerdo con las normas previstas en el artículo 35 de esta Ley.

5. La incoación del expediente, las medidas cautelares de detención e internamiento y la resolución final del expediente de expulsión del extranjero serán comunicadas al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la embajada o consulado de su país.

6. A los efectos del presente artículo, el Juez competente para autorizar y, en su caso, dejar sin efecto el internamiento será el Juez de Instrucción del lugar donde se practique la detención. El Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisión de

fronteras, será el Juez de Instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo designarse un concreto Juzgado en aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este Juez conocerá, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente.

Artículo 62 bis. Derechos de los extranjeros internados. (Añadido por la Ley Orgánica 14/2003 y redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Los centros de internamiento de extranjeros son establecimientos públicos de carácter no penitenciario; el ingreso y estancia en los mismos tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, salvaguardando los derechos y libertades reconocidos en el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad ambulatoria, conforme al contenido y finalidad de la medida judicial de ingreso acordada. En particular, el extranjero sometido a internamiento tiene los siguientes derechos:

- a) A ser informado de su situación.
- b) A que se vele por el respeto a su vida, integridad física y salud, sin que puedan en ningún caso ser sometidos a tratos degradantes o a malos tratos de palabra o de obra y a que sea preservada su dignidad y su intimidad.
- c) A que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, sin más limitaciones que las derivadas de su situación de internamiento.
- d) A recibir asistencia médica y sanitaria adecuada y ser asistidos por los servicios de asistencia social del centro.
- e) A que se comunique inmediatamente a la persona que designe en España y a su abogado el ingreso en el centro, así como a la oficina consular del país del que es nacional.
- f) A ser asistido de abogado, que se proporcionará de oficio en su caso, y a comunicarse reservadamente con el mismo, incluso fuera del horario general del centro, cuando la urgencia del caso lo justifique.
- g) A comunicarse en el horario establecido en el centro, con sus familiares, funcionarios consulares de su país u otras personas, que sólo podrán restringirse por resolución judicial.
- h) A ser asistido de intérprete si no comprende o no habla castellano y de forma gratuita, si careciese de medios económicos.
- i) A tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida y existan en el centro módulos que garanticen la unidad e intimidad familiar.
- j) A entrar en contacto con organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales, internacionales y no gubernamentales de protección de inmigrantes.

2. Los centros dispondrán de servicios de asistencia social y sanitaria con dotación suficiente. Las condiciones para la prestación de estos servicios se desarrollarán reglamentariamente.

3. Las organizaciones constituidas legalmente en España para la defensa de los inmigrantes y los organismos internacionales pertinentes podrán visitar los centros de internamiento; reglamentariamente se desarrollarán las condiciones de las mismas.

Artículo 62 ter. Deberes de los extranjeros internados. (Añadido por la Ley Orgánica 14/2003 y redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

El extranjero sometido a internamiento estará obligado:

- a) A permanecer en el centro a disposición del Juez de Instrucción que hubiere autorizado su ingreso.
- b) A observar las normas por las que se rige el centro y cumplir las instrucciones generales impartidas por la dirección y las particulares que reciban de los funcionarios en el ejercicio legítimo de sus funciones, encaminadas al mantenimiento del orden y la seguridad dentro del mismo, así como las relativas a su propio aseo e higiene y la limpieza del centro.
- c) A mantener una actividad cívica correcta y de respeto con los funcionarios y empleados del centro, con los visitantes y con los otros extranjeros internados, absteniéndose de proferir insultos o amenazas contra los mismos, o de promover o intervenir en agresiones, peleas, desórdenes y demás actos individuales o colectivos que alteren la convivencia.
- d) A conservar el buen estado de las instalaciones materiales, mobiliario y demás efectos del centro, evitando el deterioro o inutilización deliberada, tanto de éstos como de los bienes o pertenencias de los demás extranjeros ingresados o funcionarios.
- e) A someterse a reconocimiento médico a la entrada y salida del centro, así como en aquellos casos en que, por razones de salud colectiva, apreciadas por el servicio médico, y a petición de éste, lo disponga el director del centro.

Artículo 62 quáter. Información y reclamaciones. (Añadido por la Ley Orgánica 14/2003)

1. Los extranjeros recibirán a su ingreso en el centro información escrita sobre sus derechos y obligaciones, las cuestiones de organización general, las normas de funcionamiento del centro, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones o quejas. La información se les facilitará en un idioma que entiendan.
2. Los internados podrán formular, verbalmente o por escrito, peticiones y quejas sobre cuestiones referentes a su situación de internamiento.

Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas al director del centro, el cual las atenderá si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la autoridad competente, en caso contrario.

Artículo 62 quinquies. Medidas de seguridad. (Añadido por la Ley Orgánica 14/2003)

1. Las actuaciones de vigilancia y seguridad interior en los centros podrán suponer, en la forma y con la periodicidad que se establezca, inspecciones de los locales y dependencias y siempre que fuera necesario para la seguridad en los centros registros de personas, ropas y enseres de los extranjeros internados.
2. Se podrán utilizar medios de contención física personal o separación preventiva del agresor en habitación individual para evitar actos de violencia o lesiones de los extranjeros, impedir actos de fuga, daños en las instalaciones del centro o ante la resistencia al personal del mismo en el ejercicio legítimo de su cargo. El uso de los medios de contención será proporcional a la finalidad perseguida, no podrán suponer una sanción encubierta y sólo se usarán cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente necesario.
3. La utilización de medios de contención será previamente autorizada por el director del centro, salvo que razones de urgencia no lo permitan, en cuyo caso se pondrá en su conocimiento inmediatamente. El director deberá comunicar lo antes posible a la autoridad judicial que autorizó el internamiento la adopción y cese de los medios de contención física personal, con expresión detallada de los hechos que hubieren dado lugar a dicha utilización y de las circunstancias que pudiesen aconsejar su mantenimiento. El juez, en el plazo más breve posible y siempre que

la medida acordada fuere separación preventiva del agresor, deberá si está vigente, acordar su mantenimiento o revocación.

Artículo 62 sexies. Funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. (Añadido por la Ley Orgánica 14/2003)

En cada centro de internamiento de extranjeros habrá un director responsable de su funcionamiento para lo cual deberá adoptar las directrices de organización necesarias, coordinando y supervisando su ejecución. Asimismo será el responsable de adoptar las medidas necesarias para asegurar el orden y la correcta convivencia entre extranjeros y asegurar el cumplimiento de sus derechos, y de la imposición de medidas a los internos que no respeten las normas de correcta convivencia o régimen interior.

Artículo 63. Procedimiento preferente. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Incoado el expediente en el que pueda proponerse la expulsión por tratarse de uno de los supuestos contemplados en el artículo 53.1.d), 53.1.f), 54.1.a), 54.1.b), y 57.2, la tramitación del mismo tendrá carácter preferente.

Igualmente, el procedimiento preferente será aplicable cuando, tratándose de las infracciones previstas en la letra a) del apartado 1 del artículo 53, se diera alguna de las siguientes circunstancias:

- a) riesgo de incomparecencia.
- b) el extranjero evitara o dificultase la expulsión, sin perjuicio de las actuaciones en ejercicio de sus derechos.
- c) el extranjero representase un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional.

En estos supuestos no cabrá la concesión del período de salida voluntaria.

2. Durante la tramitación del procedimiento preferente, así como en la fase de ejecución de la expulsión que hubiese recaído, podrán adoptarse las medidas cautelares y el internamiento establecidas en los artículos 61 y 62.

3. Se garantizará el derecho del extranjero a asistencia letrada, que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o no habla castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.

4. Iniciado el expediente, se dará traslado al interesado del acuerdo de iniciación debidamente motivado y por escrito, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de 48 horas, advirtiéndole de las consecuencias de no hacerlo así.

5. Si el interesado, o su representante, no efectuase alegaciones ni realizasen proposición de prueba sobre el contenido del acuerdo de iniciación, o si no se admitiesen, por improcedentes o innecesarias, de forma motivada, por el instructor las pruebas propuestas, sin cambiar la calificación de los hechos, el acuerdo de iniciación del expediente será considerado como propuesta de resolución con remisión a la autoridad competente para resolver.

De estimarse la proposición de prueba, esta se realizará en el plazo máximo de tres días.

6. En el supuesto de las letras a) y b) del apartado 1 del artículo 53 cuando el extranjero acredite haber solicitado con anterioridad autorización de residencia temporal conforme a lo dispuesto en el artículo 31.3 de esta Ley, el órgano encargado de tramitar la expulsión suspenderá la misma hasta la resolución de la solicitud, procediendo a la continuación del expediente en caso de denegación.

7. La ejecución de la orden de expulsión en los supuestos previstos en este artículo se efectuará de forma inmediata.

Artículo 63 bis. Procedimiento ordinario. (Añadido por la Ley Orgánica 2/2009)

1. Cuando se tramite la expulsión para supuestos distintos a los previstos en el artículo 63 el procedimiento a seguir será el ordinario.

2. La resolución en que se adopte la expulsión tramitada mediante el procedimiento ordinario incluirá un plazo de cumplimiento voluntario para que el interesado abandone el territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará a contar desde el momento de la notificación de la citada resolución.

El plazo de cumplimiento voluntario de la orden de expulsión podrá prorrogarse durante un tiempo prudencial en atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, como pueden ser, la duración de la estancia, estar a cargo de niños escolarizados o la existencia de otros vínculos familiares y sociales.

3. Tanto en la fase de tramitación del procedimiento como durante el plazo de cumplimiento voluntario, podrá adoptarse alguna o algunas de las medidas cautelares establecidas en el artículo 61, excepto la de internamiento prevista en la letra e).

Artículo 64. Ejecución de la expulsión. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Expirado el plazo de cumplimiento voluntario sin que el extranjero haya abandonado el territorio nacional, se procederá a su detención y conducción hasta el puesto de salida por el que se deba hacer efectiva la expulsión. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de setenta y dos horas, podrá solicitarse la medida de internamiento regulada en los artículos anteriores, que no podrá exceder del período establecido en el artículo 62 de esta Ley.

2. Tanto en los supuestos de prórroga del plazo de cumplimiento voluntario como de aplazamiento o suspensión de la ejecución de la expulsión, lo que se acreditará en documento debidamente notificado al interesado, se tendrá en cuenta la garantía para el extranjero afectado de:

a) El mantenimiento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio español.

b) La prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de enfermedades.

c) El acceso para los menores, en función de la duración de su estancia, al sistema de enseñanza básica.

d) Las necesidades especiales de personas vulnerables.

3. La ejecución de la resolución de expulsión se efectuará, en su caso, a costa del empleador que hubiera sido sancionado por las infracciones previstas en el artículo 53.2 a) o 54.1.d) de esta Ley o, en el resto de los supuestos, a costa del extranjero si tuviere medios económicos para ello. De no darse ninguna de dichas condiciones, se comunicará al representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos.

4. Cuando un extranjero sea detenido en territorio español y se constate que contra él se ha dictado una resolución de expulsión por un Estado miembro de la Unión Europea, se procederá a ejecutar inmediatamente la resolución, sin necesidad de incoar nuevo expediente de expulsión. Se podrá solicitar la autorización del Juez de instrucción para su ingreso en un centro de internamiento, con el fin de asegurar la ejecución de la sanción de expulsión, de acuerdo con lo previsto en la presente Ley.

5. Se suspenderá la ejecución de la resolución de expulsión cuando se formalice una petición de protección internacional, hasta que se haya inadmitido a trámite o resuelto, conforme a lo dispuesto en la normativa de protección internacional.

6. No será precisa la incoación de expediente de expulsión:

a) para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, de los solicitantes de protección internacional cuya solicitud haya sido inadmitida a trámite en aplicación de la Ley 12/2009, de 30 de octubre reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, al ser responsable otro Estado del examen de la solicitud, de conformidad con los convenios internacionales en que España sea parte, cuando dicho traslado se produzca dentro de los plazos que el Estado responsable tiene la obligación de proceder al estudio de la solicitud.

b) para proceder al traslado, escoltados por funcionarios, manutención, o recepción, custodia y transmisión de documentos de viaje, de los extranjeros que realicen un tránsito en territorio español, solicitado por un Estado miembro de la Unión Europea, a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea.

Artículo 65. Carácter recurrible de las resoluciones sobre extranjeros.
(Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

1. Las resoluciones administrativas sancionadoras serán recurribles con arreglo a lo dispuesto en las leyes. El régimen de ejecutividad de las mismas será el previsto con carácter general.

2. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los recursos procedentes, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, quienes los remitirán al organismo competente.

Artículo 66. Obligaciones de los transportistas. (Añadido por la Ley Orgánica 8/2000)

1. Cuando así lo determinen las autoridades españolas respecto de las rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen en las que la intensidad de los flujos migratorios lo haga necesario, a efectos de combatir la inmigración ilegal y garantizar la seguridad pública, toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada, en el momento de finalización del embarque y antes de la salida del medio de transporte, a remitir a las autoridades españolas encargadas del control de entrada la información relativa a los pasajeros que vayan a ser trasladados, ya sea por vía aérea, marítima o terrestre, y con independencia de que el transporte sea en tránsito o como destino final, al territorio español. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

La información será transmitida por medios telemáticos, o, si ello no fuera posible, por cualquier otro medio adecuado, y será comprensiva del nombre y apellidos de cada pasajero, de su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad y tipo del mismo, paso fronterizo de entrada, código de transporte, hora de salida y de llegada del transporte, número total de personas transportadas, y lugar inicial de embarque. Las autoridades encargadas del control de entrada guardarán los datos en un fichero temporal, borrándolos tras la entrada y en un plazo de veinticuatro horas desde su comunicación, salvo necesidades en el ejercicio de sus funciones. Los transportistas deberán haber informado de este procedimiento a los pasajeros, estando obligados a borrar los datos en el mismo plazo de veinticuatro horas. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

2. Toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada a enviar a las autoridades españolas encargadas del control de entrada la información comprensiva del número de billetes de vuelta no utilizados por los pasajeros que previamente hubiesen transportado a España, ya sea por vía aérea, marítima o

terrestre, y con independencia de que el transporte sea en tránsito o como destino final, de rutas procedentes de fuera del Espacio Schengen.

Cuando así lo determinen las autoridades españolas, en los términos y a los efectos indicados en el apartado anterior, la información comprenderá, además, para pasajeros no nacionales de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo o de países con los que exista un convenio internacional que extienda el régimen jurídico previsto para los ciudadanos de los Estados mencionados, el nombre y apellidos de cada pasajero, su fecha de nacimiento, nacionalidad, número de pasaporte o del documento de viaje que acredite su identidad.

La información señalada en el presente apartado deberá enviarse en un plazo no superior a 48 horas desde la fecha de caducidad del billete. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

3. Asimismo, toda compañía, empresa de transporte o transportista estará obligada a: (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

a) Realizar la debida comprobación de la validez y vigencia, tanto de los pasaportes, títulos de viaje o documentos de identidad pertinentes, como, en su caso, del correspondiente visado de los que habrán de ser titulares los extranjeros.

b) Hacerse cargo inmediatamente del extranjero que hubiese trasladado hasta la frontera aérea, marítima o terrestre correspondiente del territorio español, si a éste se le hubiera denegado la entrada por deficiencias en la documentación necesaria para el cruce de fronteras.

c) Tener a su cargo al extranjero que haya sido trasladado en tránsito hasta una frontera aérea, marítima o terrestre del territorio español, si el transportista que deba llevarlo a su país de destino se negara a embarcarlo, o si las autoridades de este último país le hubieran denegado la entrada y lo hubieran devuelto a la frontera española por la que ha transitado.

d) Transportar a los extranjeros a que se refieren los párrafos b) y c) de este apartado hasta el Estado a partir del cual le haya transportado, bien hasta el Estado que haya expedido el documento de viaje con el que ha viajado, o bien a cualquier otro Estado que garantice su admisión y un trato compatible con los derechos humanos.

La compañía, empresa de transportes o transportista que tenga a su cargo un extranjero en virtud de alguno de los supuestos previstos en este apartado deberá garantizar al mismo unas condiciones de vida adecuadas mientras permanezca a su cargo.

4. Lo establecido en este artículo se entiende también para el caso en que el transporte aéreo o marítimo se realice desde Ceuta o Melilla hasta cualquier otro punto del territorio español. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)

TÍTULO IV

Coordinación de los poderes públicos

(Denominación modificada y reordenado por la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 67. Coordinación de los órganos de la Administración del Estado.

1. El Gobierno llevará a cabo una observación permanente de las magnitudes y características más significativas del fenómeno inmigratorio con objeto de analizar su impacto en la sociedad española y facilitar una información objetiva y contrastada que evite o dificulte la aparición de corrientes xenófobas o racistas.

2. El Gobierno unificará en Oficinas provinciales los servicios existentes, dependientes de diferentes órganos de la Administración del Estado con competencia en inmigración, al objeto de conseguir una adecuada coordinación de su actuación administrativa.

3. El Gobierno elaborará planes, programas y directrices sobre la actuación de la Inspección de Trabajo previa al procedimiento sancionador destinados especialmente a comprobar el cumplimiento del principio de igualdad y no discriminación de los trabajadores extranjeros, así como el cumplimiento efectivo de la normativa en materia de autorización de trabajo de extranjeros, todo ello sin perjuicio de las facultades de planificación que correspondan a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de ejecución de la legislación laboral.

Artículo 68. Coordinación de las Administraciones Públicas. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. La Conferencia Sectorial de Inmigración es el órgano a través del cual se asegurará la adecuada coordinación de las actuaciones que desarrollen las Administraciones Públicas en materia de inmigración.

2. Las Comunidades Autónomas que asuman competencias ejecutivas en la concesión de la autorización inicial de trabajo, deberán desarrollarlas en necesaria coordinación con las competencias estatales en materia de extranjería, inmigración y autorización de residencia, de manera que se garantice la igualdad en la aplicación de la normativa de extranjería e inmigración en todo el territorio, la celeridad de los procedimientos y el intercambio de información entre las Administraciones necesario para el desarrollo de sus respectivas competencias. La coordinación deberá realizarse preservando la capacidad de autoorganización de cada Comunidad Autónoma así como su propio sistema de descentralización territorial.

3. Con carácter previo a la concesión de autorizaciones por arraigo, las Comunidades Autónomas o, en su caso, los Ayuntamientos, emitirán un informe sobre la integración social del extranjero cuyo domicilio habitual se encuentre en su territorio. Reglamentariamente se determinarán los contenidos de dicho informe. En todo caso, el informe tendrá en cuenta el periodo de permanencia, la posibilidad de contar con vivienda y medios de vida, los vínculos con familiares residentes en España, y los esfuerzos de integración a través del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales.

4. Las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de seguridad ciudadana y orden público mediante la creación de una policía propia, podrán aportar, en su caso, un informe sobre afectación al orden público en todos los procedimientos de autorización de residencia o su renovación, referidas a extranjeros que se encuentran en España, en los que se prevea la necesidad de informe gubernativo. Tal informe se incorporará al expediente al igual que el que, en su caso, aporten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus competencias sobre seguridad pública.

Artículo 69. Apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

Los poderes públicos impulsarán el fortalecimiento del movimiento asociativo entre los inmigrantes y apoyarán a los sindicatos, organizaciones empresariales y a las organizaciones no gubernamentales que, sin ánimo de lucro, favorezcan su integración social, facilitándoles ayuda económica, tanto a través de los programas generales, como en relación con sus actividades específicas.

Artículo 70. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.

1. El Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, constituido de forma tripartita y equilibrada, por representantes de las Administraciones Públicas, de las asociaciones de inmigrantes y de otras organizaciones con interés e implantación en el ámbito migratorio, incluyendo entre ellas a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, constituye el órgano de consulta, información y asesoramiento en materia de integración de los inmigrantes. (Redactado conforme a la Ley orgánica 2/2009)

2. Reglamentariamente se determinará su composición, competencias, régimen de funcionamiento y adscripción administrativa. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 8/2000)

Artículo 71. Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. (Añadido por la Ley Orgánica 14/2003)

Se constituirá el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, con funciones de estudio y análisis, y con capacidad para elevar propuestas de actuación, en materia de lucha contra el racismo y la xenofobia.

Artículo 72. Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. (Añadido por la Ley Orgánica 2/2009)

1. La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración es el órgano colegiado adscrito al Ministerio competente en materia de inmigración, de la que forman parte las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

2. La Comisión Laboral Tripartita de Inmigración será informada sobre la evolución de los movimientos migratorios en España y, en todo caso, será consultada sobre las propuestas de Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, las previstas en el artículo 39 de esta Ley y las de contratación de trabajadores de temporada que se determinen.

3. Mediante Orden Ministerial se determinará su composición, forma de designación de sus miembros, competencias y régimen de funcionamiento.

DISPOSICIONES ADICIONALES DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO

Disposición adicional primera. Plazo máximo para resolución de expedientes. (Redactada conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. El plazo general máximo para notificar las resoluciones de las solicitudes de autorizaciones que formulen los interesados a tenor de lo previsto en esta Ley será de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas; ello, sin perjuicio del plazo máximo de 15 días naturales establecido por la normativa comunitaria en relación con procedimientos de solicitud de visado de tránsito o estancia (así como de las excepciones previstas en la misma para su posible ampliación). Transcurrido el plazo para notificar las resoluciones de las solicitudes, salvo lo dispuesto en el apartado siguiente, éstas podrán entenderse desestimadas.

2. Las solicitudes de prórroga de la autorización de residencia, la renovación de la autorización de trabajo, así como las solicitudes de autorización de residencia de larga duración que se formulen por los interesados a tenor de lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se resolverán y notificarán en el plazo máximo de tres meses contados a partir del día siguiente al de la fecha en que hayan tenido entrada en el registro del órgano competente para tramitarlas. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas.

3. Las solicitudes de modificación de la limitación territorial o de ocupación de las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo se resolverán y notificarán por la administración autonómica o estatal competente en el plazo máximo de un mes. Transcurrido dicho plazo sin que la Administración haya dado respuesta expresa, se entenderá que la solicitud ha sido concedida.

Disposición adicional segunda. Subcomisiones de Cooperación. (Añadida por la Ley Orgánica 8/2000)

En atención a la situación territorial y a la especial incidencia del fenómeno migratorio y a las competencias que tengan reconocidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía en materia de ejecución laboral y en materia de asistencia

social, y en concordancia con los mismos, se podrán constituir subcomisiones en el seno de las Comisiones Bilaterales de Cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas, en concordancia con lo que prevean sus respectivos Estatutos de Autonomía, para analizar cuestiones sobre trabajo y residencia de extranjeros que les afecten directamente.

En particular, en atención a la situación geográfica del archipiélago canario, a la fragilidad de su territorio insular y a su lejanía con el continente europeo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 de su Estatuto de Autonomía, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado se constituirá una subcomisión que conocerá de las cuestiones que afecten directamente a Canarias en materia de residencia y trabajo de extranjeros.

Disposición adicional tercera. Lugares de presentación de las solicitudes y exigencia de comparecencia personal. (Añadida por la Ley Orgánica 14/2003)

1. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio español habrá de presentar personalmente las solicitudes relativas a las autorizaciones de residencia y de trabajo en los registros de los órganos competentes para su tramitación. Igualmente, en los procedimientos en los que el sujeto legitimado fuese un empleador, las solicitudes podrán ser presentadas por éste, o por quien válidamente ostente la representación legal empresarial. Reglamentariamente se podrán establecer excepciones a la presentación ante el órgano competente para su tramitación o a la necesidad de presentación personal de solicitudes. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

2. Cuando el sujeto legitimado se encuentre en territorio extranjero, la presentación de solicitudes de visado y su recogida se realizarán personalmente ante la misión diplomática u oficina consular en cuya demarcación aquél resida. Excepcionalmente, cuando el interesado no resida en la población en que tenga su sede la misión diplomática u oficina consular y se acrediten razones que obstaculicen el desplazamiento, como la lejanía de la misión u oficina o dificultades de transporte que hagan el viaje especialmente gravoso, podrá acordarse que la solicitud de visado pueda presentarse por representante debidamente acreditado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de presentación de solicitudes y recogida de visado de estancia, tránsito y de residencia por reagrupación familiar de menores, ambos trámites podrán realizarse mediante representante debidamente acreditado.

En cualquier caso, la misión diplomática u oficina consular podrá requerir la comparecencia del solicitante y, cuando lo estime necesario, mantener una entrevista personal.

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en la normativa comunitaria que desarrolla la política común de visados en lo relativo a la posibilidad de celebrar acuerdos con otros Estados miembros de la Unión Europea a efectos de representación en terceros Estados, en cuanto a procedimientos de solicitud de visados de tránsito o estancia. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

3. Asimismo, no se requerirá la comparecencia personal en los procedimientos de contratación colectiva de trabajadores, en los supuestos contemplados en un convenio o acuerdo internacional, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el mismo.

Disposición adicional cuarta. Inadmisión a trámite de solicitudes. (Añadida por la Ley Orgánica 14/2003 y redactada conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. La autoridad competente para resolver inadmitirá a trámite las solicitudes relativas a los procedimientos regulados en esta ley, en los siguientes supuestos:

- a) Falta de legitimación del solicitante, o insuficiente acreditación de la representación.
- b) Presentación de la solicitud fuera del plazo legalmente establecido.
- c) Cuando se trate de reiteración de una solicitud ya denegada, siempre que las circunstancias que motivaron la denegación no hayan variado.
- d) Cuando conste un procedimiento administrativo sancionador contra el solicitante en el que pueda proponerse la expulsión o cuando se haya decretado en contra del mismo una orden de expulsión, judicial o administrativa salvo que, en este último caso, la orden de expulsión hubiera sido revocada o se hallase en uno de los supuestos regulados por los artículos 31 bis, 59, 59 bis o 68.3 de esta ley.
- e) Cuando el solicitante tenga prohibida su entrada en España.
- f) Cuando se trate de solicitudes manifiestamente carentes de fundamento.
- g) Cuando se refieran a extranjeros que se encontrasen en España en situación irregular, salvo que pueda encontrarse en uno de los supuestos del artículo 31, apartado 3.
- h) Cuando dicha solicitud no sea realizada personalmente y dicha circunstancia sea exigida por ley.

2. En los procedimientos relativos a solicitudes de visado de tránsito o estancia, la autoridad competente para resolver inadmitirá a trámite las solicitudes, en los siguientes supuestos:

- a) Presentación de la solicitud fuera del plazo de los tres meses anteriores al comienzo del viaje.
- b) Presentación de la solicitud en documento distinto al modelo oficialmente establecido a los efectos.
- c) No aportación de documento de viaje válido al menos hasta tres meses después de la fecha (en su caso, última fecha) prevista de salida del territorio de los Estados miembros de la Unión Europea; en el que figuren al menos dos páginas en blanco; y expedido dentro de los diez años anteriores a la presentación de la solicitud de visado.
- d) Cuando no se aporte fotografía del solicitante, acorde a lo dispuesto en la normativa reguladora del Sistema de Información de Visados (VIS) de la Unión Europea.
- e) Cuando no se hayan tomado los datos biométricos del solicitante.
- f) Cuando no se haya abonado la tasa de visado.

Disposición adicional quinta. Acceso a la información, colaboración entre Administraciones públicas y gestión informática de los procedimientos. (Añadida por la Ley Orgánica 14/2003 y redactada conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. En el cumplimiento de los fines que tienen encomendadas, y con pleno respeto a la legalidad vigente, las Administraciones públicas, dentro de su ámbito competencial, colaborarán en la cesión de datos relativos a las personas que sean consideradas interesados en los procedimientos regulados en esta Ley Orgánica y sus normas de desarrollo.

2. Para la exclusiva finalidad de cumplimentar las actuaciones que los órganos de la Administración General del Estado competentes en los procedimientos regulados en esta Ley Orgánica y sus normas de desarrollo tienen encomendadas, la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional de Estadística, este último en lo relativo al Padrón Municipal de Habitantes, facilitarán a aquéllos el acceso directo a los ficheros en los que obren

datos que hayan de constar en dichos expedientes, y sin que sea preciso el consentimiento de los interesados, de acuerdo con la legislación sobre protección de datos.

Igualmente, los anteriores organismos facilitarán a las Comunidades Autónomas la información necesaria para ejercer sus competencias sobre autorizaciones iniciales de trabajo sin que tampoco sea preciso el consentimiento de los interesados.

3. La tramitación de los procedimientos en materia de extranjería derivados del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley Orgánica, se realizará sobre una aplicación informática común cuya implantación y coordinación respecto de los restantes Departamentos implicados corresponderá al Ministerio de Trabajo e Inmigración. Dicha aplicación, garantizando la protección de datos de carácter personal, registrará la información y datos relativos a los extranjeros y ciudadanos de la Unión Europea residentes en España y sus autorizaciones, impulsará el cumplimiento de lo establecido por la legislación en materia de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y permitirá el conocimiento, en tiempo real, de la situación de las solicitudes de autorización reguladas en esta Ley por parte de los órganos administrativos que sean competentes en cada una de las fases del mismo, así como su intervención en la fase que recaiga dentro de su ámbito de competencias. Asimismo, la aplicación informática permitirá la generación de bases de datos estadísticas por las administraciones intervinientes para la obtención de la información actualizada y fiable sobre las magnitudes relativas a la inmigración y la extranjería.

En cumplimiento de lo establecido por la normativa comunitaria sobre la materia, la tramitación de procedimientos relativos a visados de tránsito y de estancia se realizará sobre la aplicación informática específicamente creada a los efectos, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que estará interconectada con la aplicación informática común, en orden a que en la base de datos de esta última conste información sobre los datos de los visados solicitados y concedidos en las Oficinas consulares o Misiones diplomáticas españolas en el exterior.

El Ministerio del Interior, de acuerdo con sus competencias en materia de orden público, seguridad pública y seguridad nacional, mantendrá un Registro central de extranjeros. Reglamentariamente, se establecerá la interconexión que, en su caso, resulte necesaria para que en la aplicación informática común conste la información que pueda repercutir en la situación administrativa de los extranjeros en España.

4. Cuando las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, intervengan en alguno de los procedimientos regulados en esta Ley, se garantizará que su participación en los procedimientos informatizados responda a estándares comunes que garanticen la necesaria coordinación de la actuación de todos los órganos administrativos intervinientes. Igualmente, la aplicación informática común dará acceso a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de autorización de trabajo a la información necesaria para el ejercicio de sus competencias, entre la que se encontrará aquella relativa a la concesión y extinción de autorizaciones de reagrupación familiar concedidas en su territorio así como de las altas en Seguridad Social de las autorizaciones de trabajo iniciales concedidas por ellas.

5. El Observatorio Permanente de la Inmigración aunará el conjunto de la información estadística disponible en materia de extranjería, inmigración, protección internacional y nacionalidad, con independencia de la Administración Pública, Departamento ministerial u Organismo responsable de su elaboración, con la finalidad de servir como sistema de análisis e intercambio de la información cualitativa y cuantitativa relacionada con los movimientos migratorios al servicio de las entidades responsables de gestionar las políticas públicas en dichas materias.

Disposición adicional sexta. Acuerdos de readmisión. (Añadida por la Ley Orgánica 14/2003 y redactada conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

A los extranjeros que, en virtud de los acuerdos que regulen la readmisión de las personas en situación irregular suscritos por España, deban ser entregados o enviados a los países de los que sean nacionales o desde los que se hayan trasladado hasta el territorio español, les será de aplicación lo dispuesto en los citados acuerdos así como su normativa de desarrollo.

Dichos acuerdos contendrán cláusulas de respeto a los derechos humanos en virtud de lo que establecen en esta materia los tratados y convenios internacionales.

En el caso de que el titular de la tarjeta azul de la U.E. concedida en España fuera objeto de una medida de repatriación en otro Estado miembro, por haberse extinguido la vigencia de la autorización originaria para permanecer en dicho Estado o por denegarse su solicitud para residir en él, se le readmitirá sin necesidad de ninguna otra formalidad, incluyendo, en su caso, a los miembros de su familia previamente reagrupados.

Disposición adicional séptima. Delimitación del Espacio Schengen. (Añadida por la Ley Orgánica 14/2003)

A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se entenderá por Espacio Schengen el conjunto de los territorios de los Estados a los que se apliquen plenamente las disposiciones relativas a la supresión de controles en las fronteras interiores y circulación de personas, previstas en el título II del Convenio para la aplicación del Acuerdo de Schengen, de 19 de junio de 1990.

Disposición adicional octava. Ayudas al retorno voluntario. (Añadida por la Ley Orgánica 14/2003)

El Gobierno contemplará anualmente la financiación de programas de retorno voluntario de las personas que así lo soliciten y planteen proyectos que supongan su reasentamiento en la sociedad de la que partieron y siempre que los mismos sean de interés para aquella comunidad.

Disposición adicional novena. Autorizaciones autonómicas de trabajo en origen. (Añadida por la Ley Orgánica 2/2009)

En el marco de los procedimientos de contratación colectiva en origen, las comunidades autónomas con competencias ejecutivas en materia de autorizaciones de trabajo podrán establecer servicios que faciliten la tramitación de los correspondientes visados ante los consulados españoles, así como promover el desarrollo de programas de acogida para los trabajadores extranjeros y sus familias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO

Disposición transitoria primera. Regularización de extranjeros que se encuentren en España.

El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá el procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del día 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión autorización de residencia o trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años.

Disposición transitoria segunda. Validez de las autorizaciones vigentes.

Las distintas autorizaciones o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en España a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley que tengan validez a la entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo para el que hubieren sido expedidas. Disposición transitoria tercera. Normativa aplicable a procedimientos en curso.

Los procedimientos administrativos en curso se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la iniciación, salvo que el interesado solicite la aplicación de la presente Ley.

**DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000,
DE 11 DE ENERO.**

Queda derogada la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, y cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Ley.

DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE 11 DE ENERO

Disposición final primera. Modificación del artículo 312 del Código Penal.

El apartado 1 del artículo 312 del Código Penal queda redactado de la forma siguiente:

Artículo 312.

1. Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de seis a doce meses, los que trafiquen de manera ilegal con mano de obra.

Disposición final segunda. Inclusión de un nuevo Título XV bis en el Código Penal.

Se introduce un nuevo Título XV bis con la siguiente redacción:

Título XV bis. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Artículo 318 bis.

1. Los que promuevan, favorezcan o faciliten el tráfico ilegal de personas desde, en tránsito o con destino a España serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.

2. Los que realicen las conductas descritas en el apartado anterior con ánimo de lucro, o empleando violencia, intimidación o engaño o abusando de una situación de necesidad de la víctima, serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

3. Se impondrán las penas correspondientes en su mitad superior a las previstas en los apartados anteriores, cuando en la comisión de los hechos se hubiere puesto en peligro la vida, la salud o la integridad de las personas o la víctima sea menor de edad.

4. En las mismas penas del apartado anterior y además en la inhabilitación absoluta de seis a doce años incurrirán los que realicen los hechos prevaleciendo de su condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público.

5. Se impondrán las penas superiores en grado a las previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio que se dedicare a la realización de tales actividades.

Disposición final tercera. Modificaciones en los artículos 515, 517 y 518 del Código Penal.

1. Se añade un nuevo apartado 6.º en el artículo 515 con la siguiente redacción:

6. Las que promuevan el tráfico ilegal de personas.

2. Se modifica el primer párrafo del artículo 517, que quedará redactado de la siguiente forma:

«En los casos previstos en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515 se impondrán las siguientes penas:»

3. Se modifica el artículo 518, que quedará redactado de la siguiente forma:

«Los que con su cooperación económica o de cualquier otra clase, en todo caso relevante, favorezcan la fundación, organización o actividad de las asociaciones comprendidas en los números 1.º y 3.º al 6.º del artículo 515, incurrirán en la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.»

Disposición final cuarta. Preceptos no orgánicos. (Redactada conforme a la Ley Orgánica 2/2009)

1. Tienen naturaleza orgánica los preceptos contenidos en los siguientes artículos de esta Ley: 1, 2, 3, 4.1, 4.3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 18 bis, 19, 20, 21, 22.1, 23, 24, 25, 25 bis, 27, 29, 30, 30 bis, 31, 31 bis, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 59 bis, 60, 61, 62, 62 bis, 62 ter, 62 quáter, 62 quinquies, 62 sexies, 63, 63 bis, 64, 66, 71, las disposiciones adicionales tercera a octava y las disposiciones finales.

2. Los preceptos no incluidos en el apartado anterior no tienen naturaleza orgánica.

Disposición final quinta. Apoyo al sistema de información de Schengen.

El Gobierno, en el marco de lo previsto en el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, adoptará cuantas medidas fueran precisas para mantener la exactitud y la actualización de los datos del sistema de información de Schengen, facilitando el ejercicio del derecho a la rectificación o supresión de datos a las personas cuyos datos figuren en el mismo.

Disposición final quinta bis. Código Comunitario de Visados. (Añadida por la Ley Orgánica 2/2009)

Las previsiones de la presente Ley en materia de visados de tránsito y estancia se entenderán sin perjuicio de lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 810/2009, de 13 de julio, por el que se establece un Código Comunitario sobre Visados.

Disposición final sexta. Reglamento de la Ley.

El Gobierno en el plazo de seis meses aprobará el Reglamento de esta Ley Orgánica.

Disposición final séptima. Información sobre la Ley a organismos y organizaciones interesados.

Desde el momento de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para informar a los funcionarios de las diversas Administraciones públicas, a los directivos de asociaciones de inmigrantes, a los Colegios de Abogados, a los sindicatos y a las organizaciones no gubernamentales de los cambios que sobre la aplicación de la normativa anterior supone la aprobación de esta Ley Orgánica.

Disposición final octava. Habilitación de créditos.

El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para hacer frente a los gastos originados por la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

Disposición final novena. Entrada en vigor.

Esta Ley Orgánica entrará en vigor a los veinte días de su completa publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

**DISPOSICIONES ADICIONALES DE LA LEY ORGÁNICA 8/2000,
DE 22 DE DICIEMBRE**

Disposición adicional primera. Código Penal.

Los Ministerios de Justicia y del Interior adoptarán las medidas necesarias para que la Comisión Técnica constituida en el seno del Ministerio de Justicia para el estudio de la reforma del sistema de penas del Código Penal, examine las modificaciones necesarias en relación con los delitos de tráfico ilegal de personas, en particular en los casos en los que intervengan organizaciones que, con ánimo de lucro, favorezcan dicho tráfico.

Disposición adicional segunda.

Se modifica el artículo 89 del Código Penal mediante la adición de este nuevo apartado:

"4. Las disposiciones establecidas en los apartados anteriores no serán de aplicación a los extranjeros que hubieren sido condenados por la comisión de delitos a que se refieren los artículos 312, 318 bis, 515.6.º, 517 y 518 del Código Penal."

**DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA 8/2000,
DE 22 DE DICIEMBRE**

Disposición transitoria primera. Validez de las autorizaciones vigentes.

1. Las distintas autorizaciones o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en España a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley que tengan validez a la entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo para el que hubieren sido expedidas.

2. Las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán conforme a la normativa vigente en el momento de la solicitud, salvo que el interesado solicite la aplicación de lo previsto en la presente Ley.

3. En su renovación, los titulares de autorización de trabajo B inicial, podrán obtener una autorización de trabajo C, y las autorizaciones de trabajo B renovado o C, una autorización permanente. Reglamentariamente se establecerá la tabla de equivalencias con las autorizaciones anteriores a la Ley.

Disposición transitoria segunda. Normativa aplicable a procedimiento en curso.

Los procedimientos administrativos en curso se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la iniciación, salvo que el interesado solicite la aplicación de la presente Ley.

Disposición transitoria tercera. Tasas.

Hasta tanto no se desarrollen las previsiones establecidas en el capítulo IV del Título II, seguirán en vigor las normas reguladoras de las tasas por concesión de permisos y autorizaciones de extranjería, así como sus modificaciones, prórrogas y renovaciones.

Disposición transitoria cuarta.

El Gobierno, mediante Real Decreto, establecerá los requisitos que permitan, sin necesidad de presentar nueva documentación, la regularización de los extranjeros que se encuentran en España y que habiendo presentado solicitud de regularización al amparo de lo previsto en el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, hayan visto denegada la misma, exclusivamente, por no cumplir el requisito de encontrarse en España antes del 1 de junio de 1999.

**DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA DE LA LEY ORGÁNICA 8/2000,
DE 22 DE DICIEMBRE**

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta ley y, en especial, el apartado 4 del artículo único del Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre. (Redactado conforme a la Ley Orgánica 14/2003)
2. Queda igualmente derogado el apartado D del artículo 5.III de la Ley 7/1987, de 29 de mayo, de tasas consulares.

DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY ORGÁNICA 8/2000, DE 22 DE DICIEMBRE

Disposición final primera. Artículos con rango de Ley Orgánica.

1. Tienen carácter orgánico los siguientes preceptos de la Ley 4/2000, según la numeración que establece esta Ley, los contenidos en el Título I, salvo los artículos 10, 12, 13 y 14; del Título II, los artículos 25 y 31.2 y del Título III los artículos 53, 54.1 y 57 a 64. Asimismo tienen carácter orgánico las disposiciones adicional segunda, derogatoria y el apartado primero de esta disposición final primera de la presente Ley, así como las disposiciones finales primera a tercera de la Ley 4/2000.
2. Los preceptos de la presente Ley, que no tengan carácter orgánico, se entenderán dictados al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.^a y 2.^a de la Constitución.

Disposición final segunda. Reglamento de la Ley.

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la publicación de la presente Ley Orgánica, aprobará el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero.

Disposición final tercera. Información sobre la Ley a organismos y organizaciones interesados.

Desde el momento de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para informar sobre la aplicación de la normativa anterior que supone la aprobación de esta Ley Orgánica.

Disposición final cuarta. Habilitación de créditos.

El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para hacer frente a los gastos originados por la aplicación y desarrollo de la presente Ley.

Disposición final quinta. Entrada en vigor

Esta Ley Orgánica entrará en vigor al mes de su completa publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA DE LA LEY ORGÁNICA 14/2003, DE 20 DE NOVIEMBRE.

Sustitución del término permiso por el de autorización.

Todas las referencias al término "permiso" incluidas en la Ley Orgánica 4/2000, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, serán sustituidas por el término "autorización".

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY ORGÁNICA 14/2003, DE 20 DE NOVIEMBRE

Disposición transitoria primera. Validez de las autorizaciones vigentes.

Las distintas autorizaciones o tarjetas que habilitan para entrar, residir y trabajar en España a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la ley que tengan validez a la entrada en vigor de la misma, la conservarán por el tiempo para el que hubieren sido expedidos.

Disposición transitoria segunda. Normativa aplicable a los procedimientos en vigor.

Los procedimientos administrativos en curso se tramitarán y resolverán de acuerdo con la normativa vigente en el momento de la iniciación.

**DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA DE LA LEY ORGÁNICA 14/2003,
DE 20 DE NOVIEMBRE**

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta ley.

**DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY ORGÁNICA 14/2003,
DE 20 DE NOVIEMBRE**

Disposición final primera. Rango de ley orgánica.

Tendrán carácter orgánico los artículos primero y segundo, en cuanto afecten a preceptos calificados como tales en la disposición final primera de la Ley Orgánica 8/2000, así como la disposición derogatoria única de esta ley.

Disposición final segunda. Adecuación de la Administración General del Estado en el Exterior.

El Gobierno aprobará las disposiciones oportunas para adecuar la Administración General del Estado en el Exterior a las nuevas funciones que se le encomiendan en cuanto a contratación y documentación de trabajadores extranjeros.

Disposición final tercera. Adaptación reglamentaria.

El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la publicación de esta ley orgánica, adaptará a sus previsiones el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, aprobado por Real Decreto 864/2001, de 20 de julio.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente ley orgánica entrará en vigor al mes de su completa publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

**DISPOSICIONES ADICIONALES DE LA LEY ORGÁNICA 2/2009,
DE 11 DE DICIEMBRE**

Disposición adicional primera. Sustitución del término residencia permanente por el de residencia de larga duración.

Todas las referencias a los términos residencia permanente o residente permanente contenidas en el Ordenamiento Jurídico se entenderán referidas a la residencia o residente de larga duración.

Disposición adicional segunda. Reagrupación familiar de ciudadanos españoles respecto a sus familiares nacionales de terceros países.

Reglamentariamente se podrán establecer condiciones especiales más favorables, respecto de las previstas en esta Ley, para la reagrupación familiar ejercida por los españoles.

Disposición adicional tercera. Régimen de internamiento de extranjeros.

El Gobierno, en el plazo de seis meses aprobará un Reglamento que desarrollará el régimen de internamiento de los extranjeros.

Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Se añade un nuevo apartado 2 al artículo 87 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado como sigue:

2. Asimismo, los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.

Disposición adicional quinta. Modificación de la Ley, de 8 junio de 1957, del Registro Civil.

Se añade un nuevo párrafo al artículo 63 de la Ley, de 8 junio de 1957, del Registro Civil, que queda redactado como sigue:

Artículo 63.

La concesión de nacionalidad por residencia se hará, previo expediente, por el Ministerio de Justicia.

Las autoridades competentes para la tramitación y resolución de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad por residencia, para la exclusiva finalidad de resolver la solicitud presentada por el interesado, recabarán de oficio de las Administraciones Públicas competentes cuantos informes sean necesarios para comprobar si los solicitantes reúnen los requisitos exigidos en el artículo 22 del Código Civil, sin que sea preciso el consentimiento de los interesados.

En cualquier caso, el interesado podrá aportar un informe emitido por la Comunidad Autónoma a efectos de acreditar su integración en la sociedad española.

Disposición adicional sexta. Convalidación de titulaciones extranjeras.

El Gobierno adoptará las medidas necesarias para agilizar la tramitación de los procedimientos de homologación y convalidación de las titulaciones en el extranjero.

Disposición adicional séptima.

Con la finalidad de facilitar la labor de control del Gobierno por parte de las Cortes Generales, éste elaborará y remitirá anualmente un informe con el análisis cualitativo y cuantitativo de los datos analizados por el Observatorio Permanente de la Inmigración relacionados con los movimientos migratorios, y especialmente sobre los procedimientos de flujos migratorios de carácter laboral.

**DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2009,
DE 11 DE DICIEMBRE**

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley.

**DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY ORGÁNICA 2/2009, DE 11 DE
DICIEMBRE**

Disposición final primera. Preceptos con carácter orgánico.

Tendrán carácter orgánico los apartados del artículo único de esta Ley que modifican preceptos que tengan tal naturaleza con arreglo a la disposición final cuarta de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España, así como sus disposiciones adicionales, transitorias y finales.

No tiene carácter orgánico la disposición adicional quinta por la que se modifica la Ley, de 8 de junio de 1957, del Registro Civil.

Disposición final segunda. Habilitación competencial.

Los preceptos de la presente Ley, que no tengan carácter orgánico, se entenderán dictados al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.^a y 2.^a de la Constitución.

Disposición final tercera. Adaptación reglamentaria.

1. El Gobierno, en el plazo de seis meses desde la publicación de esta Ley Orgánica, dictará cuantas disposiciones de aplicación y desarrollo sean necesarias.
2. Reglamentariamente se regulará el contenido de la resolución de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, de 28 de febrero de 2007, relativa al acuerdo por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la entrada, residencia y trabajo en España, de extranjeros en cuya actividad profesional concurren razones de interés económico, social o laboral, o relativas a la realización de trabajos de investigación o desarrollo o docentes, que requieran alta cualificación, o de actuaciones artísticas de especial interés cultural. Dicha regulación deberá incluir a pequeñas y medianas empresas.

Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.